# SIEMBRA DE CONCRETO, COSECHA DE IRA

Luis Hernández Navarro

**© Luis Hernández Navarro**

Ésta es una publicación de la Fundación Rosa Luxemburgo y
Para Leer en Libertad AC.

brigadaparaleerenlibertad@gmail.com
www.brigadaparaleerenlibertad.com

Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez.
Diseño de interiores y portada: Daniela Campero

Para don Pablo González Casanova,
al maestro con cariño.

“Aprendemos, ni por primera ni por última vez, que resulta una tarea desagradecida y terriblemente larga intentar influir en el curso de la historia por medio de pequeños movimientos desde abajo. Con todo, tales posiciones minoritarias, a lo largo de gran parte de la historia humana registrada, han sido los únicos lugares honorables donde estar; tampoco fracasan siempre a largo plazo.”

**E.P. Thompson, *Powers and Names***

“El mejor método para explicar y traducir nuestro tiempo es, tal vez, un método un poco periodístico y un poco cinematográfico.”

**Juan Carlos Mariátegui, *La escena contemporánea***

## OTRO ECOLOGISMO

### Los muertos cuentan

Promover la justicia ambiental en México es una actividad arriesgada. Que lo digan si no quienes conocieron al campesino Aldo Zamora, balaceado por cuatro talabosques; que lo cuente Verónica Hernández, acosada judicialmente por Granjas Carroll; que lo platique Santiago Pérez, preso durante meses por defender el agua de las comunidades mazahuas, o Agustín Ríos, salvajemente golpeado por la policía oaxaqueña por luchar contra la operación de una mina.

Aldo Zamora, comunero tlahuica del Estado de México y defensor de los bosques, fue asesinado el 15 de mayo de 2007. Su hermano Misael quedó gravemente herido. Ambos fueron emboscados por talamontes cuando se dirigían a Santa Lucía, Ocuilán, Estado de México.

Desde 1998, Ildefonso Zamora, padre de Aldo Zamora y presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo, denunció la explotación ilegal de los bosques de su pueblo, ubicado en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Casi dos meses después del crimen, el 12 de julio de 2007, el presidente Felipe Calderón le prometió que habría justicia: "Se compromete mi gobierno, por mi conducto (dijo en aquella ocasión), a que junto con las autoridades del Estado de México persigamos sin descanso hasta dar con los culpables e imponerles el castigo

que se merecen". Meses más tarde, el 7 de enero de 2008, la Presidencia de la República envió una carta a Ildefonso en la que le señala que el caso es competencia del gobierno estatal y el presidente de la República no está facultado para intervenir de manera alguna en la resolución del mismo.

Los bosques de San Juan Atzingo se encuentran dentro del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, que alberga 2% de la biodiversidad mundial, abastece tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México y dota del líquido a los ríos Lerma y Balsas. Sin embargo, la zona de las Lagunas de Zempoala-Huitzilac está severamente amenazada por la tala ilegal.

Aldo Zamora es uno más de los activistas ambientales víctimas de la represión. En un recuento provisional a propósito de la criminalización de la protesta en México, la red Todos los Derechos para Todos documentó en los últimos dos años, al menos 41 casos de agresiones policíacas, detenciones arbitrarias, amenazas, hostigamiento y asesinato contra defensores.

En mayo de 2009 fueron brutalmente desalojados por la policía oaxaqueña, integrantes del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo y de la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del valle de Ocotlán, que protestaban contra una explotación minera. Cinco de sus miembros están acusados de los delitos de lesiones, despojo y ataque a las vías generales de comunicación.

El agosto de ese mismo año fueron detenidos Francisco Estrada Castro y Luis Gutiérrez Montiel por

dos personas vestidas de civil con armas largas. Ellos son opositores a la instalación de un basurero a la entrada de La Mina, en San Antonio La Isla, Estado de México, porque no cumple con las normas ambientales. Cerca del pueblo, según testigos, había efectivos de la policía estatal.

Quienes son agredidos defienden su agua, sus bosques, sus recursos naturales, sus comunidades, su biodiversidad, su salud, su tierra y territorio frente a la voracidad depredadora de empresas inmobiliarias, plantas procesadoras de basura, desarrollos turísticos, mineras trasnacionales, complejos agroindustriales, talabosques, compañías farmacéuticas y proyectos hidroeléctricos.

Con regulaciones ambientales débiles y autoridades gubernamentales corruptas, con tratados comerciales (que como parte de las ventajas comparativas ofrecen la destrucción impune del ambiente), los grandes consorcios multinacionales tienen licencia para devastar y con frecuencia, disponen del uso de la fuerza pública para acallar la resistencia de las comunidades afectadas.

La inmensa mayoría de estas luchas se libran en el campo. Sus protagonistas principales son campesinos, indígenas y asentados en poblaciones rurales o semirrurales, asociados en ligas de resistencia de reciente creación. Sin embargo, salvo raras excepciones, no participan en ellas ni organizaciones campesinas tradicionales ni partidos políticos. Mucho menos los cínicos (del Partido Verde) quienes defienden los tucanes y piden la pena de muerte para seres humanos.

Esta resistencia forma parte de lo que Joan Martínez Alier ha llamado *el ecologismo de los pobres*. Como

señala el economista catalán, las movilizaciones rompen con el falso mito de que la defensa y conservación del ambiente son una especie de lujo para las sociedades ricas. Por el contrario, son uno de los principales terrenos de confrontación social actual.

Según Martínez Alier, muchos de los conflictos sociales de hoy, y en la historia, tienen un contenido ecológico, al intentar los pobres mantener bajo su control los servicios y recursos ambientales que necesitan para su vida, frente a la amenaza de que pasen a ser propiedad del Estado o propiedad privada capitalista. A veces los actores de tales conflictos son todavía reticentes a llamarse ambientalistas o ecologistas que, por otro lado, son términos recientes en la historia social. Los pobres luchan contra los impactos ambientales que los amenazan, convirtiéndose en defensores de los ecosistemas al luchar por sus tierras, su patrimonio, su cultura, su paisaje y su lugar de habitación.

Se trata de otro ecologismo. El ecologismo de los pobres es parte central del movimiento por la justicia ambiental. Frente al despojo de parte de actores privados o del Estado de los recursos ambientales comunitarios, y ante los efectos de la devastación ambiental en la vida y territorios producidos por la voracidad capitalista reivindica derechos sociales.

Ante el desmantelamiento y la apropiación ilegítima de lo común en nombre de la modernización y el desarrollo por consorcios, empresarios y políticos, demanda poner por delante el verdadero interés público. Frente a la invocación de los derechos de propiedad por

parte de los nuevos colonizadores esgrime la existencia de derechos sociales y colectivos.

Estas movilizaciones (y la represión en su contra) están presentes en todo el país. Según la red Todos los Derechos para Todos, se han producido violaciones a los derechos humanos contra ambientalistas en el plan turístico de la sierra Tarahumara, la construcción de las presas El Tigre y La Cabeza, el Centro Industrial para el Manejo de los Residuos Industriales y Disposición Final (Coahuila); el proyecto de la hidroeléctrica en La Parota (Guerrero), el confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán (Hidalgo), la edificación de plantas de etanol en Oaxaca y Veracruz.

La defensa del ambiente por los pobres es, en México, una actividad peligrosa. Se trata de un riesgo que no se puede ignorar.

## El desastre ambiental

La modernización neoliberal en México ha tenido efectos devastadores para la mayoría de la población, el medio ambiente y los recursos naturales. Dos caras de la misma moneda: esa modernidad ha levantado unas cuantas islas urbanas de lujo y prosperidad que concentran infraestructura y seguridad pública, rodeadas por enormes territorios donde los servicios son escasos o inexistentes. El Estado ni quiere ni puede utilizar las herramientas para regular los excesos del mercado y cumplir sus funciones.

La industria mexicana cambió con la llegada de las primeras maquiladoras a la frontera norte a finales de los

sesenta, favorecidas por las facilidades de importación de materias primas y los incentivos fiscales. La entrada de México al GATT en 1986 y a la OMC se vieron como la salida a la crisis de la deuda externa. La firma del TLCAN y la devaluación del peso frente al dólar reforzaron la conversión de México en lo que Carlos Monsiváis llamó Maquilatitlán y Taiwanajuato.

Las regiones fronterizas donde se instalaron las plantas maquiladoras tuvieron un crecimiento anárquico y sufrieron un severo colapso ambiental. La ausencia de medidas eficaces para mantener niveles dignos de conservación del medio ambiente provocó un acelerado deterioro de la calidad del agua y el aire a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Según Miriam Alfie Cohen y Luis H. Méndez, entre los saldos ambientales del proyecto maquilador se encuentran: las descargas de aguas residuales, domésticas e industriales, al río Bravo; la emanación de gases tóxicos y metales pesados en el área del "triángulo gris", formado por las fundidoras de Sonora y Arizona; los proyectos de construcción de basureros nucleares y desechos tóxicos cercanos al río Bravo y, el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos, muchos de ellos enterrados clandestinamente en territorio mexicano.

La entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 dejó a México sin su principal ventaja comparativa para atraer capitales: la promesa de mano de obra barata. El gigante asiático ofreció una mano de obra cercana a los 75 centavos de dólar la hora, contra los 2.7 dólares que se pagaba en México.

Con ello, el modelo maquilador entró en una grave crisis. La manufactura bajó su participación en el PIB, del 19% (en 2000) al 17% (en 2005). Según Carlos Palencia, director del Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, en 2005 se redujo 50% personal y activos. Con la crisis de 2008 multitud de empresas dejaron México y se fueron a China. Sin embargo, nadie se hizo cargo de levantar el tiradero y de reparar la destrucción que las plantas de ensamble dejaron a su paso.

La desbocada carrera por firmar tratados de libre comercio no dio resultados prácticos para hacer crecer la economía. Por el contrario, arrojaron un saldo lamentable. De los 45 países con los que México tiene tratados de libre comercio, hay déficit comercial con 32.

En los hechos, y sin declararlo públicamente, para que grandes trasnacionales invirtieran, el gobierno ofreció una desregulación ambiental absoluta, un cerrar los ojos ante la violación de las leyes ecológicas existentes.

La especulación inmobiliaria, la edificación irregular de unidades habitacionales innecesarias y de pésima calidad, la construcción de carreteras, supervías, aeropuertos y libramientos, y todo tipo de megaproyectos avanzan sin el menor cuidado de defender el medio ambiente, con la complacencia de las autoridades. Proliferan los Estudios de Impacto Ambiental hechos a modo de los grandes intereses privados, al margen de que se consulte a las comunidades rurales y los pobladores de los barrios.

La gran urbe crece desbocadamente. En *Planeta de ciudades miseria,* Mike Davis advierte: "la ameba gigante que es la Ciudad de México después de haberse tragado

a Toluca, está extendiendo los seudópodos que acabarán por abarcar gran parte de México central, incluyendo a las ciudades de Cuernavaca, Puebla, Cuautla, Pachuca y Querétaro para formar una única megalópolis que para mediados del siglo XXI tendrá una población aproximada de 50 millones de habitantes (alrededor del 40 por ciento del total nacional)".

Como no existe en México ningún tipo de autoridad pública que realmente obligue a las grandes empresas a responsabilizarse de los millones de toneladas de productos no biodegradables que producen o introducen en el país, han escalado por toda la República nuevas formas de acumulación de basura sólida cada vez más tóxica. La ley federal de manejo integral de residuos sólidos es, en los hechos, letra muerta; prácticamente ningún municipio en el país cumple con los procesos de separación, reciclaje y reutilización al que obliga.

En la era de la basura trasnacional, donde los desechos plásticos y químicos no se pudren ni tampoco pueden quemarse, los basureros se han vuelto un severo problema, rodeando a las grandes ciudades crecen como hongos. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, solamente nueve de 900 tiraderos en el país cumplen con las regulaciones medioambientales. En cambio, hay 650 potencialmente peligrosos tiraderos al aire libre y más de 200 depósitos cubiertos.

El desastre ambiental ha adquirido proporciones mayúsculas. Maquiladoras, desarrollos turísticos, nuevos centros poblacionales y de explotación petrolera degradan la ecología a niveles cada vez más dramáticos. Los

mantos freáticos están agotados y enfermos por la urbanización y la agricultura comercial destinada a la exportación. La calidad del agua de la mayoría de los ríos es deplorable. Simultáneamente florecen campos de golf, unidades habitacionales de lujo, grandes *malls*, clubes deportivos y parques acuáticos.

Se ha intensificado la privatización de los servicios públicos de recolección, transferencia y disposición final de basura. Por doquier se apilan toneladas de desechos tóxicos y no biodegradables: plásticos, baterías eléctricas, llantas, sustancias químicas nocivas y desechos industriales. Aunque hoy están prohibidos, subsisten cementerios clandestinos de askareles —sustancias altamente tóxicas y peligrosas que en el pasado se utilizaron como aislantes y refrigerantes en transformadores y equipos eléctricos. Sus efectos son crónicos, persistentes. Pueden ocasionar cáncer y afectar el sistema hormonal.

El apetito de las grandes empresas mineras avanza con voracidad inaudita y prácticamente sin cortapisa, sobre recursos naturales protegidos y sobre los territorios comunitarios. Simultáneamente, la pérdida de bosques nacionales y de biodiversidad es una de las más altas del mundo.

Después de la fuga de las maquiladoras al dragón asiático a partir de 2001, el país vive hoy un repunte de la inversión manufacturera. La mano de obra china se ha encarecido en 119% en los últimos 5 años y América del Norte es una región donde los energéticos industriales son baratos y su abasto está garantizado. Hay más de 30 *clústers* en México (concentraciones geográficas de

empresas especializadas para actuar en conjunto provocando aumento de la productividad) como el aeroespacial de Querétaro, inaugurado con la llegada de Bomardier en 2005. Mazda y Sumitomo están planeando invertir 500 millones de dólares en una planta de autos que comenzará operaciones en 2012, que fabricará vehículos para América Latina.

Por supuesto, esta nueva fase de despegue manufacturero está acompañada de todo tipo de abusos medioambientales. En Jalisco y en Sonora se quiere despojar a las comunidades de su agua o inundar sus territorios para construir presas que abastezcan a los nuevos inversionistas.

El maíz de México no sólo ha sido sistemáticamente atacado por el libre comercio, que se ha dedicado durante los últimos veinte años a destruir la soberanía alimenticia del país, sino también ha sido agredido en el plano biológico, por el modo en que se ha permitido la introducción de semillas transgénicas estadounidenses en los campos mexicanos, propiciando la contaminación de las semillas nativas.

De la mano de esta crisis ambiental camina una crisis sanitaria de grandes proporciones. El surgimiento de la gripe AH1N1 de los chiqueros industriales porcinos de Perote, Veracruz, fue apenas una señal de alerta. Los centenares de basureros urbanos son enormes incubadoras de graves enfermedades. Los polos de desarrollo industrial sin regulación son caldo de cultivo para el surgimiento de mutaciones genéticas, leucemia, y anencefalia.

## La resistencia

La relación ambiental existente entre las supuestas elites modernizadoras y el pueblo llano puede ser caracterizada como el cobro de una vieja deuda ecológica colonial.

La deuda ecológica es la deuda que los países del Norte tienen con los países del Sur por el expolio de sus recursos, por los daños ambientales no reparados, por la ocupación gratuita o mal pagada de su espacio para depositar residuos, por las consecuencias que están sufriendo debido al cambio climático y otros contaminantes y por la pérdida de soberanía.

La deuda ecológica colonial interna describe una relación desigual y asimétrica que las élites y sus empresas tienen con comunidades rurales y barrios populares. En las zonas rurales se abastecen de agua, materias primas y energía, al tiempo que las despojan de sus tierras y territorios; a cambio regresan a esas comunidades toneladas de basura tóxica y agua contaminada, mientras destruyen la producción local y el tejido social.

Esta devastación enfrenta día a día una fuerte resistencia de quienes se han convertido en nuevos damnificados. Pueblos, comunidades, ciudadanos, científicos y organizaciones populares se oponen a una modernización que expropia sus bienes, secuestra sus conquistas, viola sus derechos humanos, los excluye y daña. Una modernización que tiene al mercado como dios y amo.

Es así como en todo el país han surgido multitud de luchas contra los basureros tóxicos, la construcción de nuevas presas, la contaminación de los ríos, la explo-

tación minera, los desarrollos inmobiliarios, el desvío de agua hacia centros urbanos, la construcción de carreteras y campos de golf, así como a la destrucción de manglares.

Muchas de estas protestas permanecen en el plano local. Sus protagonistas han retomado y reinventado los lazos de cooperación y solidaridad que la modernización salvaje ha tratado de sustituir por la competencia y el individualismo.

En las luchas socioambientales tienen una composición plural. Participan hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, maestros y campesinos, profesionistas y artesanos, indígenas y mestizos, pertenecientes a partidos políticos y ciudadanos de a pie, creyentes y ateos.

Algunas expresiones de descontento se han dado a sí mismas plataformas organizativas regionales y, en algunos casos, nacionales. Es el caso de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, quienes rechazan la construcción de nuevas presas o se oponen a la minería salvaje.

Con harta frecuencia, estas luchas están protagonizadas por comunidades indígenas. Su tejido social, su cosmovisión y su identidad son herramientas fundamentales para organizar la resistencia. Su visión, secular o reinventada, sobre la tierra y la naturaleza, a la que consideran madre, les permite elaborar un discurso político para enfrentar el desafío de la devastación ambiental que encaja con su sentido común, y que, en parte, se expresa en el concepto del buen vivir y en la reivindicación de los derechos de la naturaleza.

Según el dirigente indígena zapoteco Aldo González, "los pueblos indígenas se han caracterizado por tener un respeto a la naturaleza. Eso significa hoy que sus territorios son los lugares que las empresas trasnacionales anhelan. Me refiero a la minería, agua, biodiversidad y otras cosas que han sido resguardadas en las tierras de las comunidades indígenas. Las compañías trasnacionales han puesto los ojos en los territorios de los pueblos para hacer explotaciones, hacer presas, sacar la biodiversidad, para lograr el control del maíz a través de los transgénicos. Son las comunidades indígenas las que están sufriendo más agresiones porque cuentan con esas riquezas. Para ellas no son riquezas que deban convertirse en dinero, pero las empresas sí las quieren para hacer dinero. Para las comunidades esas riquezas les dan la vida. Esa vida es la que se les quiere arrebatar para favorecer a los grandes capitales".

Los pueblos indios han chocado frontalmente con el gobierno alrededor de la cuestión ambiental. El dirigente indígena de Cherán, Salvador Campanur, lo advirtió claramente en el encuentro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad con el presidente de la República. "Nosotros (le dijo al presidente Felipe Calderón) cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes; mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras trasnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados; con esto destruyen el futuro de nuestros hijos."

La dinámica interna de las luchas ambientales es siempre compleja. Usualmente se entrelazan entre sí diversas demandas. Por ejemplo, las protestas contra los tiraderos de basura son, simultáneamente movilizaciones en defensa del agua que los desperdicios contaminan, por la salud pública y en contra del despojo de espacios comunitarios. Inevitablemente, están fuertemente marcadas por las coyunturas políticas, electorales o no, tanto locales como nacionales.

Parte significativa de estos núcleos de descontento popular se identifican en *la otra campaña* zapatista. Algunos otros se han sumado a la cruzada que encabeza Andrés Manuel López Obrador, o han tratado de acercarse a ella para hacerse visibles y potenciar su capacidad de negociación. Muchos más se rascan con sus propias uñas.

Aunque reiteradamente los gobiernos estatales los han acusado de ser instrumento al servicio de partidos políticos de oposición, estos casi no participan en la mayoría de esos movimientos. En sus filas sí hay antiguos militantes que se han alejado de la política institucional, profundamente decepcionados. “Na’ más se acercan al nopal cuando hay tunas”, dicen con amargura quienes pelean abajo.

Las mujeres desempeñan un papel fundamental en estas luchas. Con frecuencia son la columna vertebral de las organizaciones. Es común encontrar antiguos líderes sociales de larga trayectoria en distintos tipos de movilizaciones, y no escasean en sus filas los maestros democráticos.

Los canales de interlocución que estos movimientos tienen para resolver sus demandas son, generalmente, escasos o inexistentes. No tienen con quién tratar en las distintas instancias gubernamentales. Con frecuencia, las administraciones públicas de todos los signos políticos les han respondido con la represión.

Este nuevo tejido asociativo es expresión de la crisis del modelo autoritario que se vive en todo el país. Es un nuevo personaje que en el contexto de la actual crisis ha irrumpido en la vida política nacional con vigor y protagonismo inusitado.

## El Fuenteovejuna ambiental

Las expresiones de descontento social alrededor del deterioro del medio ambiente brotan por todo el país como si fueran burbujas en una olla de agua a punto de hervir. Ciudadanos rabiosos se enfrentan con la policía cada vez con mayor frecuencia. Se hacen justicia por su propia mano, en ocasiones, de manera violenta. El malestar aflora lo mismo en las ciudades que en el campo. Igual lo protagonizan mujeres que hombres; jóvenes y ancianos. Es el regreso de Fuenteovejuna.

En este clásico del teatro de Lope de Vega, escrito en 1612, el pueblo se levanta contra el abuso de poder de la autoridad. La multitud, harta del comportamiento abusivo del comendador, toma por la fuerza la casa de la Encomienda y asesina al funcionario. Su objetivo no es hacerse del gobierno, ni cambiar el sistema, sino reparar los agravios y hacerse justicia. Su fuerza nace de la indig-

nación colectiva. La responsabilidad del ajuste de cuentas es de todos. Cuando, al final de la obra, el juez interroga buscando culpables, los pobladores responden: "¿Quién mató al comendador?/ Fuente Ovejuna, señor,/ ¿Quién es Fuenteovejuna?/ Todos a una, señor".

La lista de pequeñas Fuenteovejunas ecológicos, surgidas en meses recientes, es enorme.

En Zimapán (Hidalgo), integrantes del movimiento Todos Somos Zimapán trataron de impedir la entrada de los primeros camiones con residuos tóxicos para ser depositados en la planta de confinamiento de la empresa Bothiñá. Los vehículos fueron protegidos por elementos de la Policía Federal Preventiva, que encañonaron a madres de familia.

A comienzos de 2005, pobladores de La Gloria y Xaltepec, a los que se sumaron 10 comunidades más, se unieron para protestar, por medio de firmas, en contra de la expansión de Granjas Carroll. Hicieron asambleas y marchas. El 26 de abril de 2005 los habitantes de Totalco realizaron la primera marcha en contra de la trasnacional. La maestra de tele-bachillerato Verónica Hernández Argüello escribió un comunicado que fue leído en la radio local, llamando a defender el medio ambiente. La empresa la demandó legalmente por difamación, igual que hizo con otros vecinos. En total, ocho ambientalistas sufrieron procesos legales en su contra. Tres de ellos —Verónica incluida—, fueron detenidos y obligados a pagar una fianza de 8 mil pesos para salir de la cárcel. Los resultados están a la vista: presumiblemente de la alquimia industrial de esos chiqueros nació la epidemia de la gripe porcina.

Brotes de descontento contra la minería a cielo abierto han aflorado por todo el territorio nacional en años recientes. Habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la destrucción del territorio, los daños a la salud y los contratos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. Las empresas hacen trampa. Ejidatarios de Atotonilco, municipio de San Juan del Río, Durango, denunciaron en noviembre de 2011 que directivos de la empresa minera canadiense Castlegold Corp falsificaron el acta de la asamblea ejidal para que las autoridades agrarias les dieran permiso de extraer oro en la mina Real del Oro. Con frecuencia, el gobierno ha reprimido a los inconformes.

El despojo y la depredación de los recursos naturales de los pueblos del surponiente del estado de Morelos, avanza de la mano de la urbanización salvaje. La fiebre constructora y la especulación inmobiliaria enajenan tierras, contaminan aguas y transforman a los campesinos de generaciones en albañiles temporales, desempleados de por vida e inquilinos hacinados en casas sin servicios. Esta ola constructora quiere convertir a la región de vocación agrícola en una ciudad dormitorio, edificando miles de viviendas en una zona donde se ubican mantos acuíferos. Para ello cuenta con la complicidad de las autoridades locales, que han facilitado licencias irregulares de uso del suelo a varias compañías. La siembra de varillas y concreto donde antes se cultivaban hortalizas, caña de azúcar y maíz ha cosechado la ira entre los pobladores

de la región. Manifestaciones, *toma* de carreteras, enfrentamientos con la policía y quema de vehículos oficiales se han sucedido una tras otras.

Morelos no es la excepción. La fiebre inmobiliaria que rodea la metrópoli ha levantado centenares de ciudades dormitorios, que son verdaderos guetos, organizadas alrededor de viviendas de interés social, pozos de agua y tiendas Oxxo. Los desarrollos se alimentan del robo de tierras de cultivo y bosques. La construcción de libramientos y gasolineras ha creado múltiples problemas a los pobladores de las comunidades sobre las que nacen esos proyectos. Por ejemplo, los acuíferos no se recargan. Todo México está atravesado por conflictos hídricos.

Detrás de estas manifestaciones de ira no hay partidos ni organizaciones políticas. Ninguna de ellas tiene un trasfondo electoral. No hay líderes reconocidos. Usualmente son espontáneas. Con frecuencia carecen de continuidad. Expresan situaciones en que la abierta expresión de desobediencia ha sido antecedida por la silenciosa e invisible acumulación de rencor social.

El politólogo estadounidense Barrington Moore proporciona una clave muy importante para explicar el surgimiento de situaciones como éstas en su libro *La injusticia, bases sociales de la obediencia y la rebelión*. Allí se pregunta por qué y en qué condiciones seres humanos con enorme capacidad para soportar sufrimiento, de repente se rebelan. Responde diciendo que, agraviados moralmente y convencidos de tener derecho a algo, rompen los lazos de obediencia porque la autoridad ha violado el

contrato social (que, explícita o implícitamente, sostiene todo ordenamiento humano).

La regularidad, extensión y profundidad de estas explosiones de descontento ambiental muestran el nivel de deterioro de la cadena mando-obediencia en nuestro país. A los que están acostumbrados a mandar ya no los obedecen los que fueron educados para obedecer. Un desgaste perceptible puede observarse también en la enorme cantidad de movimientos sociales que chocan con las autoridades gubernamentales de todos los signos políticos por demandas elementales que no son atendidas por los funcionarios responsables.

En el centro de estas expresiones de malestar se encuentra el despojo que empresarios, políticos y funcionarios públicos hacen de las tierras y territorios y de los recursos naturales que son propiedad pública o propiedad social. Despojar es, según el diccionario de la Academia de la Lengua, "privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con violencia". Despojar, convertir en bien privado lo que es común, público o colectivo, es una vía para acumular capital.

El cóctel es explosivo. La descomposición y el desprestigio de la clase política es cada vez mayor. La severa crisis de seguridad pública ha enterrado la poca credibilidad existente en leyes e instituciones encargadas de proporcionarla. El desempleo, la carestía de la vida y las dificultades para migrar a Estados Unidos hacen que la lucha por la sobrevivencia cotidiana sea cada vez más difícil. En esas circunstancias es sumamente factible que quienes estaban acostumbrados a obedecer dejen de hacerlo.

El regreso de Fuenteovejuna no está lejos. El balance no puede ser más claro: la cuestión ambiental se ha vuelto un asunto central de la agenda nacional; el ecologismo se ha convertido en una fuerza nacional y popular.

## Cambio y continuidad

Existe en México una larga tradición de movilizaciones socioambientales y de pensamiento académico sobre cuestiones ecológicas. De hecho, un número relevante de funcionarios que atienden estas problemáticas en las instituciones y agencias gubernamentales proviene del mundo universitario o de ONG dedicadas a la defensa del medio ambiente.

La lucha contra la construcción de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, la defensa de la reserva ecológica campesina de la selva de los Chimalapas, las movilizaciones del Pacto de Grupos Ecologistas forman parte de este legado.

También integran esta tradición, las experiencias de organizaciones de productores rurales, muchas de ellas indígenas, sobre todo (aunque no exclusivamente) forestales y cafetaleras que han buscado empatar la agenda de desarrollo con la de conservación, y promovido prácticas agrícolas y forestales sustentables y/o agrícolas.

Estas empresas campesinas han encontrado en el mercado justo un aliciente para defender el medio ambiente. Mientras la lógica del mercado exige que la producción obtenga las máximas ganancias, aún a costa de empobrecer a la población o de erosionar los recursos

naturales, la lógica del mercado justo pretende establecer un nuevo tipo de relación entre los campesinos organizados y los grupos de consumidores, basada en el reconocimiento de que el precio que se paga por un cultivo debe permitir a una familia vivir con dignidad, así como que lo que se produce puede ser de la mejor calidad y cosechado en armonía con las leyes de la naturaleza.

El mercado justo rechaza que en la producción agrícola se utilice gran cantidad de insumos químicos, que con su compra descapitalizan a los campesinos. El modelo de agricultura industrializada disminuye la capacidad productiva a largo plazo, provoca la pérdida de fertilidad de los suelos, altera las cadenas naturales de control biológico de plagas y enfermedades y precipita pérdida de la diversidad. El mercado justo rechaza este modelo y estimula el desarrollo de la agricultura orgánica y la defensa del medio ambiente.

En un mundo marcado por la ruptura de las relaciones de solidaridad y la cooperación, que exige que cada persona busque su sobrevivencia de manera individual, el mercado justo promueve procesos que recuperan los principios solidarios de convivencia presentes en las comunidades indígenas. En ellos lo principal no es el mejoramiento de una persona en lo individual, sino el de todo el grupo mediante la ayuda mutua: la conservación de la comunalidad. Sin embargo, con todos los méritos que tienen, salvo raras excepciones, estas experiencias no se han planteado una plataforma de acción anticapitalista.

Más allá de las líneas de continuidad que lo unen a los anteriores movimientos por la justicia ambiental, hay,

en el ecologismo de los pobres, una ruptura. Esa ruptura proviene no sólo de su composición de clase, ni de su implantación territorial, sino de la radicalidad de su lucha y, en buena parte, de su carácter (explícito o no) antisistémico y anticapitalista. No son antisistémicos o anticapitalistas porque lo declaren sino porque su práctica está perfilada en esa orientación. La lucha contra la devastación ambiental (y el despojo asociada a ella) es una lucha contra el capital. *La otra campaña* promovida por el zapatismo fue un factor central en esclarecer esta dinámica y señalar esa orientación.

De cualquier manera, la lucha ecológica de los pobres, es hoy uno de los puntos más elaborados de un proyecto alternativo de desarrollo. Desde su conflictividad social han ido pensando no sólo en la posibilidad de otro desarrollo sino una crítica profunda de la idea misma de desarrollo.

¿Se trata de luchas periféricas? No lo son. Lo periférico está en el centro. Henri Lefevre sostenía que el espacio social no se define como el geográfico, por distancias mensurables. Lo periférico se sitúa, a veces, en el centro, o es la clave para llegar a él. Sólo los periféricos alcanzan la conciencia y el conocimiento de los centros. Ése es el caso del movimiento por la justicia ambiental.

## Sacudir el polvo del armario

Una de las conquistas del poder —decía Darío Fo— es convertir a la memoria en un armario lleno de polvo. El pujante ecologismo de los pobres en México no sólo ha

sido relativamente silenciado o relegado informativo, sino que muchos de sus dirigentes que han sido asesinados, desaparecidos o encarcelados han sido olvidados.

Víctor Manuel Toledo, una de las figuras más relevantes de la lucha ambiental en México, recordó en un artículo del año 2000 titulado *Rodolfo Montiel y el ecologismo de los pobres*, una pequeña nota publicada en *La Jornada* en 1992, en la que se dio cuenta del asesinato de Julián Vergara, líder campesino y presidente del comisariado ejidal de El Tianguis, al que se identificaba como "un ecologista que se oponía a la tala inmoderada de los bosques en el municipio de Acapulco".

En el artículo, el profesor Toledo pregunta: "¿Cuántos Julianes Vergara habrán sucumbido en su heroica defensa de los bosques, los manantiales, las lagunas y los ríos de México? Yo sueño con el día en que podamos reconstruir esas historias de ignominia y logremos rescatar del gélido silencio a los cientos, quizás miles, de héroes campesinos, tan anónimos como silvestres, que han arriesgado su vida (como lo hace una hormiga dentro de su colonia) para preservar el hábitat y los recursos naturales de la nación y del mundo, es decir, de todos los seres humanos."

Este libro, un pequeño e incompleto atlas de la memoria de la persistencia contra el pacto del silencio que oculta al país el otro ecologismo, busca recordar y rendir un homenaje a los Julianes Vergara y a las comunidades que luchan contra la devastación ambiental. Reivindica una memoria de la solidaridad hacia quienes construyen la esperanza al tiempo que quiebran los espacios de im-

punidad. Aspira a que parte de esta experiencia no quede confinada en un armario lleno de polvo.

Los casos que narra son muestras de un universo de conflictos mucho más amplio, un intento por darle visibilidad a un movimiento de largo aliento que aún se encuentra en etapa de gestación. Es también, una apuesta para servir de herramienta en la construcción de puentes, ya que, más allá del intento de muchos movimientos locales por coordinarse sectorial, estatal o nacionalmente, en lo esencial resuelven sus problemas solos. Sus dificultades para movilizarse y enfrentarse conjuntamente a las autoridades ambientales, jurídicas y a los grandes intereses empresariales del país, son enormes.

## LA LAGUNA: LA NUEVA GUERRA DEL AGUA

### La gangrena

Una pesada cadena de oro cuelga del cuello del comisario del ejido de Paraíso, en el municipio Francisco I. Madero. Vestido con camisa campirana abierta hasta la mitad del esternón y botas vaqueras, el representante campesino asegura: “No, aquí no hay problemas con el arsénico. Eso fue antes del agua potable. Aquí nadie tiene problemas”.

Sin embargo, un niño junto al pozo de agua de la comunidad difiere: “Está contaminado. Mi papá dice que si seguimos tomando esta agua nos vamos a morir”.

Y una mujer de unos cincuenta años al lado de él, remata: “Aquí, lo que le hace daño a uno es negocio para otro”.

Y al doctor José Javier García Salcedo, uno de los grandes especialistas sobre el problema del hidroarsenicismo en la región, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila entre 1990 y 1992, dedicado durante años a atender el padecimiento mortal, le preocupa lo que puede venirse en La Laguna. "Ejidos como Finisterre, San Salvador, Los Venados, Sofía, Covadonga —explica— tienen altos contenidos de arsénico. La comunidad de Otzanduri desapareció por el problema del arsénico y por la migración. El mal ha caminado. Ahora están en el centro de Francisco I. Madero. La cabecera municipal ya está contaminada."

Pero el asunto parece tenerle sin cuidado a José Luis Marrufo Álvarez, el alcalde de Francisco I. Madero entre 2003 y 2005, que antes de ocupar el puesto se ganaba la vida vendiendo un par de rejas de verduras y a raíz de su llegada al poder se volvió dueño de hoteles, farmacias, distribuidoras de llantas y gasolineras. O, a lo mejor, lo que no le gusta son los reporteros que andan preguntando sobre el asunto. Por lo menos así se lo hizo saber su hijo Juan Antonio a Juan Monreal, director de la revista *Demócrata Norte de México*: "He tenido muchas mujeres —le dijo— sólo me falta un periodista".

Pero el peligro del envenenamiento del agua potable en la región existe. Y su fantasma ha vuelto a revolotear a raíz de la decisión del gobierno federal de construir dos presas en el río Aguanaval que afectarán la recarga del acuífero principal. "Esas presas —asegura el doctor García Salcedo— son un peligro para la salud."

Otro médico, pero él, representante empresarial —Arturo Gallegos—, presidente de la Coparmex en La Laguna, explica los efectos de las presas en el ecosistema de la región comparándolo con un paciente diabético al que se le aplican torniquetes y luego se le amputan las extremidades. "Las lagunas donde antes terminaban los ríos —dice— son ahora áreas de desastre por culpa de las presas que impiden que el agua corra, son como los dedos de los pies gangrenados por la falta de circulación de sangre. ¿Qué sigue con ese paciente? Pues amputarle las piernas. Y las piernas somos nosotros, Torreón. Porque lo que sigue es la contaminación de nuestra agua. Y eso es lo que nos asusta: que el arsénico llegue a Torreón."

José Reyes Blanco, el dirigente regional de la CROM, le da la razón: "Francisco I. Madero ya tiene arsénico, San Pedro ya tiene arsénico. Aquí ocurrirá lo mismo". Y la asociación civil Mujeres por Torreón lo refrenda en un comunicado dirigido a la opinión pública en el que advierten: "Queremos hacer énfasis en el riesgo que significa el aumento de arsénico en el agua que consumimos".

La administración y el acceso del líquido vital es hoy, literalmente, un asunto de vida o muerte, de salud o enfermedad, de miseria y fortuna en la comarca.

## Dos presas

Cristóbal Jaime Jáquez, director de la Comisión Nacional del Agua (CNA) durante la administración de Vicente Fox es un personaje conocido en La Laguna. Nacido en Nazas, Durango, fue directivo de Coca-Cola, y durante seis años, director general del Grupo Industrial Lala, coloso agroin-

dustrial de la Comarca, integrado por plantas pasteurizadotas y de derivados lácteos.

El 6 de agosto de 2003, Cristóbal Jaime Jáquez anunció en la ciudad de Torreón, después de muchos rumores y discusiones públicas, que en no más de 60 días comenzaría la construcción de dos presas en la región: "Paso del Tigre" y "Cañón de la Cabeza". El proyecto, aseguró, va a resolver no sólo la problemática de las inundaciones sino la sobreexplotación de los mantos freáticos.

La declaración del funcionario polarizó de inmediato a la sociedad lagunera. Desde antes, se habían levantado ya voces pidiendo información sobre las obras hidráulicas. Más de dos meses antes, el 22 de mayo de 2003, la Coparmex había advertido en una carta abierta sobre los peligros de la desinformación y le dijo al director de la CNA: "Las presas ya no son la panacea como lo fueron en el pasado, los daños que éstas causan son casi siempre mayores a los beneficios que generan".

Y el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), argumentó el 18 de julio sus reservas a los gobernadores de Coahuila y Durango. El tema, dijeron, "toca fibras muy sensibles en el corazón de los habitantes de esta región, porque históricamente, este tipo de decisiones han alterado de manera profunda e irreversible nuestro entorno."

Los empresarios hicieron un detallado recuento de daños: la Presa Lázaro Cárdenas, construida en 1946, "provocó que nuestro acuífero perdiera 400 millones de metros cúbicos de agua al año de recarga". La Presa Cazaderos ocasionó la desaparición de los ojos de agua y

los manantiales de Viesca. La Presa Francisco Zarco, originalmente una presa reguladora, provocó el desastre de la parte baja del Nazas, a partir del Cañón de Fernández, al cerrarse las compuertas y convertirse con ello en una presa retenedora. Y concluyeron advirtiendo: "Resulta paradójico e incongruente el pensar en ampliar, y aún más, crear nuevos distritos de riego en detrimento de los ya existentes.

La CNA respondió casi nueve meses después que el proyecto no pretendía abrir nuevas tierras al cultivo, que no disminuiría el volumen de agua a transitar, pues únicamente se controlará la velocidad y el caudal a escurrir. Aseguró que "una avenida así, regulada tendrá menor velocidad, lo que redundará en que disminuya el riesgo de daños a las poblaciones y áreas aledañas, una recarga más eficiente del acuífero y un aprovechamiento más eficiente del recurso".

Pero la Comisión tiene un grave déficit de credibilidad en la región. Según Fernando Royo —entonces vicepresidente de Coparmex— dedicado a manejar Fondos de Inversión, el proyecto ha cambiado. "Hace un año —asegura— esa presa iba a retener 20 millones de m3. Pero ahora resulta que siempre no. Para nosotros la CNA no tiene autoridad moral. La CNA siempre ha estado envuelta en un mar de corrupción."

Arturo Gallegos comparte la suspicacia hacia los funcionarios: "¿Cómo poner en manos de la CNA nuestro futuro, cuando ha demostrado ser negligente, incapaz y omisa para dar cumplimiento a la Ley de Aguas nacionales?"

En sincronía con ellos, pero con más dureza Pedro Vázquez, dirigente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón A.C. (CAGTAC) afirma: "Son aves de paso. Van a durar seis años y si dejaron la laguna más seca que un esparto, a ellos les valió madres".

El pleito, pues, va en grande. Región árida, la comarca se ubica en la zona de menor precipitación pluvial (menos de 242 mm/año) y mayor evaporación del país. Los laguneros han vencido al desierto y generado una sofisticada cultura de acceso y lucha por el agua. Han transformado una zona árida en uno de los principales enclaves pecuarios y agrícolas de México. El manejo del líquido vital es central en ello.

La Laguna está formada por diez municipios del estado de Durango y cinco de Coahuila. Las corrientes principales de las que se abastecen de agua provienen de la cuenca cerrada que integran los ríos Nazas, nacido en Durango, y Aguanaval, originario de Zacatecas, así como ocho acuíferos subterráneos. Se trata de un sistema de ríos que no tienen salida al mar.

Y también, de un sistema que ha sufrido múltiples modificaciones, no siempre para bien. "La historia nos explica que aquí en esta región llamada La Laguna —recuerda Antonio Juan Marcos Villareal, presidente de la CLIP— era eso, varias lagunas que se alimentaban por dos ríos, que con sus descargas, las alimentaban cargando en el camino los acuíferos que hoy nos surten de agua." Para el también empresario Fernando Royo, esos antiguos emporios son ahora un mugrero.

Las luces de alarma se han encendido. Según el doctor García Salcedo "si encadenamos al Aguanaval como lo hicimos con el Nazas vamos a tener menos recarga. Y desde el punto de vista de la salud, con menos recarga vamos a tener menos agua y menos calidad de agua. Vamos a tener agua muy cara y problemas de salud importantes".

La guerra por el agua en la comarca es, ni más ni menos, una cuestión de salud pública.

## El negocio

¿Quién solicitó la construcción de las presas? ¿Cómo justificar una inversión de 150 millones de pesos? Según la CNA fueron los gobiernos de Coahuila, Torreón y Matamoros. Pero los dos primeros han desmentido esta petición. "¿El municipio de Torreón solicitó una obra que lo perjudica?", preguntó irónicamente su responsable de ecología a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además de las autoridades federales de la CNA, dos fueron los principales impulsores de las presas. Uno era el diputado del PRI por Durango, Ulises Adame de León, antiguo secretario de Desarrollo Rural de su estado con el gobierno de Ángel Sergio Guerrero Mier. El otro era el empresario Carlos Delgado, originario de San Juan de Guadalupe, en el municipio de Matamoros, dueño del Parque Industrial "Las Américas", que provee parques industriales para instalar plantas maquiladoras. Ambos promovieron la organización Laguneros por el Agua.

Ulises Adame de León es médico veterinario egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Protegido y auspiciado por Heladio Ramírez, el dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), forma parte de una familia de caciques que, según el periodista Juan Monreal, controlan el comercio y la tierra de San Juan de Guadalupe y Simón Bolívar.

Quienes estaban a favor de la construcción de las presas argumentaron que las obras iban a beneficiar a campesinos de Durango y que se iban a evitar las inundaciones de Matamoros. Pero, de acuerdo con el ganadero Pedro Vázquez, "la presa del Tigre es un juguete de Carlos Delgado. Este señor quiere hacer allí un parque acuícola turístico. Dice que quiere ayudar así a sus gentes. Pero el lugar es pobre agrícolamente. Es un pueblo abandonado. La mayoría de los jóvenes están en Estados Unidos".

Y, según Juan Monreal, quienes auspiciaban el proyecto tenían interés en quedarse con el agua para inundar la parte baja. "Hay, además —afirma— un viejo proyecto de llevar agua a Saltillo, que no tiene. Derivar por gravedad hasta La Rosa y luego subirla hasta la capital del estado. El proyecto está detenido. El gobernador tiene ranchos muy cerca de La Rosa, en una comunidad conocida como El Mesteño."

La CNA "niega categóricamente cualquier intención de llevar agua de los ríos Nazas y Aguanaval a la ciudad de Saltillo, Coahuila". Rechazó, también, que el objetivo de la obra sea almacenar agua. Aseguró que no habría vasos contenedores, que las presas que se construirían serán rompepicos y no contenedoras.

Pero Rodolfo Walss Aureoles, director general del Medio Ambiente del ayuntamiento de Torreón tenía sus dudas. "El temor de muchos habitantes de la Comarca Lagunera —dice— es que al estar la mayor parte del vaso de la presa del Cañón de la Cabeza en el lado de Durango, nada impedirá que durante el tiempo que el agua se encuentre almacenada el vaso, ésta se extraiga." Y, para fundamentar sus dudas, explicaba: "En una parte del estudio de impacto ambiental se dice que la presa va a permitir una disponibilidad de agua para riego. ¿Por qué dice eso? ¡Se supone que el objetivo de la presa no es el riego! Aquí está claro que sí hay una posibilidad para riego".

Magdalena Briones Navarro dirige el grupo de estudios Biodesert. En el año 2003 obtuvo el premio Milenium Internacional y ha sido merecedora de la distinción "La paca de Oro" que otorga el ayuntamiento de Torreón a sus ciudadanos distinguidos. Ella se interrogaba: ¿Por qué las presas? Y se respondía: "Como la industria más grande aquí es la producción de leche y sus derivados (cosa que yo apruebo) y aquí los mantos freáticos están sobreexplotados, sí sucediera que el acuífero que se va a recargar con mayor cuantía es el de Oriente Aguanaval, que es el de arriba, entonces sucedería que los ganaderos no tendrían que pelear las vedas de abajo porque se irían a sembrar arriba sin problemas".

"¿Por qué la presa? —se preguntaba el doctor García Salcedo?— Y contestaba indignado: ¡Hay unos méndigos que quieren aprovechar la humedad de la parte más alta! Es un negocio de unos cuantos."

Directo, el ganadero Pedro Vázquez, afirmaba: "Quieren insistir por capricho o por interés económico. Al no tener la presa no hay interés económico. Debe haber gente que ha comprado tierras alrededor. Sin agua la tierra vale apenas nada. Con agua puede valer hasta 300 mil pesos la hectárea. No es tierra para temporal ni para agostadero. No hay la lluvia para mantenerla."

Suspicaz, también, haciendo un juego de palabras con la forma en la que popularmente se nombra a la CNA —Conagua—, Fernando Royo pregunta: "¿Cuánto vale un metro cuadrado de tierra sin agua? Nada. ¿Cuánto vale Con-agua?"

Finalmente en marzo de 2007 se terminó la presa El Tigre. Dos meses después fue inaugurada. El costo estimado de la obra era de 40 millones; al final se erogaron 140 millones de pesos. Además, la obra es un desastre, pues se fracturó. La construcción de la presa Cañón de Cabeza está suspendida, aunque fuertes intereses presionan para entrar en obras.

## La hora de las noas

A 220 metros sobre el ras de la ciudad de Torreón se levanta el Cristo del Cerro de las Noas, un monumento arquitectónico que pesa 580 toneladas y mide 21.80 metros, diseñado por el escultor Vladimir Alvarado. El cerro debe su nombre a un hermoso agave del desierto: la noa o regina victoria, una planta que ha desaparecido del monte y que alguna vez habitó abundantemente. El Cerro de las Noas se quedó sin noas.

"Se acabó no sólo en el Cerro sino en la Sierra de las Noas", dice el ingeniero agrónomo Ignacio Orona, director de la Reserva Ecológica Municipal Sierra y Cañón de Jimulco, nieto de uno de los más destacados agraristas de La Laguna. "Se acabó por falta de agua después de la construcción de la Presa Zarco."

Pero este agave no sólo ha desaparecido de la zona conurbana de Torreón: está en peligro de extinción. "Lo mismo puede suceder con al menos siete especies endémicas de peces no clasificados, como la carpa del Nazas y el cachorrito del Aguanaval, así como con otras cactáceas si se construye la presa de Cañón de la Cabeza, afirma el campesino ecologista. Los peces de un río son especies únicas, frágiles, dependientes del ecosistema en el que viven.

Las noas, cuyas poblaciones se reducen a pequeñas y cada vez más escasas zonas de Coahuila y Durango tienen uno de sus últimos reductos en el territorio colindante de la presa Cañón de Cabeza. De construirse, su extinción será casi inevitable al alterar la humedad y el hábitat del entorno. Como también provocará la desaparición de ahuehuetes centenarios que viven a las orillas del río gracias a los manantiales que afloran en el mismo cauce.

Esta flora y fauna habita en la parte rural de Torreón: el Cañón de Jimulco. Un territorio olvidado y pobre que ocupa cerca de 50 por ciento del territorio del municipio, pero tiene tan sólo 5 mil habitantes; donde no hay servicios de limpieza, ni drenaje, ni suficiente agua potable; donde acequias y canales de riego se encuentran

azolvados o destruidos. Una cantera de mano de obra para las maquiladoras.

En julio de 2003 el municipio de Torreón declaró la zona de la Sierra y el Cañón de Jimulco, Reserva Ecológica Municipal (REM). "Cuando entramos en funciones —dice el director de ecología del ayuntamiento, Rodolfo Walss— nos encontramos con que había un proyecto de un grupo de ecologistas con habitantes de Jimulco que pugnaban porque esa región se convirtiera en una reserva ecológica. Estaban haciendo las gestiones con el gobierno del estado. Pero no avanzaban. Así que el municipio lo aprobó por unanimidad. Es la REM más grande del país: 60 mil has. Tiene su decreto, su plan de manejo y sus estudios técnicos. Los ejidatarios se organizaron en una asociación civil y un consejo asesor con especialistas en diversas especialidades."

El Cañón de Jimulco es testimonio vivo de la belleza de la supervivencia. Gobernadoras, mezquites, huizaches, oréganos (de la mejor calidad), lechugillas, alicoches, yucas, árnicas y damianas, conviven con sabinos, sauces y álamos, así como con pinos y encinos. En la Reserva coexisten tres ecosistemas distintos: ripario, semidesértico y bosques, cada uno, asiento de una diversidad de vida peculiar y única.

Una variedad y una riqueza vegetal que, a fuerza de necesidad de los ejidatarios y de los billetes de los fraccionadores, fue parcialmente trasladada para adornar los campos del exclusivo Club de Golf Montebello en Torreón. El área fue saqueada para servir como ornamento al esparcimiento de unos cuantos.

Según el estudio de impacto ambiental de la construcción de la presa del Cañón de la Cabeza, encargado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la obra no impacta directamente la composición, estructura y dinámica de la flora y la fauna de la reserva.

Ni Ignacio Orona ni su hermano Arturo, representante de la asociación civil en la que se agrupan los pobladores de la zona —los dos nacidos y crecidos en esas tierras—, creen lo mismo. "No conocen el río", aseguran. "Si bloquean el agua arriba es cuestión de tiempo para que esto se muera", dicen, señalando un enorme ahuehuete con sus raíces anudadas a flor de tierra. Y a continuación, como si quisieran mostrar que conocen palmo a palmo la geografía y vegetación de aquellas tierras, quitan a pie de carretera la maleza que cubre y protege de los depredadores urbanos, e insisten: "se la van a acabar".

Rodolfo Walss desconfía profundamente del estudio elaborado para Semarnat. "Es lamentable que una empresa que cobra más de medio millón de pesos muestre tan profundo desconocimiento", afirma. Y enumera sus muchas fallas: ignora la legislación ambiental; menosprecia el proyecto de la reserva ecológica; plantea falsamente que traerá oportunidades de desarrollo para los habitantes del lugar; no hay visión de cuenca en la administración del río Aguanaval; limita el estudio biótico arbitraria e injustificadamente; los investigadores desconocen la zona y mostraron su inexperiencia sobre la organización y facultades de los municipios; aseveran incorrectamente que el cauce del río está seco todo el año.

"No han hecho un estudio integral de cuenca", asegura la ecologista Magdalena Briones. "Evaluaron sólo los impactos de la obra de manera seccionada. Y los ríos en zonas desérticas no pueden manejarse así. El río, como todos los ríos del desierto, no siempre trae caudales grandes Lo que hagas en la parte alta te afecta en la parte baja."

Fernando Royo los secunda: "Nos quedan muchas dudas sobre las personas que hicieron el estudio de impacto ambiental. Sobre el conocimiento que tienen de la región. Dicen que el río es un río seco todo el año, a excepción de las épocas de venida, lo cual es parcialmente cierto. El río está seco en una parte del tramo pero donde quieren poner la presa hay afloramientos de manantiales. Aquí brota agua todo el año".

José Reyes Blanco, el líder regional de la CROM, alerta: "El Cañón de Jimulco tiene que ser protegido." Y, sin ambages, señala: "El construir la presa responde a otro tipo de intereses: intereses económicos. Sería desastroso para esta región hacerlo. El agua se nos está acabando. Nos estamos acabando la naturaleza, por intereses de poquitos, que al final de cuentas son los beneficiados".

## La burbuja

Es difícil reconocer en La Laguna de hoy el origen de su nombre. Llena de polvo, con un sol que cae a plomo, rodeada de cerros pedregosos, sus enclaves urbanos están muy lejos de hacer justicia a su denominación. Hace falta mucha imaginación para creer que allí existieron alguna vez los emporios hidráulicos que inspiraron su nombre.

Pero, en el imaginario de sus pobladores, esa riqueza hídrica efectivamente existió. Arturo Gallegos se refiere una y otra vez a ese pasado en sus intervenciones y en los oficios que dirige a las autoridades federales. "Esto se llama la Comarca Lagunera —asegura— porque había lagunas. Históricamente ésas son nuestras raíces." Y, en lo que bien podría ser una versión regional de la Génesis local, cuenta: "Allá y entonces, antes de la construcción de las presas del Palmito y Las Tórtolas, del recubrimiento de canales, de la presa de Cazaderos y de otras, libres derramaban los ríos sus aguas, en ciclos naturales, que permitían tener agricultura, llegando los excedentes hasta San Pedro de las Colonias y los manantiales de Viescas. El agua estaba a flor de tierra y teníamos una región casi lacustre en sus confines."

Ocho acuíferos subterráneos, que corren por debajo de siete municipios, dan de beber a la comarca y su ganadería y agricultura. Entre ellos sobresale el denominado Principal o "acuífero granular". Su recarga proviene, básicamente, del depósito de los escurrimientos y filtraciones del Nazas y el Aguanaval. Allí se concentran la mayor cantidad de pozos y de la actividad agrícola regional. También, en un área de esa misma fuente conocida como la "burbuja", se extrae el agua potable para consumo de los pobladores.

Una intensa actividad ganadera y la producción de forrajes han disminuido drásticamente el nivel de los mantos freáticos. Según el investigador Luis Brunett, de 1941 a 1992 se redujo entre 10 y 150 metros. En parte del municipio de Matamoros las perforaciones para sacar el

líquido pueden alcanzar los 180 metros. El agua se tiene que extraer hoy a mucha mayor profundidad que hace unos años.

Los niveles de sobreexplotación son bárbaros. De acuerdo con un estudio del Grupo Industrial La Laguna, aunque en 1997 se autorizó la extracción de 600 millones de metros cúbicos, en realidad se sacaron más de 973 millones. Existe pues un profundo desequilibrio entre los volúmenes de extracción y la recarga del acuífero.

Hay, empero, quien pone en duda esos niveles de abatimiento. El líder ganadero Pedro Vázquez asegura que "el dictamen sobre los recursos acuíferos que hizo la Conagua en La Laguna está falso totalmente. Habla de una recarga de 540 millones de metros y una extracción de mil 100 millones de metros cúbicos. Yo llevo años sin meter un metro de tubo en los pozos. Si fuera cierto ese desequilibrio de que hablan, ya nos hubiéramos secado. La verdad es que no sabemos lo que estamos recargando".

Diversos estudios muestran, sin embargo, que el bombeo de agua desde cada vez mayor profundidad provoca que el líquido vital sea de menor calidad, debido a la alta composición de sales que contiene. Arsénico, sulfatos, sodio y calcio pueden provocar graves problemas a la salud humana.

Y, en la región existe el temor de que las presas abatan aún más el nivel de los mantos freáticos. Rodolfo Walss dibuja en un cuaderno un mapa de la región lagunera y las cuencas hidráulicas. "El tema que más nos preocupa —narra mientras señala con la pluma los lugares a los que se refiere— es el de la recarga del acuífero

de la región en que vivimos. En medio del desierto hay un acuífero muy importante que es el que le da vida a esta región. Torreón, de manera natural, se alimentaba de dos ríos: el Nazas y el Aguanaval. Estos dos ríos desembocaban en la zona de las lagunas. Cuando los ríos corrían de manera natural dejaban recarga de los acuíferos. El Aguanaval es la última fuente de recarga al acuífero que tenemos. Si nos quitan este río nos quedamos sin recarga natural."

Uno de las justificaciones a favor de la construcción de la presa del Cañón de la Cabeza es la recarga de acuíferos. Sin embargo, en el estudio de impacto ambiental presentado a la Semarnat no hay información técnica que avale esta aseveración. Reconoce, en cambio, que provocará afectaciones al municipio de Torreón y agravará "el abatimiento del nivel freático".

Según Margarita Briones la CNA "no ha dicho qué acuíferos y en qué volúmenes se van a recargar. No dicen si va a ser en la parte alta o en la baja". Y, de acuerdo con Fernando Royo, "el acuífero de la zona donde se pretende ubicar la presa es distinto al que abastece de agua a más de un millón de personas en la zona conurbada. Es hasta el tramo final del Aguanaval que las aguas que circulan podrían infiltrarse al acuífero principal".

Para Rodolfo Walss no hay duda: la obra es una presa de riego disfrazada de reguladora, cuyo objetivo principal es utilizar el agua para riego.

## El desierto en el desierto

El rechazo a la construcción de las presas ha provocado una curiosa convergencia de sectores sociales y ciudadanos de diversas filiaciones políticas. Las presiones oficiales para aceptar el proyecto están a la orden del día.

La salud está bajo amenaza. El consumo de arsénico en el agua provoca alteraciones en la piel, y callosidades en las palmas y las plantas, fuera de los sitios normales de presión. Estas deformaciones avanzan a cáncer. Provocan, además, mayor incidencia de cáncer de hígado, de vesícula, y oclusión de las arterias, sobre todo de los pies, que hacen necesaria la amputación de las extremidades. Por diversas razones La Laguna es una de las primeras regiones del país en el padecimiento de esta enfermedad.

Tiene razón el padre del niño del ejido Paraíso: si el agua contaminada se bebe, los que lo hagan morirán. La construcción de las presas aumentará la posibilidad de que esa polución se produzca donde hoy no está presente.

"Comienza a haber protestas", dice Juan Monreal. "Definitivamente el sector obrero no está de acuerdo", afirma el dirigente de la CROM. "No nos oponemos a las obras en el río Aguanaval —escribe la Coparmex en su 'Manifiesto de Sustentabilidad'— lo que no aceptamos es el manejo discrecional, autoritario y oscuro que se le está dando a nuestro patrimonio hidráulico." Si a pesar de los argumentos y la movilización, las presas terminan construyéndose en La Laguna, la Coparmex pidió al presidente Vicente Fox que la bautizara con el nombre de

"Licenciado Cristóbal Jaimes Jáquez", para —dicen—, "no olvidar el nombre de quien violó la transparencia y para que asuma la responsabilidad histórica de sus acciones".

La vida de un río de millones de años se decidirá por unos cuantos, en unos pocos meses. Cuando falta, el agua es más cara que el petróleo, y son muchos los que están seguros de que escaseará. El destino de millones, su salud, su economía, su vida, en una región que supo vencer al desierto, dependerán de esta decisión.

## ¿Te acuerdas Tata?

En plena escalada de confrontación social en La Laguna estalló, en 1936, una huelga general: 20 mil trabajadores agrícolas pararon labores. Las tropas federales protegieron a los esquiroles. La sangre de los huelguistas corrió por los campos algodoneros.

A bordo del tren presidencial, el "Verde Olivo", el primer mandatario Lázaro Cárdenas se trasladó a la región con ánimo de resolver el problema. Después de escuchar a los jornaleros, el presidente decidió resolver el conflicto sindical mediante la dotación ejidal y la explotación colectiva. El michoacano escribió en su diario: "El problema ejidal de La Laguna es el más serio que resuelve hoy el régimen de la Revolución. La fuerte organización de los capitalistas propietarios y su oposición constante a que sus propiedades se reduzcan al límite señalado por el Código Agrario ha venido provocando agitaciones".

En 45 días el jefe del Ejecutivo y sus colaboradores organizaron 226 ejidos, para 34 mil 743 campesinos

en una superficie de 218 mil hectáreas de riego y pasto. Otorgó, también, un generoso programa de apoyo. Los antiguos dueños conservaron tierras de la mejor calidad.

Ignacio y Arturo Orona son los herederos de esos pioneros luchadores sociales de 1936. Forman parte de la tercera generación de los agraristas originales. Esos campesinos, según ellos, ya se acabaron. "Ya no es el ejidatario el que produce", aseguran. Sus hijos han tenido que migrar o están trabajando en las maquiladoras.

Efectivamente, las tierras ejidales de la región están en su mayoría yermas, mientras que las privadas, o las que los ganaderos han rentando, están verdes. Según la CNC, el 70 por ciento de los habitantes de los ejidos del municipio de Lerdo ya se fueron.

De acuerdo con las investigadoras Estela Martínez y Susana Suárez el 71% de las tierras ejidales son regadas con agua superficial y sólo el 29% restante es regado con agua subterránea, mientras que el 74% de las tierras de propiedad privada son regadas con agua de los acuíferos y el resto con agua superficial.

La mayoría de los productores sociales cultivan algodón, mientras los privados siembran forrajes y producen leche. En 1997 se cultivaban ya más de 34 mil hectáreas de alfalfa. Más rápido que despacio, los campesinos han ido perdiendo el control sobre los recursos hidráulicos.

El periodista Juan Monreal explica así el fenómeno: "Comenzaron a arrendar tierras, ahora rentan los derechos de agua. Entre el 70 y el 80 por ciento de las aguas

son privadas, han dejado de ser del sector social. Se rentan los derechos. Lo mismo sucede con las norias".

El ganadero Pedro Vázquez coincide con el diagnóstico. "La tierra está casi toda comprada y rentada. La ley lo permite. La superficie ejidal está entre un 70 y 80 por ciento comprada y rentada. Una hectárea con derecho a agua de río se renta sobre 2 mil 500 a 3 mil pesos por una cosecha. El ejidatario se queda con el Procampo."

"Mi padre era ejidatario, cuenta el doctor García Salcedo, tenía derecho a cultivar cuatro hectáreas. Ahora sigue teniendo derecho pero no tiene agua."

Los reportes de la CNA señalan que en 1998 se extrajeron en la región alrededor de mil 200 millones de metros cúbicos al año, a través de casi 3 mil pozos. El año pasado el comité directivo de la presa Lázaro Cárdenas autorizó el uso de 800 millones de metros cúbicos. Ese volumen de líquido vital es motivo de una fuerte disputa. Y el pleito es grande y se encuentra atravesado por las continuas denuncias de corrupción contra las autoridades responsables.

Uno de los puntos centrales en disputa es el de la titularidad de los derechos de agua.

A partir del reparto agrario de 1936, hay poco más de 33 mil personas que son derechohabientes del líquido de las presas. Pero, de acuerdo con Pedro Vázquez, esos 33 mil usuarios "se murieron, algunos heredaron los derechos o se fueron a Estados Unidos porque la agricultura no era rentable. Fueron vendiendo y rentando a raíz de la reforma al 27 constitucional, pero los derechos siguen estando en manos de los hombres viejos. Hay más dere-

chos de agua que agua. Los ejidatarios rentaron derechos de agua pero ellos siguen teniendo sus boletas y piden la misma agua. Ellos conservan el recibo. La autoridad está dando dobles derechos de agua. No hay un padrón de usuarios actualizado".

Los productores privados insisten que se regularice la titularidad de esos derechos, que hoy, por la vía de los hechos, han pasado a sus manos. Quieren que se reconozca legalmente lo que controlan *de facto*, y, por supuesto, que se cancelen los derechos originales de los ejidatarios que hoy se encuentran rentados.

Lo mismo sucede con los pozos. Cuatro de cada cinco se destinan a uso agrícola. Y son un gran negocio. Según Juan Monreal se "han otorgado muchas licencias para perforar nuevos pozos. El gobernador Enrique Martínez, por ejemplo, ha adquirido, él solo, desde el 2000, 15 permisos de explotación de agua. Es tal el abuso que el mandatario estatal tiene una licencia de derecho de agua en Saltillo y la explota en Ocampo, que además es una zona protegida".

El diputado Fernando Ulises Adame, fundador de Laguneros por el Agua, y uno de los principales promotores a favor de la construcción de las presas para defender el municipio del que proviene, concuerda con el periodista. "A la gente de Nazareno, que tiene más de diez mil habitantes, le va mal —asegura— y para acabarla de amolar le acaban de perforar, para regar 500 hectáreas, cuatro pozos en la orilla de las calizas que le va a secar sus acuíferos. Se está utilizando agua de las calizas y las calizas son la reserva de la humanidad." Quienes lo ha-

cen, añade, "son gente con mucha capacidad económica, que no aceptan regular los volúmenes de agua porque tienen establos grandes, sus parcelas grandes, sus compromisos hechos. Ahora se defienden contra los medidores que la ley les impone. Queremos regularizar los 2 mil 800 pozos que están provocando el abatimiento de los acuíferos. Pero no se dejan. No es fácil porque son intereses muy grandes".

En opinión de Pedro Vázquez parte de esta problemática proviene de la decisión de los ex gobernadores Maximiliano Silerio y Rogelio Montemayor de rehabilitar 500 norias del sector social que estaban casi abandonadas. "Nosotros les dijimos —afirma el ganadero—: Denles el dinero como si hubieran cosechado, pero no les den los pozos porque se van a vender. Hoy en día esos 700 pozos se vendieron. Eran pozos que en muchos ejidos los usaban como fuente de abastecimiento. Eran para que se bañaran el sábado las mujeres o para tomar agua. Ahora esos pozos están trabajando al 100 por ciento. Los han vendido o rentado. El daño está hecho."

Pero, de acuerdo con el vocero de los productores agropecuarios en la región la situación es aún más grave. "Hicimos —afirma— una denuncia en noviembre de 2003, de 550 pozos piratas, sin título, en la región. CFE contestó que para ellos eran 300 y pico a los que ellos estaban dando energía subsidiada sin título de concesión. Pero el gerente de Conagua regional nos contestó en una simple carta que habían revisado ellos el asunto y que no habían encontrado más de 3 pozos irregulares. Que todo lo demás estaba normal."

Entre una cosa y otra, dos hechos son claves. Uno: entre las primeras víctimas de la guerra del agua en La Laguna, se encuentran los campesinos. Y, dos: el motor que alimenta esta transferencia de recursos hídricos del sector social al privado es la producción lechera intensiva.

## Pastizales del desierto

De cada 10 vasos de leche que se beben diariamente en México, cinco son de Lala, tres de Alpura y dos del resto de las marcas. Esto crea un duopolio que controla 80% del mercado lechero, el cual produjo 10,700 millones de litros y generó ventas por cerca de 65 mil millones de pesos en el 2010. Las marcas Boreal, Nutrileche, Mileche, y ahora Parmalat, están bajo su control. A pesar de que en el país se consumen sólo 270 mililitros diarios, el coloso agroindustrial lagunero tiene cada año ingresos millonarios.

Tanta es la influencia que el grupo Lala tiene en el gobierno federal que su antiguo director general, Cristóbal Jaime Jáquez, fue nombrado director de la CNA al comienzo de la administración de Vicente Fox. Es como si en un partido de fútbol el árbitro hubiera salido de las filas de uno de los equipos que disputan el juego. La Conagua desempeña el papel clave en el manejo administrativo del agua en toda la comarca lagunera.

El ex diputado Adame sostiene que los grandes empresarios lecheros, los dueños de Lala, gente como los Aguinaga, son quienes controlan entre el 80 y el 85 % del agua de la región. “Esa gente tenía antes mucha fuerza para acercarse y gritar al presidente, pero ahora no

ha sido así. Nosotros los laguneros —dice— sí sabemos quién agarra el agua."

Parte de este éxito empresarial tiene que ver con la reconversión productiva hacia la ganadería lechera ocurrida desde la década de los cincuenta en La Laguna. Surgió así un modelo muy especializado y de tecnología de punta basado en ganado de calidad, que se desarrolla en explotaciones modernas.

Se trata de un modelo de producción que requiere del uso abundante de agua, que no considera incorporar el cuidado de los recursos naturales y obtiene el líquido a precio de ganga.

En noviembre de 2002, Fernando Ulises Adame, académico metido a la política, secretario de Desarrollo Rural de Durango, aseguró que se necesitan casi mil litros de agua para producir un litro de leche. Los ganaderos de la región respondieron inmediatamente descalificado esta afirmación.

Otros, sin embargo, piensan diferente. "A las vacas aquí se les da de comer caviar", cuenta Juan Monreal que le dijo un destacado agrónomo holandés al observar que la alimentación de los animales estaba basada en la alfalfa, uno de alimentos que requiere más agua para su cultivo. Y grandes cantidades de líquido son necesarias para la limpieza de los equipos de ordeña, el aseo de banquetas, el uso de sistemas de ventilación y el consumo de los animales.

Para abastecer un hato ganadero que, de acuerdo con Pedro Vázquez, es de 320 mil vacas en ordeña y más de 600 mil animales, con una producción aproximada de

5 y medio millones de litros de leche diarios, las tierras y el agua de La Laguna se han destinado mayoritariamente a la producción de forrajes. Son muchos los estudios que han documentado la relación entre esta actividad y el abatimiento de los mantos freáticos.

La fiebre de ganaderos e industriales por sacar agua del desierto para convertirlo en campos de alfalfa llevó a perforar en Valle Hundido numerosos pozos de ocho y diez pulgadas de diámetro, y a arrasar su vegetación para nivelar el suelo. La explotación de los mantos freáticos allí pone en peligro el área protegida de Cuatro Ciénegas y afecta la producción campesina.

La ecologista Magdalena Briones se lamenta de lo que considera una insensatez: "Convertir el desierto en un pastizal —afirma— es una locura. Aquí no hay pastizales naturales. No se miden en la producción de leche y derivados".

Para mantener a flote esa locura se necesita agua, mucho agua. "Si ves los padrones de Conagua —asegura Juan Monreal— te vas a encontrar que los lecheros de Lala han comprado casi todos los pozos que pertenecieron a los ejidos. Tienen establos de diez mil cabezas que mantener."

Pero Pedro Vázquez pone en duda que la producción de alfalfa para ganado sea un problema para la región. "Si el abastecimiento de la actividad lechera tuviera que depender de La Laguna —afirma— se tendrían que sembrar arriba de 100 mil hectáreas de forrajes. Y eso no sucede. El 70 por ciento del alimento viene de afuera. De Chihuahua, donde se siembran entre 35 o 40 mil hec-

táreas de alfalfa, y de Zacatecas. Todo el grano viene de Estados Unidos."

Sin embargo, el agua que a las vacas les sobra, a la gente le falta en municipios y comunidades de la comarca. El doctor García Salcedo asegura que "la Laguna se está acabando porque no tenemos agua. Punto. Hay poblaciones a las que no les llega el agua que debería de llegarles para tomar, y toman agua aunque sepan que es de mala calidad".

Magdalena Briones concuerda con él: "todavía hay ejidos con norias y derechos de agua —dice— sin embargo es de mala calidad. Les tienen que mandar para beber".

Pero, las dificultades del agro no terminan allí. "Durante el último año del gobierno del anterior mandatario estatal, Rogelio Montemayor —comenta Juan Monreal— se dieron al campo de Coahuila 1350 millones de pesos. Ahora se canalizaron apenas 600 millones de pesos. Por supuesto no fueron para los productores sociales sino que se concentró en los grandes ganaderos.

La justicia social que el general Lázaro Cárdenas trató de establecer a favor de jornaleros y campesinos con la reforma agraria de 1936 no existe ya más. "Los ejidos se están vaciando. Los niños lloran en la noche de hambre", dice el líder sindical de la CROM. Los hijos de los campesinos han migrado o trabajan —cuando pueden— en alguna maquiladora. "Hay malestar con los ricos que se quieren quedar con el agua", dice el doctor García Salcedo.

Durante años, se difundió en los medios de comunicación un promocional que decía: "si la leche es poca,

al niño le toca". En el corazón de la producción láctea de México, en La Laguna, habría que cambiarlo por uno que dijera: "si el agua es poca, a la vaca le toca".

## EL NEGOCIO DEL ORO AZUL

### La defensa del agua

Erri de Luca, escritor italiano, cuenta en una de las historias de su libro *El contrario de uno*: "Abstemio hasta los diecinueve años y muchos días, ni siquiera me gustaba beber bebidas con espuma frenada bajo el tapón. Encontraba gusto en las aguas, las reconocía: la de lluvia, de fuente pública, de grifo, de pozo, de nieve y además la de mayo, un agua aparte que sentaba bien a los ojos y olía a relámpagos. La bendita no la he bebido, resistí la tentación. En otros tiempos había acueductos que llenaban las jarras de las mesas, se echaba de beber desde el tubo de la cocina. Yo era abstemio, un sibarita de las aguas".

Ahora, para los amantes del agua no hay acueductos, tampoco manantiales ni acequias ni arroyos. Hay sí, agua embotellada que anuncia su procedencia en la etiqueta que la distingue. Agua que viene de Francia y de Galicia, de los Alpes y de los deshielos de las más lejanas cordilleras, aunque, por lo regular, provenga de los sistemas de agua potable de los municipios donde se embotella. Líquido que posee un logotipo. En los restoranes en los que hasta hace no muchos años se recibía a los

comensales sirviendo un vaso con agua por cuenta de la casa ahora se pregunta a los clientes que gustan beber. Y cuando estos responden que agua el mesero regresa con un envase de plástico. El agua potable se ha convertido en una mercancía más, por la que hay que gastar más de lo que cuesta un litro de leche o una bebida gaseosa. Quienes gustan de beber agua deben pagar por ella. Y las ganancias van a compañías de todos conocidos como Coca-Cola y Nestlé, que tiene, al menos, 68 marcas conocidas de agua embotellada, incluidas algunas tan sofisticadas como Perrier y San Pellegrino.

Algo similar sucede en las regiones rurales, en donde la gente sabe qué agua sirve para guisar y cuál es mejor para saciar la sed. Sin embargo, en México, hay agua de ríos y manantiales que ya no se puede beber. Las descargas industriales no controladas en sus cauces han condenado a la muerte silenciosa a decenas de personas por efecto de las enfermedades del riñón, que junto a otros padecimientos degenerativos vienen ocurriendo en las riberas del río Atoyac, en Tlaxcala, el río Santiago, en Jalisco y de los ríos Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz.

Por razones como ésa las luchas por la defensa del líquido vital proliferan por todo el país. Son, además, las protestas ambientales más relevantes en México. La problemática del agua (el oro azul) cruza muchos otros conflictos medioambientales. Con harta frecuencia, la defensa de los recursos hídricos es parte central de las movilizaciones contra los desastres de la industria petroquímica, de la oposición a la instalación de basureros, de la defensa de los bosques o de los manglares, del rechazo

a la minería a cielo abierto o la resistencia a proyectos de desarrollo urbano.

El agua es fundamental para la sobrevivencia de las comunidades. Por eso, se oponen a la construcción de presas y a la desviación de ríos de sus cauces naturales para abastecer zonas urbanas y parques industriales. Asimismo, resisten la contaminación de ríos, arroyos, lagos, mantos freáticos y manantiales que producen las industrias mineras, petroleras y papeleras, eléctricas, así como a los grandes proyectos de desarrollo agrícola industrial. Y rechazan la privatización del líquido vital a manos de empresas refresqueras y cerveceras. Por eso objetan los grandes proyectos inmobiliarios.

Según Andrés Barreda, el caso actual más notorio y consistente de resistencia popular con muchos rostros lo representa la lucha de las numerosas comunidades de la cuenca del río Papagayo que desde hace cinco años resisten las agresivas embestidas de la Comisión Federal de Electricidad (que ya han ocasionado el asesinato de cuatro campesinos), el gobierno de Guerrero y sus empresas españolas de construcción de la presa La Parota.

## Privatizar el oro azul

"Que se pague el agua hasta que duela", aconsejaba en 2005 Alberto Cárdenas Jiménez, entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también conocido como *El dos neuronas,* por su deslumbrante inteligencia.

Sus palabras no eran ni son novedosas. Han sido enunciadas una y otra vez por el Banco Mundial (BM) en

sus recomendaciones para enfrentar la crisis mundial del agua dulce. El líquido vital, asegura la institución, debe costar. El oro azul —como bautizaron los investigadores canadienses Maude Barlow y Tony Clarke— no debe ser más un bien público: es obligatorio que sea privatizado y comercializado.

El Banco procura fomentar que empresarios controlen la gestión de los servicios públicos del agua, encareciendo dramáticamente el precio que pagan por el líquido los usuarios, aprovechándose especialmente de los desesperados esfuerzos de las naciones no desarrolladas por encontrar una solución a su crisis.

Vivimos un proceso de empresarización y desamortización de instituciones y bienes hasta ahora públicos o comunes, del que la oleada de privatizaciones del agua es parte esencial. Supone una redición a escala gigantesca del cercado de las tierras comunales en la Europa de los siglos XV y XVI. Se trata de la versión "moderna" de un despojo ancestral.

Es así que ahora, para los amantes del agua, cada vez hay menos acueductos, manantiales, acequias o arroyos donde saciar su sed. Los bebederos públicos son un servicio en desuso. El agua potable se ha convertido en una mercancía más, por lo que para consumirla hay que gastar más de lo que cuesta un litro de leche o una bebida gaseosa y hasta una cerveza. Durante el año 2000 se embotellaron y vendieron 84 mil millones de litros de agua en todo el mundo. Se trata de un mercado de unos 22 mil millones de dólares anuales, en continuo crecimiento:

cada año se comercializa 7 por ciento más de agua envasada que el año anterior.

Es un negocio en forma y con un futuro inmejorable. En mayo de 2000 la revista *Fortune* señalaba: "El agua parece destinada a ser para el siglo XXI lo que el petróleo fue para el siglo XX: la codiciada mercancía que determina la riqueza de las naciones".

México no es la excepción. El mercado de agua envasada en el país tiene un valor de 32 mil millones de pesos, el doble (como señala el Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular) de lo que obtienen los organismos encargados de suministrar el líquido a domicilio. Una actividad que florece de la mano de nuestras carencias. El informe mundial del desarrollo del agua de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se avalúa la calidad del líquido vital, ubicó a México en el lugar 106 de 120 países.

Los funcionarios de la administración foxista (2000-2006) como los del gobierno de Felipe Calderón saben mucho del asunto del agua. Y no sólo porque la riegan a cada rato. Varios de ellos han estado ligados, desde hace años al negocio del agua. Vicente Fox y Lino Corrodi fueron altos ejecutivos de Coca-Cola. Cristóbal Jaime Jáquez, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue directivo de Coca-Cola, y durante seis años director general del Grupo Industrial Lala, que apoyó la candidatura presidencial de Vicente Fox. Otros fueron recompensados con jugosos negocios. Por ejemplo, Rafael Zarco Dunkerley, coordinador de Amigos de Fox, en Veracruz, recibió facilidades de Conagua, Pemex y una

recomendación del asesor presidencial, Ramón Muñoz, para obtener una concesión y explotar comercialmente el río Panuco.

En este proceso de saqueo y privatización del oro azul estos funcionarios trabajan para hacer realidad la agenda para el sector de los organismos financieros multilaterales y para favorecer los intereses de las grandes empresas privadas. La publicación *Masons Water Yearbook 2002-2003* señala que se esperaba un aumento de la participación del sector privado en agua potable del 16 al 20 por ciento, y en alcantarillado y saneamiento del 5 al 15 por ciento entre el año 2002 y el año 2015.

Por eso el ex secretario Cárdenas Jiménez, acusado por las principales organizaciones ambientalistas del país de ecocida, y respaldado por empresarios conservadores como Lorenzo Servitje, declara: "Que se pague el agua hasta que duela". Total, a él no le duele, le basta cobrar con el sufrimiento de los demás.

Pero, el agua —como reivindican muchas organizaciones sociales— es un bien común y el acceso a ella es un derecho, y nadie puede poner en venta un derecho humano. La lucha entre quienes quieren convertir un derecho humano en una mercancía y aquellos que se resisten a la privatización se ha convertido en México en un asunto de todos los días.

## Las andanzas del Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) tiene amplia experiencia financiando proyectos hidráulicos en México. Desde que en 1972

celebró el primer convenio para elaborar el Programa Nacional Hidráulico de 1975 hasta la reciente propuesta (aún no aprobada) Apoyo para la Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, la institución multilateral ha participado en más de 30 proyectos vinculados con el agua en el país.

El abanico de programas relacionados con el vital líquido en el que el BM ha intervenido es muy amplio. Abarca áreas como irrigación, sanidad y abasto. La colaboración entre el gobierno federal y el organismo ha sido muy cercana. La evaluación del Proyecto de Administración de Recursos Hidráulicos, elaborada por la institución financiera el 31 de mayo de 1996, señala: "La política nacional hidráulica y los objetivos de administración de agua en México están estrechamente de acuerdo con la política del BM".

Muchos de los préstamos que el organismo financiero ha concedido a México han puesto como condición la privatización y la recuperación del costo total del agua. En su lenguaje la "recuperación del costo" se refiere tanto a la eliminación de los subsidios gubernamentales como al incremento de los pagos que los consumidores deben hacer para tener acceso al servicio. Esto significa que las empresas operadoras encargadas de proveer de agua potable deben cubrir todos sus gastos de operación y mantenimiento mediante los cobros a los consumidores, sin recibir subvenciones gubernamentales.

El gobierno de Felipe Calderón, al igual que sus antecesores priístas, está de acuerdo con estas medidas, es decir, coincide con la privatización del sector. Según

la institución multilateral, "las autoridades mexicanas han expresado su interés en que el BM se involucre activamente en el sector en este momento crítico para la agenda de la reforma, como un instrumento para proporcionar asistencia técnica imparcial basada en buenas prácticas experiencias internacionales".

Esta estrecha colaboración con la administración del "cambio" tiene un largo camino recorrido. Apenas en el año 2002 el BM concedió un préstamo de 250 millones de dólares a la Comisión Nacional del Agua. Parte del financiamiento fue utilizado para apoyar el llamado Programa para la Modernización de los Prestadores del Servicio de Agua y Saneamiento (Promagua), creado en 2001, que es parte de un fondo de financiamiento de infraestructura que proporciona préstamos a las municipalidades para que actualicen y expandan sus sistemas de abastecimiento de agua potable, abriéndolos a empresas privadas mediante concesiones de entre cinco y 50 años.

El suministro del líquido es responsabilidad de los municipios desde el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988). La privatización de los servicios del agua en México comienza en 1992, con la Ley de Aguas Nacionales, aprobada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y ahora, como ha señalado Andrés Barreda, se encuentra en una fase de maduración muy avanzada. Ha avanzado de manera oculta, contradictoria y de forma desigual en los ámbitos rural, urbano e industrial.

Los beneficiarios directos de la privatización del servicio público del agua no son consumidores urbanos ni campesinos ni la administración pública, sino las gran-

des empresas del sector. La industria mundial del líquido está controlada por 10 multinacionales y el BM es su aliado. Tan sólo dos de ellas, Vivendi y Suez, con sede en Francia, controlan 70 por ciento del mercado mundial del denominado oro azul. Suez funciona en 130 naciones; Vivendi en más de 90 y es la empresa más grande del sector, pero Suez suministra agua a más personas en el planeta.

Estos gigantes han sentado sus reales en México. Cerca de 20 por ciento de los sistemas operadores municipales de agua de México están privatizados. Tan sólo Ondeo, la división de aguas de Suez, abastece a cerca de siete millones y medio de personas. Tiene contratos con ciudades como Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla, Laredo, Saltillo, Aguascalientes, Piedras Negras y Ciudad Acuña. En 2002 adquirió de la empresa Azurix (subsidiaria de la Enron) un juego de nuevos contratos mediante los cuales obtuvo la concesión del servicio de provisión de agua en Cancún, una parte de la Ciudad de México, León, Torreón y Matamoros.

Según Suez, los contratos mexicanos "son un paso clave hacia la consolidación del liderazgo de Ondeo en Norteamérica, lo cual representa el segundo mercado prioritario después de Europa, a la vez que un enfoque clave de crecimiento".

La nueva Ley de Aguas Nacionales, aprobada por el Congreso de la Unión en 2004, fue un paso sustancial en la privatización de la infraestructura y el suministro de agua potable. Según el BM el "nuevo marco legal constituye una oportunidad única para profundizar el proceso de

reforma" del sector. La nueva legislación afina los mecanismos para lograr la exclusión de la población del proceso de toma de decisiones sobre las políticas y la gestión real del líquido, para trasladarlo a las grandes empresas.

Es falso que la privatización aumente la disponibilidad del agua. Buen número de experiencias de traspaso de los servicios públicos de distribución de agua potable a la iniciativa privada en América Latina han sido un completo fiasco. En la conversión de un bien colectivo a monopolio empresarial, las empresas han preferido reinvertir sus ganancias no en el mejoramiento de las redes de suministro, sino en su expansión corporativa. Su lógica de funcionamiento es el lucro, no el servicio.

Los amables "consejos" del BM al gobierno mexicano son una trampa. Buscan despojarlos de un bien público para dejarlo en manos de los grandes gigantes empresariales.

## Ecocidio en el Golfo

Mal terminó 2004 en el río Coatzcoalcos, del estado de Veracruz. El 22 de diciembre reventó un oleoducto en su cauce, cerca del poblado de Nanchital, y se derramaron 5 mil barriles de petróleo. Una enorme mancha contaminante se expandió hasta su desembocadura en el Golfo de México. Al menos 60 mil personas resultaron afectadas.

Mal comenzó el 2005 en esa región veracruzana. El entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Luis Ramírez Corzo, ofreció una disculpa por los daños ocasionados por la empresa, pero, en lugar de emprender

iniciativas de fondo para repararlos, puso en marcha acciones de maquillaje sin más fin que ocultarlos.

Después de decir que se había "afectado vidas que tardan siglos en regenerarse", el entonces mandatario veracruzano Fidel Herrera Beltrán desistió de interponer una denuncia penal contra la petrolera paraestatal por el perjuicio ecológico provocado. No quiso, afirmó, "abrir un frente de confrontación con el gobierno federal". Y rechazó que su postura obedezca a la intención de negociar la sede del Proyecto Fénix para que se ubique en el corredor industrial Minatitlán-Coatzacoalcos en lugar de Altamira, en Tamaulipas.

En vez de cumplir con sus funciones de vigilancia, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dirigida en ese año por el hoy director de Conagua, José Luis Luege, se ha dedicado a encubrir a la paraestatal y a minimizar la tragedia. "Sólo murieron dos víboras de agua y una gaviota", declaró uno de sus subordinados, Adrián Vázquez (*La Jornada*, 6 de enero de 2004).

Y el secretario del Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, fiel a su política de defensa de las ganancias empresariales por sobre la conservación de la naturaleza, felicitó (¡!) a Pemex y calificó su actitud de "preocupada por el medio ambiente".

Sin embargo, las estadísticas de la misma Profepa muestran una realidad distinta. Entre 1997 y 2001 Pemex fue el responsable de 57 por ciento de las emergencias ambientales a nivel nacional con sustancias peligrosas: con mil 470 desastres ambientales. El estado de Veracruz ocupa un lamentable primer lugar en el número de "in-

cidentes": 502, seguido por Campeche con 419 y Tabasco con 391. En promedio, 70 por ciento de los desastres provocados por la petrolera ocasionan daños al suelo, 30 por ciento al agua y 10 por ciento al aire.

Según un informe de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex provocó, entre 2000 y 2010, 1190 derrames de petróleo. Sin embargo, Greenpeace sostiene que esta cifra es mayor ya que no se cuantificaron 129 derrames. Además, no sabemos con certeza cuánto petróleo derramado ha sido vertido, menos aún es posible conocer si Pemex emprendió o no acciones de saneamiento en la zona.

Apenas a finales de octubre de 2011 se produjo un derrame de oro negro en Veracruz, que contaminó, al menos, 3 kilómetros del río Cazones, que atraviesa la región montañosa del norte de Puebla y las planicies costeras del estado, para desembocar en el Golfo de México.

Según Oilwatch, el principal agente de contaminación petrolera de los litorales del Golfo de México es la transportación de combustible (hay 192 rutas petroleras en la cuenca del Gran Caribe). El segundo lugar lo ocupa la extracción del oro negro. En tercer término se encuentran los subproductos y desechos de los procesos de transformación petrolera. Finalmente la cuarta y quinta la constituyen los accidentes de buques y fugas de ductos de transportación, respectivamente.

Greenpeace denunció que de las ocho empresas que contrató Pemex para la limpieza del derrame en el río Coatzacoalcos, sólo dos cuentan con Registro Federal de Empresas Autorizadas para la Restauración de Suelos

Contaminados, de la Semarnat. Son las compañías Saint Martin y Urbis. Esta última tiene un largo historial de fraude, incumplimientos de contrato y manejo ambiental desastroso.

Además, estas ocho compañías contrataron a menores de edad y gente de la tercera edad. Y los trabajadores realizaron sus actividades sin máscaras, sin overoles impermeables, muchos de ellos descalzos y sin guantes. Laboraron jornadas de 12 horas y, en varios casos, no se les pagó el salario acordado.

Detrás de la tragedia ambiental se encuentra la decisión de los sucesivos gobiernos federales —desde Miguel de la Madrid— de desmantelar Pemex para justificar su privatización y su ordeña presupuestal. Se trata de una política que, de acuerdo con una investigación del Instituto Mexicano del Petróleo, ha provocado que más de la mitad de los 56 mil kilómetros de oleoductos que opera la empresa ya no sirvan, se encuentren obsoletos (tienen más de 30 años de funcionamiento), principalmente por los niveles de corrosión del acero que presentan.

El investigador Leonardo Meza ha documentado cómo Pemex enfrenta los conflictos sociales y ambientales que genera su operación de manera patrimonialista. Indemniza con pagos individuales a los afectados, pero no considera los daños al medio ambiente, que no son cuantificables en reclamos individuales. Pagan indemnizaciones, pero el daño se queda.

En el Golfo de México coinciden los más importantes recursos oceánicos y costeros, así como la mayor riqueza productiva de gas e hidrocarburos. Aquí se

concentran 62 por ciento de sus ríos, estuarios, lagunas costeras y pantanos. Simultáneamente se genera 90 por ciento del gas natural y más de 80 por ciento de los hidrocarburos se originan en las ricas plataformas continentales de la zona.

El problema de la irresponsabilidad de la petrolera no se encuentra sólo en los derrames de crudo. Se trata de afectaciones a la gente, a la salud, al medio ambiente y a la economía. La explotación de petróleo en México ha dejado impactos ambientales, sociales y económicos muy graves, sobre todo en zonas agrícolas y pesqueras, dejando a las personas sin otro medio de subsistencia.

En la región, la lógica de funcionamiento de la industria petrolera y la conservación de los ecosistemas no necesariamente coinciden y, con frecuencia, se afectan los segundos por privilegiar la primera. Las políticas de los gobiernos en turno en el sector, su obsesión por privatizarlo a como dé lugar y su negligencia han agravado estas contradicciones precipitando el riesgo de una catástrofe ambiental.

## Santiago Pérez Alvarado

Santiago Pérez Alvarado, defensor de derechos humanos y activista ambiental, fue detenido el 4 de julio 2005 y remitido al penal de Temascaltepec, acusado de secuestro. Acompañante y asesor de diversos movimientos en defensa del medio ambiente, promotor de la no violencia, participó en la lucha contra el desarrollo de un centro de

esquí en el Parque Nacional Nevado de Toluca, impulsado por un grupo de inversionistas y el gobierno del estado.

El abogado Pérez Alvarado es conocido como un hombre honesto, solidario y conocedor de los derechos sociales. Sensible a las injusticias y abusos contra campesinos, participó en la resistencia civil pacífica del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales del río Temascaltepec, formado por decenas de comunidades del sur del Estado de México, Guerrero y Michoacán. El comité se opuso a la construcción de la presa El Tule, mediante la cual se pretende captar agua del río Temascaltepec —clave para la economía regional— para conducirla a la planta potabilizadora Los Berros (la más grande del mundo) y, posteriormente, bombearla a la Ciudad de México y la zona conurbada.

Es en el contexto de esa lucha, iniciada hace nueve años, que se detuvo a Santiago. A pesar de que las comunidades afectadas entablaron negociaciones con el gobierno para frenar las obras, los trabajos continuaron. Agraviado, el pueblo de San Pedro Tenayac bloqueó el paso a la obra y retuvo, durante horas, a dos técnicos de la Conagua para exigir la presencia de las autoridades responsables. En ese momento el abogado se encontraba en la Ciudad de México negociando con el gobierno.

Más adelante, debido al rezago en el pago de indemnizaciones por la afectación de cultivos y tierras de las comunidades, provocada por la construcción y operación del sistema Cutzamala, se creó el Frente Mazahua por la Defensa de los Derechos Humanos. Santiago fue su asesor.

Al no obtener respuesta, la exigencia se convirtió en protesta. Las comunidades pusieron en práctica acciones de resistencia civil pacífica. Sin embargo, el gobierno del estado pervirtió a varios dirigentes y dividió al movimiento.

La detención de Santiago Pérez, por una lucha iniciada nueve años atrás pretende "limpiar el camino" para reactivar diversos proyectos de desarrollo en la región. Sin embargo, esos negocios afectan el patrimonio natural y cultural de las comunidades del Estado de México, que el abogado representa.

Finalmente, después de tres meses en prisión, y en medio de una significativa presión social a favor de su liberación, Santiago abandonó la cárcel por desvanecimiento de datos.

## Resistencia popular a la privatización del agua

Miles de personas tomaron las calles de la Ciudad de México el 16 de marzo de 2006. No fue una marcha más de las muchas que se realizan en la zona metropolitana. Los participantes rechazaron la privatización del agua y su desigual distribución.

Para que quedara claro de qué se trataba el asunto, un manifestante escribió en una pancarta: "Quítenle el agua a las Lomas de Chapultepec y mándenles pipas. Atentamente: Iztapalapa". El problema del oro azul no es pues tan sólo una cuestión de escasez del recurso sino del poder político que decide hacia dónde se dirige el que hay.

Las jornadas de lucha y reflexión realizadas en el Distrito Federal mostraron una transformación notable en el movimiento: las organizaciones populares se hicieron ecologistas y los grupos defensores del medio ambiente comenzaron a convertirse en un pujante movimiento social. Colonos pobres, campesinos, colectivos ambientalistas, equipos técnicos han construido una nueva convergencia. La lucha contra la mercantilización del agua fue la piedra de toque que facilitó esta metamorfosis.

La manifestación se desarrolló al calor de una importante victoria cultural. Aún antes de que el Foro Mundial que durante esos días se efectuó en la Ciudad de México diera inicio, la idea de que para garantizar el servicio de agua potable es necesario cobrarlo "hasta que duela", recibió un fuerte revés frente a la opinión pública. Infructuosamente, los promotores de la privatización tuvieron que declarar a la opinión pública que no es eso lo que quieren. "La privatización es un tema superado", dijo, Cristóbal Jaime, entonces director de Conagua". Pero nadie prestó oído a sus palabras. El "tema superado" se convirtió en el centro de la polémica nacional. Finalmente, la alta burocracia internacional del agua no pudo rehuir el debate. Colocada a la defensiva utilizó la radio para defender sus puntos de vista. Al hacerlo escaló y masificó la discusión.

A la marcha del 16 de marzo asistieron muchos extranjeros, pero sus integrantes fueron, en su mayoría, vecinos de las colonias populares del valle de México y sus alrededores. Una gran cantidad de ellos eran jóvenes. Participaron organizaciones tradicionales del movimien-

to urbano popular, como la UPREZ, los Pancho Villa, la CUT y la Asamblea de Barrios. Pero también, mucha gente no adscrita a ellos, proveniente de la zona oriente de la capital que son los que no tienen servicio de agua potable, los que padecen la escasez. Fue notable, además, la presencia de grupos punks.

Las protestas y reuniones alternativas fueron el punto culminante de varias movilizaciones previas, efectuadas en las ciudades que forman la corona urbana que rodea la metrópoli. En Cocotitlán, en el Valle de Chalco, se reunieron 38 pueblos y cerca de 500 personas para discutir el desbordamiento salvaje de la ciudad y cómo enfrentarla. En Cuautla, donde los habitantes rechazan la construcción de una gasolinera que contaminará los mantos freáticos, unas 150 personas se congregaron en el encuentro "En defensa del lugar en que vivimos". En Tecamac, población que se ha convertido en la cloaca de la corona, sus pobladores se encontraron para oponerse a la instalación de una planta incineradora de basura, que ya fue rechazada en Tlaxcala, al tiempo que resisten la expropiación de los pozos de agua que manejan autogestivamente.

En estas reuniones convergieron pequeños grupos técnicos locales, asociaciones ambientalista, pobladores, cristianos de base y egresados universitarios de los pueblos que regresaron a vivir en ellos.

La urbanización salvaje ha creado graves problemas hídricos en lugares como Tulancingo, Tula, Tlaxcala, Toluca, Atlacomulco, Puebla, Cuautla, Cuernavaca. Sus habitantes han padecido agravios, despojos y servicios

insuficientes. El descontento y malestar de amplios sectores de la población crece. La marcha fue el termómetro de hasta dónde llega esa inconformidad.

La fiebre inmobiliaria que rodea la metrópoli estimula que se levanten ciudades dormitorios, verdaderos guetos, organizados alrededor de viviendas, pozos de agua y tiendas de ocasión del estilo Oxxo. Los desarrollos se alimentan del robo de tierras de cultivo y bosques. La construcción de libramientos y gasolineras ha creado múltiples problemas a los pobladores de las comunidades sobre los que esos proyectos nacen. Por ejemplo, los acuíferos no se recargan. En la era de la basura trasnacional, donde los desechos plásticos y químicos no se pudren y tampoco pueden quemarse, los basureros se han convertido en un problema adicional.

No se trató de un asunto exclusivamente chilango. Las jornadas de protesta contra la privatización del agua se alimentaron también de una caótica problemática nacional. Allí estuvieron quienes, como en el caso de La Parota, se oponen a la construcción de presas; los afectados por la "regularización" de los pozos de agua en zonas rurales; los colonos de Tulpetlac, que han sufrido la injerencia gubernamental sobre sus sistemas autónomos de distribución de agua potable; campesinos que en las zonas de riego agrícola son presionados para rentar sus derechos sobre el líquido; los pueblos indígenas que viven en el nacimiento del río Lerma.

La problemática del oro azul mostró ser un asunto de preocupación nacional y un terreno de organización social. Por todo el país han brotado asociaciones ciuda-

danas en torno a los recursos hídricos. En Guadalajara se organizó el movimiento *Aguas con el agua*; en los Valles Centrales de Oaxaca 7 pueblos se han organizado alrededor de San Antonio para defender sus recursos. El ecologismo se ha venido convirtiendo en un asunto nacional y popular.

## GUARDIANES DE LOS BOSQUES

### El hijo del bosque

Defender los bosques en México es una actividad arriesgada. En ello le va la vida a quien lo hace. Que lo digan, si no, los familiares de Rubén Flores Hernández, asesinado por los talamontes de la comunidad de Coajomulco, en el estado de Morelos.

A Rubén lo mataron el 28 de abril de 2010, justo el día de su cumpleaños, en el mero centro de su comunidad. Comuneros y vecinos señalan como responsable del crimen a Porfirio Díaz Cedillo, integrante de la familia más adinerada e influyente de la comunidad. El mero día de su velorio los saqueadores del bosque sacaron madera.

El 2 de febrero anterior una tromba azotó el bosque y derribó más de mil 300 árboles. En coordinación con las autoridades de bienes comunales, la comunidad levantó el censo de los daños y gestionó el aprovechamiento de la madera con su respectivo permiso.

El 9 de febrero, 70 comuneros subieron al bosque para hacer una inspección de vigilancia. Allí fueron sor-

prendidos Porfirio Díaz Cedillo y Sergio Vázquez Díaz sacando árboles de manera clandestina. En un camión, ocultos en unos sacos para trasladar avena forrajera, los vigilantes encontraron nueve trozos de árbol de diferentes diámetros y de 2.55 metros de largo. Los delincuentes fueron consignados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En venganza, mataron a Rubén Flores.

Coajomulco es una comunidad campesina e indígena nahua, integrada por unos 3 mil habitantes. Posee en sus tierras una extensión de más de 6 mil hectáreas del bosque del Ajusco Chichinautzin, con una enorme diversidad de fauna y flora. Allí crecen pinos, encinos, madronios y ailes. La resolución presidencial que los dota es de 1947.

Rubén Flores Hernández era campesino, hijo de campesinos. Sembraba alfalfa forrajera y producía tierra de hoja. Tenía 42 años de edad. Estaba hecho para el estudio y el trabajo. Era padre de tres hijas. Era también una de las cabezas de los vigilantes comunitarios.

A diferencia de otros poblados vecinos, la comunidad de Coajomulco ha defendido sus árboles. Como dice uno de los comuneros: el bosque es nuestra vida, la vida de la comunidad. Vivimos de lo que obtenemos de él, de su aprovechamiento.

Sus habitantes realizan regularmente infinidad de trabajos para preservar su riqueza ecológica: brechas cortafuegos para enfrentar los incendios; alambradas para la reforestación natural; tinas ciegas para la captación de aguas pluviales; aprovechamiento racional de la

tierra de hoja, madera y piedra, y creación de un parque ecoturístico llamado Totlán.

La custodia del bosque está a cargo de los vigilantes comunitarios, un servicio voluntario no pagado que existe desde siempre. Al regresar de su trabajo de supervisión, sus integrantes son gratificados con un refresco o con una comida, pagadas con los recursos de los derechos de uso del monte. Además, dos uniones de transportistas de tierra de hoja destinan 15 elementos todos los días para las tareas de vigilancia.

Desde hace meses, los comuneros han denunciado ante la Procuraduría General de la República y la Profepa la tala ilegal de la madera, sin que hasta el momento las autoridades hayan hecho nada. La depredación del bosque es llevada a cabo por las cinco familias más poderosas de la comunidad. Ellas venden clandestinamente la madera a un aserradero en Cuautla y en fábricas de muebles rústicos.

Al asesinato de Rubén le han seguido amenazas de muerte contra otros comuneros que defienden el bosque. En los lavaderos públicos al lado de la calle Leona Vicario, manos anónimas dejaron volantes que advierten: “Van a caer uno a uno los vigilantes comunitarios” y “La muerte de Rubén Flores que sirva de ejemplo”. El efecto inmediato ha sido que algunos comuneros escondieran las cabezas como armadillos, pero muchos otros están decididos a no dejarse amedrentar.

El homicidio de Rubén no es la única muerte perpetrada últimamente contra defensores de bosques en Morelos. Apenas el 31 de octubre de 2009 fue torturado

y asesinado Miguel Ángel Pérez Cázales. Miguel era un defensor del área natural protegida de Texcal y comunero de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, contra el proyecto de urbanización impulsado por el gobierno de Marco Adame.

Tanto Rubén Flores Hernández como Miguel Ángel Pérez Cázales eran hijos del bosque. Perdieron la vida por defenderlo. En un hecho que avergüenza a la justicia mexicana, su muerte sigue impune.

## Desarrollo forestal

Existen en México unos 65 millones de hectáreas de bosques y selvas, de los cuales, entre el 75 y 80 por ciento son, formalmente, propiedad de ejidos y comunidades indígenas. El nivel de deforestación es alarmante: en el año 2010, alcanzó las 155 mil hectáreas.

La industria nacional cubre sólo un tercio de la demanda interna. El resto son importaciones. El déficit de la balanza comercial es de 5 mil millones de dólares. La firma de tratados de libre comercio —primero con Estados Unidos y Canadá, y luego con Chile—, creó condiciones de competencia muy difíciles para el sector, e inundó el país con madera e insumos forestales más baratos.

Desde hace décadas, muchos bosques han sido explotados al margen de quienes viven en ellos y son sus legítimos dueños; se han utilizado concesiones forestales, vedas y desmontes masivos para uso agropecuario, desarrollos inmobiliarios y obras de infraestructura.

Las concesiones forestales entregadas bajo diversas modalidades a empresas privadas, expropiaron a las comunidades, en los hechos, del manejo de sus recursos. El deterioro de la riqueza forestal se profundizó a partir del cambio acelerado del suelo para uso agropecuario. En el sureste se implementaron desmontes masivos o se permitió su colonización.

En la década de los setenta, en oposición a este modelo de desarrollo, se gestó un movimiento conservacionista, que, originalmente tuvo apoyo tanto de medios oficiales como de sectores intelectuales urbanos. El centro de su planteamiento consistió en oponer como alternativa a la destrucción de los recursos forestales vedas totales o indefinidas. La propuesta ignoró que en los bosques y selvas viven campesinos con necesidades vitales.

Esta misma corriente impulsó la formación de reservas de la biósfera. Fueron concebidas como patrimonio de la humanidad por su contribución a la regulación climática mundial y su función como fuente inagotable de recursos genéticos vegetales y animales. Sus impulsores consideran que es la única forma de conservar la gran diversidad de ecosistemas naturales terrestres. Desde su lógica, la población campesina no es compatible con la existencia de las reservas.

Desde un camino diferente se forjó una opción distinta que hizo de las comunidades forestales y sus empresas una opción de desarrollo. Desde su punto de vista, la protección de bosques y selvas sólo puede ser el resultado de la incorporación plena a la conservación y manejo de los recursos forestales de sus dueños legítimos.

Muchas empresas campesinas forestales se crearon después de intensas luchas en contra de grandes compañías madereras y papeleras que explotaban los bosques ejidales y comunales como propios a través de concesiones en los que se pagaba a las comunidades una pequeña renta. Estas concesiones, firmadas cediendo la explotación del bosque por amplios plazos de tiempo, no se tradujeron en una explotación racional de los recursos maderables sino en una tala inmoderada e irracional.

Las empresas privadas funcionan tratando de obtener ganancias apresuradas sin cuidar la reproducción del bosque. Con mucha frecuencia, los dueños son funcionarios públicos que actúan con absoluta impunidad. A raíz del TLCAN y de las reformas al artículo 27 constitucional de 1991 que permite el establecimiento de sociedades mercantiles han proliferado compañías extranjeras a las que no les preocupa para nada la conservación de los recursos.

Comunidades y ejidos forestales heredaron así una cultura depredadora de la explotación, maquinaria y tecnología obsoletas y una red carretera deficiente o inexistente. A pesar de ello, iniciaron un proceso de apropiación de la producción y la comercialización forestal, que les permitió la capitalización de las empresas y el logro de condiciones de bienestar que antes no tenían. Se formaron así empresas campesinas ejemplares en San Juan Pueblo Nuevo, en Michoacán; El Balcón, en Guerrero, El Largo, en Chihuahua, entre otras.

Las organizaciones campesinas pasaron a delimitar y respetar áreas forestales permanentes, a establecer

áreas sucesivas de corte anual, a realizar aprovechamientos organizados y controlados de la producción, a participar en el establecimiento de viveros y replanteamiento de bosques, a proteger sus recursos contra incendios y plagas, y a controlar la venta clandestina de madera. En suma, se fue generando una nueva cultura forestal que combina el desarrollo con la conservación, la generación de riqueza con la permanencia de masa boscosa.

A pesar de la competencia desigual que tienen que enfrentar, aún sobreviven organizaciones de campesinos e indígenas que desarrollan proyectos forestales comunitarios exitosos. Algunas de ellas cuentan con aserraderos, estufas para el secado de la madera y contactos para su comercialización.

## Petatlán: la injusticia de la justicia

A finales de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos, a la libertad e integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero. La sentencia ordena al Estado que ejecute, en los plazos establecidos por la Corte, las medidas adecuadas para reparar el daño y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de violaciones graves a los derechos humanos. La resolución tiene un carácter vinculante y es inapelable.

Entre las medidas concretas señaladas en la sentencia se encuentran: investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos humanos.

La CIDH considera que "los tribunales que llevaron a cabo el proceso penal en contra de los señores Cabrera y Montiel en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por estos, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias".

Los defensores de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999, a manos de miembros del Ejército, por su activismo ambiental. Después de una amplia campaña internacional en su defensa que les hizo acreedores al premio Chico Mendes por su compromiso con el medio ambiente, el 7 de noviembre de 2001, el entonces presidente Vicente Fox ordenó su liberación por razones humanitarias, pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos. En los días previos, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura ni el acceso a la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta

admitió el caso en febrero de 2004 y, ante la reiterada falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano, lo sometió ante la Corte Interamericana el 24 de junio de 2009.

El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Montiel rindió testimonio, ante la Corte IDH, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra él y su compañero Teodoro Cabrera. Durante su intervención solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas y revertir los abusos militares.

Otros compañeros de Montiel y Cabrera no tuvieron su suerte: cuatro fueron asesinados, cuatro más (tres sentenciados y uno en proceso) fueron a dar a la cárcel en Acapulco y al menos otros siete sufrieron órdenes de aprehensión en su contra. Estos muertos, presos y "huidos" tienen en común el haber participado durante 1998 en un "paro de madera", esto es, en el cierre del camino por el que bajaban camiones llenos de árboles talados en los montes de la Costa Grande de Guerrero, afectando los intereses de madereros, políticos y ganaderos.

La justificación legal esgrimida para encarcelar a Pilar Martínez Fuerte, Francisco Bautista Valle, Moisés Martínez Torres y Gerardo Cabrera González, también campesinos ecologistas, fue tan absurda como la que sufrieron en su momento Cabrera y Montiel. Presumiblemente Gerardo está acusado de cometer un doble homicidio frente a varios testigos en un lienzo charro, efectuado por Justino Cabrera, cacique de la sierra. Al principio había sido señalado como abigeo, pero obtuvo un

amparo; sin embargo, a pesar de ello, fue apresado por el delito de asesinato. Aurora Bueno, esposa del difunto, fue obligada por la agente del Ministerio Público a firmar una hoja en blanco a cambio del cadáver de su marido. A pesar de que ella y otras personas han solicitado el expediente del caso, nunca les fue entregado. Mientras tanto, el cacique Cabrera, protegido por el Ejército durante mucho tiempo, se dio a la fuga.

Rodolfo Montiel Flores no lamenta los sufrimientos padecidos. "Si no hubiéramos enfrentado esta lucha, ya se hubieran terminado los bosques de Petatlán. Pienso que sí valió la pena. Sigo pensando que si yo volviera a nacer, volvería a luchar por lo mismo".

La lucha en la sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán comenzó cuando los campesinos se dieron cuenta de que su agua se había agotado por la pérdida de bosques, a manos de talamontes y de ganaderos en continua expansión. En palabras de Rodolfo Montiel: "los antes llamados ríos se convirtieron en pequeños arroyos, y los arroyos en pequeños hilos de agua". No sabían entonces lo que era la ecología, aunque, al cuidar los bosques de las quemas sin apoyo gubernamental conservaran el medio ambiente.

En 1995, Rubén Figueroa Alcocer, entonces gobernador de Guerrero, promovió la firma con la multimillonaria empresa estadounidense Boise Cascade y 24 núcleos agrarios pertenecientes a la Unión de Ejidos, comandada por el cacique del PRI, Bernardo Bautista, de un acuerdo en el que le daba la concesión y el derecho exclusivo de compra y explotación de madera de los ejidos

de la Costa Grande. Los camiones que bajaban de la sierra cargados con rollos de madera comenzaron entonces a hacerse más frecuentes.

"Antes de la llegada de la empresa maderera —narra Montiel— los bosques eran muy espesos, muy cerrados. Los caminos estaban tapizados de hojas de los árboles. Por ejemplo, si caminaba por las mañanas todavía había neblina, porque entonces había brisa, había mucha vida. Las cosas comenzaron a cambiar cuando llega la Boise Cascade. Empezaron a atropellar a la gente. Porque los caciques estaban de parte de la compañía. La gente más pobre, aunque fueran ejidatarios, no tenían los privilegios que tenían los caciques. Privilegios con el gobierno y con la compañía."

En febrero de 1998, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Felipe Arriaga, Albertano Peñaloza y otros pobladores de la sierra de Petatlán forman la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (Ocesp). A la protesta de los campesinos de la región ante la tala inmoderada se respondió con el hostigamiento militar hacia sus dirigentes. Boise Cascade canceló definitivamente sus operaciones en Guerrero después del "paro de madera" de 1998, argumentando que sus intereses económicos habían sido afectados. La represión se intensificó en la zona. La fragancia de los pinos cambió por el olor a persecución y muerte. Muchos dirigentes tuvieron que esconderse.

Montiel le contó a la periodista Thelma Gómez, el origen de su lucha. "La decisión —dijo— vino por la razón de que estaban explotando inmoderadamente las áreas

boscosas, estaban quedando como un desierto. Ríos y manantiales estaban desapareciendo; la fauna silvestre, estaban acabando con ella. Porque no solamente explotaban con la motosierra, no sólo se llevaban los árboles. Después de derribar los árboles, metían lumbre y entonces los caciques se aprovechaban, sembraban zacate para su ganado."

"En aquel tiempo, cuando nosotros comenzamos la lucha pensamos que el gobierno iba a apoyarnos, que iba a estar de nuestro lado. Recuerdo que en algunos árboles en el camino, yendo para mi pueblo, había letreros que decían que cuidáramos nuestros bosques. Eso fue lo que pensamos hacer, cuidar los bosques, pero no sólo cuidarlos de la lumbre, sino también cuidarlos de las motosierras, que no se los terminaran."

Además de seguir adelante en la defensa de los bosques, la lucha de los campesinos ecologistas se orientó a la defensa de la vida de los ciudadanos de aquella región, de sus perseguidos políticos y sentenciados. En amplias zonas la organización se fortaleció y logró sacar a los caciques, responsabilizándose de mantener una seguridad pública, solidaria y comunitaria. Sin embargo, en otras, los caciques conservan gran influencia.

Los campesinos se enfrentaron también a uno de los principales caciques de la región, Rogaciano Alba Álvarez. Distintos organismos de derechos humanos lo han acusado de ser el autor intelectual del asesinato (en 2001) de la abogada defensora de derechos humanos, Digna Ochoa. Señalado por sus vínculos con el narcotráfico fue alcalde de Petatlán, Guerrero, entre 1993 y 1996,

y dirigente de la Unión Ganadera Regional. En febrero de 2010 fue arraigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y dos meses después fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 Altiplano, en el Estado de México.

La libertad de Felipe Arriaga y Teodoro Cabrera en 2001 no cambió el clima de represión en el bosque. El 3 de noviembre de 2004, la Policía Ministerial de Petatlán detuvo al campesino ecologista Felipe Arriaga Sánchez, fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, por su supuesta participación en el homicidio de Abel Bautista Guillén, quien fue muerto en una emboscada en mayo de 1998, y era hijo del principal cacique talabosques, Bernardino Bautista.

En su comparecencia ante el juez, Felipe Arriaga presentó a tres testigos que demostraron que al suceder el asesinato éste se encontraba incapacitado y recibía tratamiento médico por problemas de espalda, en otra comunidad. En marzo de 2005, Amnistía Internacional lo adoptó como preso de conciencia. En agosto de ese año, Sierra Club le otorgó el premio Chico Mendes. Durante su proceso, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos lo consideró preso político y pidió al gobierno del estado revisar su situación, para saber si había cometido el homicidio o estaba preso por la manifestación de sus ideas. Estuvo detenido casi un año, en un proceso lleno de irregularidades.

Cuatro años después de que obtuvo su libertad, Felipe falleció en un accidente automovilístico, al ser embestido por una camioneta de pasajeros. Tenía 60 años de edad. Su viuda, Celsa Valdovino, dirigente de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, ha denunciado que el conductor del vehículo que lo arrolló no ha sido detenido.

En su funeral, el párroco Gustavo Sánchez García dijo que la naturaleza tal vez estaba triste por la partida de su defensor, pero al mismo tiempo alegre porque Arriaga se unía a ella. Reconoció la intensa lucha que el ecologista llevó a cabo durante 13 años, la cual, dijo, fue su misión más grande que tuvo en vida. Al finalizar, pidió a los presentes un aplauso para reconocerlo "porque el que trabaja por el bien siempre será incomprendido y en su lucha sufrirá de miedo y persecución".

Cuando el ataúd de Felipe fue puesto en la fosa, su esposa Celsa le pidió perdón por enterrarlo en la caja, ya que su voluntad era que lo sepultaran sin nada, para unirse directamente a la tierra. Finalmente plantó dos arbolitos de yaca sobre su sepultura, uno a la altura de sus pies y el otro sobre su cabeza.

## Cherán, del Jimbani Uéxurhini a la autoorganización indígena

Una manta, entre otras muchas colgadas en la localidad de Cherán, sentencia: "Cuando cortes el último árbol, cuando contamines el último río, cuando mates el último animal, te darás cuenta que el dinero no se come".

La manta sintetiza la problemática de una comunidad mayoritariamente purépecha que vive del bosque y sufre la destrucción de sus recursos naturales a manos de talabosques asociados con el crimen organizado. Resumen los sentimientos de un municipio que el 15 de febrero de 2011 se levantó para enfrentar a los saqueadores y tomar en sus manos la conducción de su propio destino.

Un comunero, sin nombre y sin rostro como todos en el pueblo, da cuenta de hasta qué punto el lema de la manta expresa el sentir de los naturales del municipio. "Desgraciadamente esas personas (talamontes) al terminar con los árboles no se dan cuenta que terminan también con la fauna y flora, y desgraciadamente después ellos piensan que van a comer dinero, y el dinero no nos alimenta. Uno siente ese dolor, yo vivo en el campo."

Cherán posee 27 mil hectáreas de territorio comunal, 20 mil de ellas boscosas. Desde allí se alimentan los ríos Duero, Cupatitzio, Tzarárakua y el lago de Pátzcuaro. Sin embargo, más de 80 por ciento de la superficie —poblada por árboles de pino, encino, roble y oyamel— ha sido incendiada y talada; y el otro 20 por ciento también ha sido talado, aunque aún no ha sido incendiado. Quienes defienden lo poco que queda del bosque son los comuneros. Una tragedia para una comunidad cuya principal riqueza son los recursos maderables.

Alrededor de 20 mil pobladores habitan el municipio. Se ganan la vida como resineros, trabajando el campo, dedicándose a la ganadería, y vendiendo artesanías. Otros 12 mil migraron a Estados Unidos. Las remesas que

mandan son fundamentales para la sobrevivencia de la comunidad.

Un comunero, paliacate en el rostro, voz de todos, explica la dinámica de saqueo que padecieron durante años: "Primero ellos entran y talan la madera. El otro grupo que llega viene haciendo la quema de los residuos de cada árbol y entonces en esos lugares, con los grupos armados que mantienen un cerco de protección para ellos, nuestros comuneros no pueden subir al cerro y entonces también nos roban la tierra".

El negocio —narraron los alzados a Gloria Muñoz— "lo encabeza un señor conocido como *El güero*. Es un doble negocio, pues él mismo envía trabajadores para que talen árboles y se los lleven a sus aserraderos. Pero cuando quieren entrar otros talamontes, les vende protección para que puedan sacar la madera. Y nosotros, pues sólo veíamos, agachaditos, que todo esto pasara".

Los de Cherán no sólo fueron víctimas de despojo. También sufrieron secuestros, extorsiones y asesinatos. El memorial de agravios es largo: más de cinco desaparecidos, media decena de asesinados y varios heridos, amén de viudas y menores huérfanos.

El 8 de mayo de 2008, Lepoldo Juárez Urbina, ex presidente municipal y representante del movimiento de resistencia civil pacífica, fue levantado y luego asesinado por un comando armado. En abril de 2010 fue ultimado Hilario Gembe, hermano del representante de Bienes Comunales. En febrero de 2011, Rafael García Ávila, Jesús Hernández Macías y Baltazar Gerónimo Rafael, de Bienes Comunales, fueron desaparecidos. El 15 de abril de ese

año, los talamontes hirieron de bala a Eugenio Sánchez Rendón. Diez días después, Armando Hernández Estrada y Pedro Juárez Urbina fueron asesinados con armas de fuego.

Los campesinos denunciaron ante las autoridades la tala de sus bosques desde 2008. Caminaron, paso a paso, la ardua ruta de los procedimientos legales. La respuesta oficial fue el silencio. No les importó el llamado de Nana Echeri (la Madre Tierra). "En el municipio gobierna el PRI —contó uno de los dirigentes a Rosa Rojas—; en el estado el PRD, y en el país el PAN, y ninguno de los tres niveles han hecho caso a nuestra demanda de justicia y de combatir el crimen organizado que ha talado nuestros bosques."

En 2011 los campesinos decidieron hacerse justicia por sí mismos. Expulsaron a los talamontes, cerraron el poblado con barricadas de piedras y costales de arena y troncos secos y restos de camionetas incendiadas, reactivaron la ronda tradicional comunitaria, e instalaron en cada esquina fogatas en cada uno de los cuatro barrios de la ciudad, en las que se mantienen en guardia toda la noche.

El volcán del descontento social hizo erupción. Los comuneros detectaron que los rapamontes estaban cortando árboles por donde se encuentra el ojo de agua de la Cofradía, "y entonces la comunidad, al ver eso, el coraje de tres años hace que la gente diga que nos van a dejar sin agua, nos van a dejar sin vida". Hartos, un grupo de pobladores se enfrentó y retuvo a cinco delincuentes y a sus vehículos durante tres días, para entregarlos final-

mente a la Comisión de Derechos Humanos del estado. Los malandrines fueron liberados a los días, pues sus cargos no eran graves.

A partir de esa fecha —escribió Gloria Muñoz— la población se armó con palos, piedras, machetes, azadones, palas y todo lo que pudo, para enfrentar a quienes desde hace tres años devastan los bosques de la comunidad, con la protección de grupos armados y hasta del gobierno. Fueron prohibidas las bebidas alcohólicas, portar armas y distribuir propaganda partidista.

Como sucedió en el levantamiento oaxaqueño de 2006, las fogatas permitieron restablecer el tejido social y reforzar los lazos comunitarios. Allí, alrededor de la lumbre, compartiendo el café y los alimentos, ha crecido la conciencia y la fraternidad.

Fue hasta el 19 de mayo, más de un mes después de que Cherán se levantó, que arribaron a ese municipio elementos federales, ejército, y policías del estado y de Cherán, para integrar las Bases de Operaciones Mixtas (BOM), y coordinarse en la vigilancia. Sin embargo, su presencia es mínima y no ha impedido que siga la tala del Cerro de San Miguel, ni las amenazas.

Desde mediados de agosto la vida en esta población comenzó a regularizarse. Las escuelas se reabrieron y, para evitar el cansancio de la gente después de cinco meses de constante vigilia, se permitió la circulación de personas y vehículos por su territorio entre 8 de la mañana y 8 de la noche. Sin embargo se sigue controlando a quien entra y sale.

El levantamiento de Cherán hizo palpable el alejamiento creciente de las comunidades indígenas de la Meseta Tarasca del PRD. La región purépecha fue, desde 1988, un baluarte del cardenismo. En las buenas y en las malas esta corriente histórica tuvo allí una implantación social real. La situación comenzó a cambiar conforme el desencanto con el gobierno local avanzó por las promesas incumplidas, el apoyo a grandes inversionistas en demérito de las comunidades, la no solución a conflictos agrarios que existen en la región y el intento de imponer una ley indígena que no satisface las necesidades de las comunidades.

El divorcio viene de tiempo atrás. En 2005, Lorenzo Isidro, comunero de Caltzontzin, aseguraba: "Este gobierno no nos quiere. No es competente para resolver lo que nos han quitado. Lo ignoran a uno. Nos hace pelear en lugar de que haya solución a los problemas". Y Felipe Chávez, un abogado purépecha con muchos años de experiencia y un gran conocedor de la historia de su pueblo, sentenciaba: "Lo que hay es pura demagogia. Los problemas no se resuelven".

El levantamiento es, también, expresión de un proceso de construcción de autonomía indígena desde abajo que tiene muchos años en marcha. Desde hace años, Juan Chávez, uno de los más connotados dirigentes indígenas en el estado señaló que el camino a seguir "es la autonomía en los hechos. Un camino a partir del derecho histórico de los pueblos indígenas. No hay que pedirle permiso al gobierno. Hay que ir construyendo las condiciones para que haya autonomía real. Hay que hacer

mucho trabajo de base. Trabajar mucho para que se den las condiciones y la determinación de la autonomía surja de las bases, del pueblo".

Desde hace casi tres décadas la madrugada del primero de febrero se reúnen miles de personas en diversas comunidades indígenas de Michoacán, para celebrar el *Jimbani Uéxurhini* o Año Nuevo Purépecha. En otras más, el primero de enero, decenas de mujeres, niños, hombres y ancianos se congregan para conmemorar el decimoprimer aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Los impulsores del *Jimbani Uéxurhini* sostienen que la ceremonia-rito estuvo viva entre la nación purépecha hasta que la Iglesia católica la suprimió después de la Conquista. En ella se pide que se subsanen los problemas que aquejan a las comunidades.

El *Jimbani Uéxurhini* se ha convertido en el principal rito cultural purépecha en un momento privilegiado del encuentro comunitario. El Año Nuevo es muestra de la vigorosa reconstitución de la nación purépecha que se vive en Michoacán, pero también en las comunidades migrantes en Estados Unidos. Es una expresión de la forma novedosa en la que cultura y política se han imbricado en la meseta tarasca, un indicador de la emergencia de un nuevo imaginario social.

Si los purépechas son capaces de reinventar el *Jimbani Uéxurhini,* su Año Nuevo, y recuperar su historia para ganar la esperanza, ¿por qué no van a hacer su autogobierno, su autodefensa y a defender sus bosques como lo están haciendo los pobladores de Cherán?

## EL NUEVO SAQUEO: MINERÍA A CIELO ABIERTO

### Wirikuta

Wirikuta, en Real del Catorce, San Luis Potosí, es la tierra de origen del pueblo wixárica (huicholes). Es el lugar donde se reúnen sus dioses, su territorio sagrado.

Cada año, entre los meses de diciembre y enero, llegan hasta allí los devotos en peregrinación. Parten del centro de la tierra, del corazón, de *Teakata*, lugar en el que reside *Tate'warí*, el Abuelo Fuego, después de celebrar la fiesta del tambor, del elote tierno y de las calabazas. Para llegar a Wirikuta, el sitio donde salió el sol, caminan 480 kilómetros.

Desde hace más de mil años, la peregrinación es un evento central en la vida de los wixaritari. Lo llaman su esencia. En ella recrean el caminar de sus antepasados para que continúen encendidas las velas de la vida, para mantener el equilibrio de la tierra y para conservar su cultura. Los peregrinos llevan ofrendas y adoran y aprenden de la voz de sus dioses lo que dice e*l costumbre*. La ruta es sagrada. La romería inicia y consagra a personas escogidas en el arte de recolectar el *hí'kuri*, es decir, en la cosecha del peyote para las ceremonias rituales.

Tan importante es Wirikuta, que, en 1999, fue declarado por la UNESCO como uno de los 14 sitios naturales sagrados del mundo que deben ser protegidos.

La zona de Wirikuta es también, desde 1994, un área natural protegida. Abarca 140 mil 211 hectáreas de 7 municipios. Cuenta con su plan de manejo de ley, en el que se establece la prohibición de actividades mineras

en la mayor parte de la reserva. En las zonas donde se autoriza realizarlas, se fijan grandes restricciones como las de no permitir el vertido de desechos contaminantes o alterar los cursos de agua superficiales o subterráneos.

A pesar de ello, en 2009 la Secretaría de Economía otorgó 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver, a través de su filial Real Bonanza, para la explotación de plata en Wirikuta. La compañía construirá en ese territorio una carretera para sacar su producción. Los permisos de operación provocarán la contaminación de los ríos, el acuífero, la tierra y el aire. Amenazan la supervivencia de especies endémicas y en peligro de extinción, como el águila real.

Ya encarrerado, el gobierno entregó dos concesiones más a la canadiense West Timmings Minning en pleno corazón del territorio sagrado, en el área de El Bernalejo. En total hay hoy al menos 30 proyectos mineros en la región desértica.

En contra de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se consultó a los wixaritari para aprobar el proyecto minero. Las autoridades mexicanas ignoraron el hecho de que las concesiones violan lo establecido en el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Wirikuta, que abarca casi el 70 por ciento de la concesión minera.

El proyecto minero de First Majestic Silver en Wirikuta equivale a instalar una planta de gas en la Basílica de Guadalupe, abrir un pozo petrolero en La Meca o construir una termoeléctrica en Jerusalén. Es una ofensa grave a la cultura y la religiosidad de un pueblo para fa-

vorecer negocios privados. Tiene, además, el agravante de que se dañará de manera irreversible el medio ambiente.

Es por eso que los representes indígenas denunciaron que "el Estado mexicano está asesinando y secuestrando nuestros territorio sagrado. Quieren acabarnos, asesinar a nuestra madre tierra".

La zona está dentro del Área de Importancia para la Conservación de Aves (AICA). En ella viven 156 especies de aves entre las que se encuentran *Spizella wortheni* (gorrión de Worthen), incluida dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2001 con el estatus de protegida, y declarada como una de las 51 Especies Prioritarias por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). La zona es también lugar de anidación del águila real (*Aquila chrysaetos*), que se considera como "amenazada" y como "especie prioritaria".

La ofensiva minera en Wirikuta es el último eslabón de una cadena de agresiones contra los wixaritari. A la tradicional rapiña de los ganaderos mestizos contra las tierras indias se ha sumado el hostigamiento contra sus prácticas religiosas y la destrucción de sus sitios sagrados. La lista es larga. La policía ha acosado a jicareros (peregrinos comisionados por su comunidad) durante sus ceremonias. Grandes empresas agroindustriales, que inhiben la lluvia mediante detonaciones en el cielo para dispersar las nubes, destruyen la vida campesina en el desierto de Wirikuta. Las zonas sagradas en Hara Mara (San Blas, Nayarit) fueron concesionadas a empresas turísticas. Los principales centros de oración han sido mercantilizados. Importantes sitios sagrados fueron inunda-

dos por las presas de La Yesca y El Cajón, Nayarit. El proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, en Jalisco, destruyó y sepultó el sitio sagrado Paso del Oso.

Ante el avance del proyecto minero devastador de la compañía First Majestic Silver en contra de la cultura indígena, la salud de la población y el medio ambiente, se ha organizado un amplio movimiento social que exige la intervención de las autoridades competentes para revisar y revocar las concesiones otorgadas ilegalmente a la empresa. Los agraviados demandan, también, que se decrete una moratoria indefinida para evitar proyectos mineros y/o agroindustriales dentro del área natural protegida de Wirikuta. Esta posición se ha hecho pública tanto en el "Pronunciamiento en Defensa de Wirikuta, Pueblo Wixárika" —de septiembre de 2010—, como en el "Pronunciamiento en defensa de Wirikuta" —del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Waha'a—, como en las movilizaciones realizadas en octubre de 2011 en la Ciudad de México.

En el centro de esta protesta se encuentran las comunidades wixaritari y sus autoridades tradicionales. No es casualidad. En ella se juegan su futuro como pueblo.

## El nuevo saqueo

Las reformas constitucionales al artículo 27 prepararon el terreno para el desembarco de compañías trasnacionales en actividades primarias y extractivas de gran importancia para el país. En 1992 se promulgó una nueva Ley Minera que, junto con la reformada Ley de Inversión Extranjera, legalizó el que empresas extranjeras controlaran la totalidad del capital dedicado a la exploración y

producción mineras. En 1993, justo antes de la entrada en vigor del TLCAN, desapareció el tope a la participación extranjera en este sector estratégico. Grandes corporaciones mineras obtuvieron concesiones de bastas superficies para el desarrollo de todo tipo de actividades mineras.

Las concesiones al capital privado, nacional y foráneo, abrieron a los empresarios las puertas del paraíso. Los gobiernos en turno eliminaron impuestos a la actividad minera, autorizaron pagos simbólicos por hectárea explotada, redujeron a su mínima expresión las normas aplicables, cerrando los ojos a las violaciones de la legislación laboral, fiscal y medio ambiental.

Con un marco jurídico favorable y altos precios internacionales de metales, las concesiones de proyectos de prospección y explotación minera en México se incrementaron aceleradamente. Con avidez colonial, las grandes empresas trasnacionales ocuparon cerros, lomas, filones y montes explotándolos hasta convertirlos en polvo.

Hasta el momento, han sido concesionadas para actividades mineras 25 millones de hectáreas. A cambio de ello, las empresas pagan al gobierno federal entre 5.08 y 111 pesos por hectárea.

La inversión extranjera directa en este sector durante el sexenio calderonista, según la Cámara Minera de México, ascendería a 22 mil millones de dólares, de los que 13 mil millones se invertirían entre 2010 y 2012. El 75 por ciento de ese capital corresponde a consorcios canadienses, y 15 por ciento a estadounidenses. Con el

gobierno de Felipe Calderón prácticamente se duplicaron los proyectos mineros concesionados a empresas extranjeras: el incremento neto fue de 94 por ciento, la mayoría destinados a la explotación de metales preciosos.

Esas compañías están aquí porque el gobierno de México les abrió la puerta. Según la Secretaría de Economía, se desarrollan 757 proyectos mineros que operan 286 compañías extranjeras. Las canadienses, por sí solas, disponen de 556 proyectos. A pesar de que su inversión es relativamente reducida, las trasnacionales canadienses que operan en México poseen los proyectos más rentables en la explotación, desarrollo y producción de minas de oro y plata, lo que les ha permitido obtener las mayores utilidades del negocio. Un grupo de seis firmas de ese país controlan el 70 por ciento de la explotación de oro y poseen en territorio reservas de ese metal con un valor aproximado de 82 mil 924 millones de dólares.

El actual auge de la minería tiene en el oro su principal sustento. A nivel mundial, México ocupa el lugar número 12 en la producción mundial de metal áureo. Las grandes empresas acaparan 94.49 por ciento de la producción nacional.

## El descontento

Al calor de la expansión de la actividad minera han aflorado brotes de descontento en su contra por todo el territorio nacional. En todo el país, habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la devastación ambiental, los daños a la salud y los contra-

tos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. La represión ha estado a la orden del día.

El malestar es grande. El acceso a importantes minas de oro, en el estado de Guerrero, fue cerrado por comunidades de Mezcala (particularmente Xochipala y Carrizalillo) en protesta por la cínica devastación que ha producido la larga explotación de esta rica región minera llevada a cabo por Luismin o, más recientemente, Goldcorp.

La señora Eufrosina López explicó a los investigadores Claudio Garibay y Alejandra Balzaretti, las razones de su descontento: "queremos hacer cumplir a la empresa lo que prometió y no ha hecho nada… en Internet salió que dio una clínica, un hospital… y no hay nada. Y si no cumple no nos vamos a ir de aquí. Preferimos que se vaya la empresa y no nos deje más muertos que vivos, porque están metiendo el cianuro; que ya están instalando los tanques… pues nos platica la doctora que va a ser mal para los niños… ¡Van a venir deformes los que vienen! Y la empresa no quiere arreglar… preferimos entonces que se vaya… y así podemos trabajar como vivíamos antes, con la siembra, el maíz, el frijol, la semilla… y así no nos comemos mucha química".

Entre abril y mayo de 2009, 300 pobladores de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, en Zacatecas, bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la canadiense Goldcorp. no cumplió su compromiso de firmar un con-

venio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón.

El descontento se ha extendido como reguero de pólvora por muchos estados. Los ciudadanos de San Luis Potosí se oponen a la explotación de oro y plata en la mina San Xavier en Cerro de San Pedro, y han dado una intensa lucha para lograr su cierre. No es casual. El desarrollo de este proyecto implicará la desaparición de un kilómetro de montañas incluyendo dos poblados, además de que sus labores se llevan a cabo justo sobre una zona de recarga acuífera que surte al 40 por ciento de la población total del estado. El Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier ha ganado varias sentencias definitivas dictadas por los jueces para cerrar la ilegal operación minera, sin embargo, la empresa, en contubernio con diversas autoridades, las han desacatado.

Para protestar contra esta nueva forma de despojo colonial, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (New Gold), Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, convocó a celebrar el 22 de julio de 2009 el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. La jornada de lucha formó parte de una movilización pacífica que se efectuó frente a las embajadas canadienses en diversos países.

Alrededor de 3 mil personas de varios municipios de la sierra de Chiapas realizaron el 14 de abril de 2009 una marcha silenciosa en Motozintla para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera en la región, porque “sólo traen destrucción y muerte”. Las concesiones favorecen a la canadiense Black and Fire y a la estadounidense Liner Gold Corp. La protesta concluyó con una misa.

En una carta, las siete parroquias de la zona expresaron la oposición de la Iglesia católica al desarrollo que fomenta desigualdades y atropella y excluye a personas.

En Chihuahua, donde se ubican las mayores concesiones a las trasnacionales mineras, las organizaciones campesinas han denunciado grandes abusos corporativos. A cientos de kilómetros de allí, el 21 de abril de 2009, la policía oaxaqueña y la federal, reprimieron salvajemente a los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, que desde el 16 de marzo habían bloqueado el acceso de la mina La Trinidad, de San José del Progreso, propiedad de Fortuna Silver.

El presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán El Grande (pueblo localizado en la parte central del estado de Puebla), Pedro Enrique Viveros, denunció que la Secretaría de Gobernación estatal los presiona para que Australian Minerals Group lleve a cabo un proyecto minero para extraer manganeso en la localidad, a pesar de que los pobladores ya lo rechazaron en varias ocasiones.

La más reciente violación flagrante de que se tiene registro por parte de las empresas canadienses, se produjo en la mina Caballo Blanco, ubicada a unos 100 kilómetros de Xalapa, Veracruz. Allí, los habitantes de once comunidades rurales temen un desastre ecológico, por la extracción de 16 toneladas de oro, cerca de la planta nuclear de Laguna Verde.

No es infrecuente que las autoridades utilicen a la policía para forzar la apertura de empresas impugnadas por pobladores, descontentos por los riesgos que este tipo de empresas encarnan para la salud y el ambiente.

En agosto de 2008, el panista Gerardo Palacios Campos, alcalde de Cuautitlán de García Barragán, municipio del sur de Jalisco donde se asientan varios poblados nahuas —entre ellos el ejido de Ayotitlán—, envió policías municipales a resguardar la mina Los Juanes, cuya maquinaria fue parada en enero por indígenas que se oponen a la explotación de metales preciosos en sus tierras.

La reanudación de actividades en la empresa, propiedad de un inversionista chino, violó un amparo obtenido por los indígenas un mes antes, para evitar que se exploten los yacimientos de oro y plata hasta que se resuelva un conflicto territorial que lleva décadas entrampado en la Secretaría de la Reforma Agraria. La lucha de Ayotitlán ya ha costado la vida a varios de los dirigentes del consejo de mayores. El caso más conocido fue el del ex presidente municipal de Cuautitlán, Raúl Delgado Benavides, presuntamente ejecutado por sicarios vinculados al consorcio minero.

La minería a cielo abierto ha sido cuestionada en muchas partes del mundo por sus efectos devastadores: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua con químicos, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras, elimina la flora y fauna nativas y afecta la salud de los pobladores. Las localidades en las que se asientan los enclaves mineros reciben como pago una muy pequeña cantidad de la riqueza que se extrae de las entrañas de su tierra.

Para tratar de coordinar todas estas luchas se formó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), que efectuó su primera convención del 19 al 21 de junio

de 2008, en la comunidad de Tamacapulín, Jalisco. Participaron cientos de personas, pertenecientes a organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, colectivos de estudiantes y académicos, provenientes de 12 estados del país. Su proceso organizativo está estrechamente vinculado con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).

El primer encuentro de la Rema concluyó con la Declaración de Tamacapulín, que advierte: "contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas; 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado como concesiones mineras".

También la Asamblea Nacional de Afectados y Alternativas Ambientales (ANAA) ha abordado el problema de la minería a cielo abierto regularmente en sus encuentros. En su sexta asamblea, realizada en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, el 12 de septiembre de 2010, condenó "las provocaciones (que ya han propiciado la muerte de varias personas) y la violencia ejercida por la empresa Minera Cuzcatlán, perteneciente a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, en contra de las comunidades de Ocotes de Ejutla, San José del Progreso, San Jerónimo Tabiche, Rancho del Toro, San Jacinto Ocotlán, Magdalena

Ocotlán, El Cuajilote Maguey Largo, en Oaxaca". Asimismo, exigió detener inmediatamente la construcción de las presas de jale, el cierre definitivo de la mina en San José del Progreso, la salida de Fortuna Silver Mines del país y la liberación inmediata del compañero Silvino Macrino Vázquez Sánchez.

Para justificar la entrega de concesiones, las autoridades aseguran que estas empresas son agentes de crecimiento y bienestar eficaces. Sin embargo, esto no es así. Según el investigador Mandeep Dhillon, "el mito de que la minería es una actividad fundamental para el desarrollo económico ha sido propalado por la industria. De los empleos creados para la población local la mayoría es de corto plazo y de bajos salarios (…) Dejan pueblos fantasmas cuando se acaban sus proyectos".

El rechazo ciudadano a la minería a cielo abierto es, simultáneamente, expresión de la lucha por la liberación nacional desde el campo popular y combate por un modelo de desarrollo diferente, que pone en el centro el bienestar de las personas, la sobrevivencia de las comunidades y la defensa del medio ambiente.

## Un crimen lleno de sospechas

La muerte lo alcanzó frente a sus hijos. El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca Roblero salió a la calle a verlos. Se encontró allí, a su compadre Rolando Vázquez y se puso a conversar. En eso estaba cuando, pasadas las 8 de la noche, fue asesinado frente a su casa, en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, un pueblo de 5 mil personas.

Dos sujetos, vestidos de negro y a bordo de una motocicleta Honda 250, le dispararon a quemarropa con un arma de fuego. Una bala le entró en el pecho, la otra le perforó el cuello. Su compadre recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Los asesinos se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Dejaron abandonada la moto afuera del municipio.

Según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los asesinos de Mariano fueron Caralampio López Vázquez, Ricardo Antonio Coutiño Velasco y Jorge Carlos Sepúlveda Calvo, trabajador de la empresa minera Blackfire Exploration. Sepúlveda Calvo fue señalado como presunto autor material del crimen. La Procuraduría los detuvo y también ejecutó arraigo judicial contra el empresario y ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Walter León Montoya, acusado de ser el autor intelectual del crimen.

Pero los compañeros del activista sospechan que no se ha ido a fondo con las investigaciones. Meses atrás, Luis Antonio Flores Vilatoro, gerente de Relaciones Públicas de la minera, y Ciro Roblero Pérez, directivo de Blackfire, amenazaron de muerte a Mariano. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) negó que León Montoya tuviera que ver con el homicidio. En un comunicado de prensa afirmó que: “pareciera que la presunción sobre la autoría intelectual de León Montoya en el asesinato de Mariano Abarca Roblero es una estrategia de venganzas políticas”. La Red acusó a los empleados de la compañía minera Blackfire Exploration de planear y llevar a cabo la ejecución de Abarca.

Al momento de su homicidio Mariano tenía 50 años de edad y cuatro hijos. Dirigía la lucha contra la minería a cielo abierto. Era integrante de la Rema. Hombre religioso, defendía a su tierra y su gente. Hasta su muerte, se enfrentó a la minera canadiense Blackfire, que extraía barita en los terrenos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia.

Su hermano, Uriel Abarca, le contó al periodista italiano Gianni Proiettis: "Las denuncias de mi hermano evidenciaban, sobre todo, los daños al medio ambiente y a la salud de la población. El uso de la dinamita para extraer la barita provoca una constante contaminación por los residuos del mineral que, oxidándose, contamina ríos y suelos provocando la muerte de peces, ganado y otros animales. Las detonaciones de la dinamita, además, han provocado la completa desaparición de muchos pequeños arroyos. No sólo eso, antes de extraer el mineral se desmatan superficies importantes, dejándolas peladas y ya inservibles como tierras de cultivo. Es una actividad sumamente devastadora".

Hasta la clausura temporal de sus operaciones, en diciembre de 2009, la minera operaba en el municipio de Chicomuselo para "explorar y desarrollar Chiapas agresivamente".

Entre 2005 y 2008 Blackfire operó en el municipio de Chicomuselo, sin mayores expresiones de descontento de la población. Pero a comienzos de ese año se inició la resistencia de los ejidos aledaños a la explotación minera y de pobladores de la cabecera municipal. El descontento brotó cuando fue evidente que las promesas que la empresa hizo para mejorar la vida de los lugareños no

se cumplieron. Por el contrario, la empeoraron sensiblemente. Por ejemplo, las actividades de la minera provocaron que, al bañarse con el agua del río, los habitantes de varias comunidades padecieran irritaciones en la piel.

En febrero de 2009, Mariano presentó una denuncia ante la Profepa. Meses después, entre junio y julio de 2009, encabezó un plantón, con el apoyo del Frente Cívico de Chicomuselo, para impedir el paso de maquinaria y camiones de la empresa minera Blackfire hacia el Ejido Grecia.

El 22 de julio, en un mitin frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, Abarca alertó sobre los graves daños que provocaría esta minera a cielo abierto, no sólo en Chiapas, sino en Tabasco y en los esteros del Golfo de México. Advirtió que la empresa arroja químicos en la cuenca del Grijalva, como el cianuro.

A principios de agosto del 2009, la minera demandó a Mariano por los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación y daños al patrimonio de la colectividad y de Estado. Elementos del cuerpo de seguridad del Estado de Chiapas lo detuvieron sin ninguna orden el 17 de agosto. Nueve días más tarde fue dejado en libertad por la presión de las organizaciones sociales.

Durante todos esos años, el gobierno de Juan Sabines Guerrero, no sólo no actuó contra la empresa, sino por el contrario, hostigó al movimiento por la justicia ambiental, y al mismo Mariano.

Días después de su liberación, se efectuó en Chiapas el segundo encuentro de Rema. Allí se discutió sobre

estrategias legales para la resistencia ciudadana, así como los efectos de la minería en la salud y el medio ambiente. Manolo participó en el evento con otros 240 delegados de luchas contra la explotación minera, provenientes de varios estados del país y de Guatemala. El último día del evento, los representantes de 27 organizaciones sociales firmaron un pronunciamiento en el que se exigió, entre otras cosas, la cancelación de los proyectos mineros en Chicomuselo, en particular los de la empresa canadiense, así como la abrogación de las concesiones mineras en Chiapas, México y Guatemala.

En esas estaba cuando Mariano fue asesinado. No fue sino hasta el 7 de diciembre de 2009, poco más de una semana después del homicidio, que las autoridades resolvieron la clausura temporal total de las operaciones de la minera canadiense.

Sin embargo, la justicia sigue estando pendiente y, peor aún, se está persiguiendo a la familia del difunto. Según su hijo Luis, "existen amenazas, sobre todo en mi persona, porque he sido hostigado". De igual manera, no se ha investigado a fondo la relación existente entre el crimen del activista y la empresa. "El principal responsable de la muerte de mi padre es la empresa minera Blackfire, no existe nadie más", asegura Luis.

## ¡ABAJO FRACCIONAMIENTOS, ARRIBA PUEBLOS!

### Entre Manos sobre la ciudad y Blade Runner

Hay ocasiones en las que la realidad imita al arte. La urbanización salvaje en México fue anunciada, a su manera, por dos películas diferentes. Una es *Manos sobre la ciudad,* del director de cine italiano Francesco Rosi. La otra es *Blade Runner,* un filme de ciencia ficción estadounidense, dirigido por Ridley Scott. La imagen más fiel de las gigantescas urbes del país sería la elaborada a partir de la unión imposible de ambas películas.

Hace casi 50 años, en *Manos sobre la ciudad,* Rosi narró la historia de una ciudad que crece salvajemente y se deshace de lo viejo para "modernizar" Nápoles. En santa componenda, políticos, empresarios y funcionarios públicos hacen grandes negocios construyendo nuevas viviendas sobre predios agrícolas, modificando los planes de desarrollo municipal y revalorando los terrenos. Rosi nos cuenta una historia de corrupción, sobornos, recalificación fraudulenta de terrenos, favoritismos y dádivas. Sin ambigüedad muestra la puesta en práctica de una política sin referentes éticos, partidos que son agencias para realizar negocios inmobiliarios, la carencia de políticas de desarrollo urbanas y el choque entre bienes públicos e intereses privados. Aunque la película transcurre en Nápoles podría desarrollarse en Morelos o en Jalisco.

Blade Runner fue estrenada en 1982. En ella Scott describe una ciudad del futuro, habitada por seres fabricados a través de la ingeniería genética, que son emplea-

dos en trabajos peligrosos y como esclavos. Se asemejan físicamente a los humanos pero carecen de respuesta emocional. En la película es evidente el poder de las compañías trasnacionales, la vigilancia policial absoluta y el control sobre los ciudadanos. Majestuosos edificios de otras épocas han sido abandonados, los puestos callejeros han invadido las calles y la urbe está abarrotada de muchedumbre. El sello distintivo de lo urbano es la degradación de sus infraestructuras y la decadencia.

Anticipación del futuro, multitud de *Blade Runners* pueden verse en los grandes proyectos inmobiliarios de la zona conurbada de la Ciudad de México.

Las ciudades del futuro —explica Mike Davis— se encuentran lejos del cristal y del acero con que las imaginaban generaciones anteriores de urbanistas: la realidad nos presenta un panorama de ladrillo sin cocer, paja, plástico reutilizado, bloques de cemento y tablones de madera. En lugar de ciudades elevándose hacia el cielo, la mayor parte del mundo urbano del siglo XXI se mueve en la miseria, rodeado de contaminación, desechos y podredumbre. En México —podría añadirse— el futuro que nos alcanza está lleno de casitas Auschwitz.

Casitas Auschwitz es un concepto acuñado por Andrés Barreda para describir los proyectos de construcción de nuevas ciudades con cientos de miles de pequeñas viviendas de entre 16 y 32 metros cuadrados de superficie, todas iguales. Nuevos "campos de concentración" disfrazados de ciudades dormitorio, que son cualquier cosa menos viviendas dignas y decorosas. Son la última

frontera de la urbanización salvaje: nuevas ciudades que rodean a las viejas ciudades.

Las casitas Auschwitz son la versión mexicana del "boom del ladrillo". Nacen de la especulación incontrolada y creciente de la tierra, la gestión del suelo urbano y las cuencas hidrológicas cedidas a la industria inmobiliaria. Distintos gobiernos de todas las orientaciones políticas dieron a empresas constructoras como ARA y GEO, Sadasi, Homex-Beta o CAME la facultad de edificar estas ciudades globales con criterios exclusivos de lucro.

Los desarrollos inmobiliarios crecen casi sin control. En muchos casos chocan con los derechos históricos de las comunidades rurales en las que las empresas buscan asentarse. Las nuevas manchas urbanas han dejado de lado programas reales de desarrollo que contemplen la conservación del medio ambiente, mejora de las zonas de recarga y la conservación de la biodiversidad. En los hechos estimulan la destrucción ambiental.

Quienes viven en las nuevas unidades habitacionales son trabajadores que ganan 7 o más salarios mínimos. Ningún trabajador con un ingreso menor a ese puede adquirirlas. Se venden en hipotecas de 30 años, que con frecuencia no pueden ser pagadas.

La pésima calidad del equipamiento, la carencia de agua y transporte han propiciado la multiplicación de movimientos que demandan una vivienda digna. Muchas de las viviendas han sido levantadas en zonas inadecuadas. Es frecuente que los habitantes sufran del hundimiento y cuarteadura de muros y lozas, o de falta de cimiento.

El estado de Morelos es un laboratorio de la relación existente entre urbanización salvaje y resistencia popular. En toda la entidad proliferan el descontento y los conflictos. Y es que hay en esa entidad una destrucción ambiental sin precedentes perpetrada por el asalto empresarial a los recursos naturales y el territorio que acaba con los manantiales, acuíferos y ríos, con la calidad del agua, de la tierra y del aire. La proliferación de unidades habitacionales, la multiplicación de tiendas de conveniencia y gasolineras, el terrible manejo de la basura, han propiciado que, en el estado de Emiliano Zapata se desarrolle un vital movimiento de justicia ambiental.

## ¡Abajo fraccionamientos, arriba pueblos!

El despojo y la depredación de los recursos naturales de los pueblos del surponiente del estado de Morelos avanzan de la mano de la urbanización salvaje. La fiebre constructora y la especulación inmobiliaria enajenan tierras, contaminan aguas y transforman a los campesinos de generaciones en albañiles temporales, desempleados de por vida e inquilinos hacinados en casas sin servicios.

Esta ola constructora quiere convertir a la región de vocación agrícola en una ciudad dormitorio, edificando 50 mil viviendas en una zona donde se ubican cuatro mantos acuíferos. Para ello cuenta con la complicidad de las autoridades locales que han facilitado licencias irregulares de uso del suelo a varias compañías.

La siembra de varillas y concreto donde antes se cultivaban hortalizas, caña de azúcar y maíz ha cosecha-

do la ira entre los pobladores de la región. Manifestaciones, toma de carreteras, enfrentamientos con la policía y quema de vehículos oficiales se han sucedido una vez tras otra. Y el conflicto dista de haber llegado a su clímax. Desde hace años, cíclicamente se producen explosiones de descontento.

Durante la Revolución Mexicana los zapatistas enarbolaron la consigna "¡Abajo haciendas, arriba pueblos!". Hoy, los pueblos del surponiente de Morelos han cambiado el lema histórico por el de "¡Abajo fraccionamientos, arriba pueblos!"

En 2007 el asunto reventó. Doce pueblos del sur del estado chocaron con los modernos fraccionadores que impulsaban desarrollos urbanos en los municipios de Emiliano Zapata, Zacatepec, Puente de Ixtla y Tlaltizapán. Los pobladores exigieron la cancelación del permiso para edificar más de 15 mil viviendas en el área, parte de un proyecto más vasto de construcción.

Los conjuntos inmobiliarios, como el de la unidad La Ciénega, en el municipio Emiliano Zapata, impulsado por la Promotora Tepetzingo, amenazaban con agotar el agua de los tres manantiales (Chihuahuita, El Salto y El Zapote) que abastecen a los pueblos de la región.

La Cementera Moctezuma tiene tres pozos perforados, y algunas unidades habitacionales han ido cavando otros. Existe el peligro de que muy pronto estos manantiales se sequen y se deje a 70 mil campesinos y pobladores rurales sin el líquido vital.

El municipio, ubicado a unos cuantos kilómetros de Cuernavaca, no cuenta con escuelas suficientes, ni con

vialidades adecuadas, ni con infraestructura urbana para su conversión en una "ciudad dormitorio". La localidad, de origen indígena, está asolada por el analfabetismo y la extrema pobreza.

Las preautorizaciones para la construcción de los nuevos fraccionamientos fueron concedidas por el anterior alcalde, a pesar de que los proyectos no contaban con los permisos requeridos, ni con las manifestaciones de impacto ambiental ni con el alineamiento exigido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los habitantes han denunciado la enorme corrupción que hubo por parte del edil en la cesión de estas autorizaciones. Han presentado demandas ante el Ministerio Público, la Profepa y la Auditoría Superior Gubernamental, pero no han tenido respuesta.

Amenazados con quedarse sin el líquido vital, estos pueblos realizaron numerosas gestiones y protestas para impedir que la mancha urbana avance sobre su territorio. Desde el 2005 han efectuado todo tipo de trámites sin éxito. La Comisión Nacional del Agua negó que hubiera pozos perforados o que hubiera problemas.

Cansados de no tener respuesta, los pueblos realizaron, el 24 de julio de 2006, una manifestación en Emiliano Zapata y tomaron la alcaldía. En las negociaciones con el gobierno del estado llegaron al acuerdo de detener la construcción de casas, por la gran cantidad de irregularidades de la inmobiliaria. La suspensión duró apenas 3 meses. Durante ese lapso los constructores hicieron los trámites para "regularizarse" y siguieron adelante con su negocio.

En abril de 2007 los pueblos ocuparon otra vez más la presidencia municipal. El alcalde, dicen los pobladores, no resuelve las preocupaciones de la gente. Omite atender, además, el problema fundamental de la región: la existencia de los manantiales y el riesgo en el que se encuentran. Nuevamente, se llegó al acuerdo de cancelar la obra porque los fraccionadores adeudaban pagos. Sin embargo, la suspensión duró solamente un mes.

El 29 de mayo de 2007 los pueblos fueron al Congreso del estado y lograron que el asunto se discutiera en sesión. Los legisladores nombraron una comisión para atender el problema. Al día siguiente la comisión visitó a los pueblos y les dio razón. Sin embargo, las obras siguieron.

Dos días más tarde, los pueblos se reunieron en asamblea acordando la toma de la carretera para el 4 de junio. Pero las comunidades circunvecinas a Xoxocotla se adelantaron y cerraron la carretera desde el 2.

Como el problema siguió y los medios de comunicación los ignoraron, hicieron una nueva protesta en la Autopista del Sol. El lunes 4, entre 3 mil y 4 mil personas, marcharon. La policía los recibió en la caseta de Alpuyeca, dándole un culatazo a una mujer de 78 años de edad, a la que le abrieron el cráneo. Ya en el piso la gasearon. Cuando los manifestantes comenzaron a forcejear con la policía les dispararon con armas de fuego, además de lanzarles gases lacrimógenos y balas de goma. La población se defendió con piedras. La policía retrocedió. Pero la gente estaba indignada y quemó la caseta de cobro y dos patrullas.

En venganza, la policía aprehendió a 18 personas, vecinos del lugar, que no participaban en el movimiento. Entró a sus casas sin orden de cateo ni de aprehensión y los tomaron presos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos presentó una queja.

Saúl Atanasio Roque Morales, representante de los 13 pueblos que se oponen al conjunto habitacional La Ciénega, expresó con claridad el malestar que existía detrás de estas protestas: "Ya estamos cansados —dijo— de que el gobierno nos pisotee, que siga invadiendo nuestros terrenos, que imponga leyes y normas que sólo a ellos les beneficie."

El gobierno local siguió abogando a favor de las obras. Apoyándose en un estudio de 1974, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) defendió que había suficiente agua para abastecer las nuevas construcciones. Pero, a pesar de ser los habitantes originarios de esas tierras, los pueblos afectados reciben el líquido vital un día cada semana, si bien les va, mientras que las nuevas urbanizaciones dispondrían de él diariamente.

El agua ocupa un lugar central en la cosmogonía regional. En sus ceremonias, los pobladores fomentan la experiencia del recibimiento del oro azul. En la gruta sagrada de Coatepec se le venera. Danzando, agradecen el agua que reciben del cielo, las montañas, los bosques y las tierras. Son, asegura el Manifiesto de los Pueblos de Morelos —recientemente aprobado—, "pueblos que todavía distinguen el sabor sagrado del agua viva".

En Morelos hay una larga tradición de luchas de resistencia de los pueblos contra el despojo de sus tierras,

agua y recursos naturales. Los habitantes de Tetelcingo y Xoxocotla frenaron la edificación de dos aeropuertos. Tepoztlán impidió la construcción de un club de golf. Ocotepec ha defendido sus predios colectivos en contra de la mega tienda Soriana.

Alpuyeca, Tetlama, Yecapixtla, Axochiapan, Cuentepec, Anenecuilco, La Nopalera, San Antón, San Rafael y Puente de Ixtla se oponen a la instalación de basureros a cielo abierto o rellenos sanitarios. Cuernavaca, Ocotepec, Jiutepec y Cuautla rechazan la instalación de nuevas gasolineras y estaciones de gas contaminantes. En Cuernavaca un movimiento ciudadano busca evitar la destrucción de la barranca de Los Sauces. Los habitantes de Huitzilac se oponen a los libramientos carreteros.

No se trata de un rechazo absurdo a la "modernidad" ni del deseo de preservar un pasado, nostálgico pero inviable. Sólo necesitan ver qué ha sucedido con el crecimiento desordenado de Cuernavaca y Cuautla. El turismo depredador, la industria desregulada y la agricultura basada en el uso intensivo de químicos han venido devorando las mejores tierras, y dañado ríos y manantiales, mientras la deforestación avanza.

La contaminación parece no tener dique. Los ríos Apatlaco y Yautepec, se han convertido en canales de desagüe. FEMSA-Coca Cola disfruta, casi sin restricciones, de la concesión de los acuíferos de El Texcal de Tejalpa y de la Colonia Manantiales de Cuautla.

Para detener el despojo y la destrucción medioambiental se llevó a cabo, el 28 y 29 de julio de 2007, en la comunidad de Xoxocotla, el Primer Congreso de los

Pueblos de Morelos, en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire. Participaron en su realización más de 700 personas, provenientes de 48 comunidades, municipios, pueblos y barrios urbanos de Morelos. Estuvieron acompañados de representantes de organizaciones sociales y no gubernamentales.

El Congreso propuso y aprobó la creación de un Consejo de Pueblos, integrado por tres representantes de cada pueblo nombrados en asamblea, que no tengan cargos oficiales en partidos políticos o sean funcionarios públicos. Desde entonces, la nueva organización ha desempeñado un papel central en la resistencia de los pueblos contra la urbanización desregulada.

En el encuentro, se habló sobre la defensa del agua, los problemas de urbanización, derechos de los pueblos originarios, basura y manejo alternativo de desechos sólidos, el bosque y amparo de las áreas naturales protegidas, así como de la crisis económica de los campesinos, el despojo de recursos y las semillas transgénicas.

En la carta dirigida al presidente Calderón, la "Asociación en defensa de los manantiales del estado de Morelos (Chihuahuita, Santa Rosa, El Salto y El Zapote) advirtió, con un lenguaje emparentado con los grandes manifiestos de lucha campesina del siglo XIX: "De seguir esta complacencia, haremos uso de otros medios.

Hoy damos una señal: en la tierra en que se gestaron grandes transformaciones nacionales, se gesta un descontento social y crece día a día, manifestación que tiende a desbordarse, que sentará un precedente y marcará una vez más la historia de México."

Para enfrentar la urbanización salvaje, defender el agua y la tierra, el ecologismo popular emergió en la tierra de Zapata y Jaramillo con un enorme vigor.

## Miguel Ángel Pérez Cazales

Herrero de profesión, la mañana del 31 de octubre de 2009, Miguel Ángel Pérez Cazales salió de su domicilio para realizar un presupuesto de un trabajo de herrería en Ahuatepec, Morelos. Ya no regresó. Su cuerpo fue localizado sin vida, golpeado, torturado y con el tiro de gracia en la nuca.

Miguel Ángel tenía 50 años de edad. Indígena náhuatl, era comunero del poblado de Santa Catarina, municipio de Tepoztlán, estado de Morelos. Trabajaba en un pequeño taller ubicado en su domicilio.

A las 4 de la tarde de ese 31 de octubre debía participar en el Encuentro Indígena, en la comunidad de Coajomulco, para recibir a la delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Ya no llegó. Su familia lo buscó infructuosamente todo el día. No supieron de él hasta el 1º. de noviembre, cuando personal de la Funeraria Morelos se apersonó en su domicilio y pidió a la esposa de Miguel Ángel que se trasladara al SEMEFO de Cuernavaca para identificar su cuerpo.

Pérez Cazales era, también, delegado electo en asamblea de su comunidad al Consejo de Pueblos de Morelos, y su representante en las negociaciones para resolver el añejo problema de tierras entre la comunidad de Texalpa y Santa Catarina, en el área de reserva ecológica de El Texcal.

Miguel Ángel fue un luchador social incansable por la defensa de las tierras de su pueblo y por la conservación del área natural protegida del Texcal contra el proyecto de urbanización impulsado por el gobierno de Marco Adame. Fue fundador de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y activista solidario con la lucha magisterial contra la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) en Morelos en 2008. Como parte del Consejo de Pueblos de Morelos logró frenar la construcción de un proyecto urbano sobre los manantiales Chihuahuita, el Salto y Santa Rosa que abastecen de agua a 13 comunidades.

Nació en el seno de una familia zapatista en Santa María Zactepec. Huérfano de madre, fue criado por su padre, el dirigente indígena Inocencio Pérez, promotor de la creación del área natural protegida de El Texcal, asesinado en 1992. El director de cine Francisco Taboada, director de la película *13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra*, escribió que *Chencho* Pérez era guardián de la tradición oral que considera a El Texcal como la principal reserva de agua de la región.

Infamia sobre infamia, el asesinato de Miguel Ángel fue presentado por las autoridades de Morelos como el homicidio de una persona dedicada a la venta de tierras.

Pérez Cazales poseía un profundo conocimiento de las raíces y la cultura de los pueblos. Con orgullo, reivindicaba su lengua náhuatl. Se dedicó a rescatar ceremonias ancestrales. Trabajó para que la montura del general Zapata volviera a formar parte del patrimonio cultural del pueblo.

La lucha de Miguel Ángel permitió que se resolviera el conflicto entre las comunidades de Santa Catarina y Texalpa para delimitar el área protegida de El Texcal y los límites entre ambas. La zona tenía una alta conflictividad. La promulgación del Decreto de Expropiación Presidencial para la construcción de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, a comienzos de los años sesenta, generó múltiples problemas entre ambas comunidades. El diferendo entre ellas culminó con un acuerdo entre las partes para legalizar la posesión por parte de comuneros de Santa Catarina, y una indemnización económica a los comuneros de Tejalpa por parte de un fondo federal de la Secretaría de la Reforma Agraria. La solución disgustó a funcionarios estatales y a muchos de los invasores de la reserva ecológica.

En la firma del acuerdo no participaron las autoridades estatales, sino solamente, las comunidades involucradas y organismos del gobierno federal. Miguel Ángel declaró a *La Jornada Morelos,* que el gobierno estatal "lo único que hizo fue meter odio entre los dos poblados para no arreglarnos, por eso, como pueblos originarios, tomamos la decisión de llegar a un acuerdo sin él". Encarrerado, después de la firma, Miguel Ángel se dedicó a tratar de recuperar 350 hectáreas de El Texcal invadidas. Como recuerda Francesco Taboada, el líder comunitario denunció en la Asamblea del Consejo de Pueblos de Morelos: "Es obvio que el gobierno está detrás de las invasiones, si no, ya hubieran hecho algo para proteger la reserva. Pero no importa, por defenderla se sacrificó mi padre y por eso estamos peleando nosotros".

Dos años después del homicidio de Miguel Ángel, su crimen sigue impune. Sin resultados que permitan esclarecerlo, los comuneros de Santa Catarina exigieron la destitución del fiscal morelense, Pedro Luis Benítez Vélez.

## El basurero de la muerte

Alpuyeca y Tetlama son zona de desastre sanitario. El número de pobladores que padece enfermedades supera fácilmente la media estatal y nacional. Un basurero a cielo abierto los condenó a una muerte silenciosa y paulatina.

Caminar por sus calles y escuelas es como internarse en una zona hospitalaria, en la que los pacientes no son atendidos por personal médico. Las muertes prematuras caminan de la mano de cánceres y leucemias. Las malformaciones genéticas son frecuentes. La sordera abunda. Las deformidades en pies y manos, el hipertiroidismo y la diabetes juvenil están extendidas. Las dificultades para respirar y las alergias son cosa de todos los días.

Más de tres décadas de convivir con toneladas de desechos hospitalarios, comerciales y domiciliarios; de beber, bañarse, lavar los trastes, cocer los alimentos y hacer la limpieza con aguas contaminadas, de respirar aire putrefacto, quebraron la salud de los habitantes de esta región. Gabriel Mejía Pablo, profesor de una escuela primaria de Alpuyeca, y uno de los promotores del cierre del basurero que provocó el daño, asegura que son numerosos los casos de cáncer, en especial leucemia. Los niños, agregó, tienen problemas de concentración y memoria;

muchos nacen con malformaciones en las orejas, que les causan pérdida de la audición de 60 a 70 por ciento.

La evidencia empírica del desastre fue corroborada en un estudio realizado por toxicólogos y epidemiólogos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que investigó el perfil de causas de mortalidad de la comunidad de Alpuyeca, entre 2002 y 2007. Los científicos compararon los datos locales con las estadísticas estatales y nacionales. Encontraron que algunas de las causas de mortalidad reflejadas en Alpuyeca son cáncer de labio y faringe, tumores de comportamiento incierto, tumores de órganos genitourinarios, trastornos mentales, enfermedades del sistema circulatorio, envenenamiento por exposición a sustancias nocivas, trastornos mentales y del comportamiento, entre otros. Todos tienen como causa probable las condiciones ambientales. En las conclusiones finales del estudio se establece que la comunidad de Alpuyeca se encuentra entre las principales localidades que aportan el 80 por ciento de defunciones por diferentes causas en la entidad.

Durante más de 30 años se depositaron en el Cerro de Milpilla, en la comunidad de Tetlama, cerca de 400 toneladas de basura diarias proveniente de los municipios de Cuernavaca, Xochitepec, Juitepec, Zacatepec y Temixco, en Morelos. Clandestinamente se enterraron askareles, los residuos altamente contaminantes, de sustancias usadas en el proceso de almacenaje y distribución de energía eléctrica, provenientes de una empresa. Aunque no existía permiso o autorización para tirar los residuos sólidos en este lugar, ni tampoco se contaba

con infraestructura para recibirlos y tratarlos, se dejaron allí. El tiradero —recuerda el periodista Juan Balboa— fue bautizado como el basurero de la muerte.

Cerros de desperdicios acumulados durante años produjeron ríos de lixiviado, el líquido color petróleo que nace de la compactación de los desechos sólidos con el agua. Los lixiviados corrieron hacia el cauce del río y las represas. Sin sistema de drenaje y con agua de pozo sólo una vez por semana, las comunidades vecinas se abastecieron del líquido vital en el río.

Rubén Espinosa realizó, en el Departamento del Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Iberoamericana, análisis de los lixiviados y de agua del río. El estudio demostró —escribe Mariana Norandi— que éste contiene metales pesados como mercurio y arsénico por encima de la norma oficial mexicana (NOM) y, por tanto, ese líquido no es apto para el consumo humano. "Ambas sustancias son muy cancerígenas", aseveró Espinosa.

El mal se hizo aún mayor por la incineración de toneladas de basura depositada al aire libre, que produjo dioxinas y furanos, compuestos altamente tóxicos considerados potenciales agentes cancerígenos. Estas sustancias fueron responsables de la aparición de enfermedades y posteriormente malformaciones congénitas entre los habitantes de Alpueyeca.

Detrás del basurero del pueblo que vivía de la siembra de sorgo y cacahuate había un próspero negocio. Según denuncias de los pobladores de Alpuyeca, Adrián Rivera, alcalde panista de Cuernavaca entre 2003 y 2006, cobraba a diversos clientes por el uso de este basurero.

Desde 1994, las comunidades solicitaron a las autoridades información sobre la situación jurídica del tiradero, su contaminación y el papel desempeñado por el ayuntamiento de Cuernavaca. Todo fue en vano. Nunca hubo una respuesta clara a sus requerimientos. Hartos de pedir justicia infructuosamente por las vías institucionales, los pobladores decidieron cerrar el tiradero y bloquear caminos.

Hipólito García Ramírez, habitante de Tetlama, uno de los dirigentes del movimiento, denunció que en tres décadas el gobierno del estado nunca cumplió con la normatividad para tirar sus desechos, "el gobierno es el dueño de las leyes y él mismo las está violando, con ese tiradero a cielo abierto, en una contaminación al cien por ciento".

El gobernador panista Sergio Estrada Cajigal ofreció construir un relleno sanitario regional que sustituyera al de Tetlama antes de que finalizara su sexenio. No cumplió y volvió a utilizar, primero con engaños y después de forma clandestina, el tiradero a cielo abierto. Ante el incumplimiento oficial los habitantes de Alpuyeca decidieron movilizarse para lograr el cierre del basurero.

El 8 de marzo de 2006 los pobladores de Alpuyeca bloquearon las carreteras para evitar que los camiones de basura siguieran tirando allí los desperdicios. Los bloqueos duraron meses. Grupos de pepenadores del basurero y autoridades del más alto nivel estatal los amenazaron. El gobierno del estado les propuso construir una clínica, renovar las escuelas y crear empleos. En varias ocasiones la comunidad se enfrentó a la policía montada del estado y desafió la presión de elementos de Inteligen-

cia Militar. Los pobladores resistieron. "Camión que entre con basura, camión que se quema", gritaban las mujeres.

El 16 de junio de 2006 los pobladores, organizados en el Frente de los Pueblos en Defensa del Agua, Tierra y Aire, firmaron un acuerdo en el que se determinaba, de manera oficial, el cierre del tiradero. Asimismo se acordó un Programa de Biorremediación, el cual aún no se ha cumplido.

Sin el aval de la comunidad, con un soborno de 60 mil pesos mensuales, el gobierno estatal y municipal, lograron convencer al presidente de bienes comunales de Tetlama, Glorio Ramírez, que se abriera una nueva ruta para tirar la basura. Pero la maniobra sólo duró tres meses. El 25 de septiembre la mayoría de los habitantes de Tetlama se rebelaron en contra de la decisión de la autoridad comunal y del gobernador.

Años después de cerrado, el conflicto sigue. La comunidad decidió organizarse para el manejo ecológico de su propia basura, iniciar por cuenta propia estudios epidemiológicos y presionar a las autoridades para que emprendan un verdadero trabajo de bioremediación de todos los terrenos y ríos contaminados. Saben de lo que hablan. Cada día que pasa ven como sus hijos viven con la sangre envenenada por la irresponsabilidad y avaricia de funcionarios y empresarios. En ellos tienen un espejo en el que pueden ver reflejado el rostro de la barbarie neoliberal.

Lo sucedido en Alpueyeca y Tetlama no es un caso aislado. En el país existe una crisis nacional de la basura. En cada vez más pueblos son inocultables los casos de

enfermedades degenerativas detectados entre los habitantes que viven en las inmediaciones de estas acumulaciones. Por todos lados han estallado conflictos, no sólo en contra de estos emplazamientos, sino también en contra de su manejo privatizado.

## EL ROSTRO DEL DESPOJO

### La resistencia a los megaproyectos

De la mano del avance desbocado de la urbanización salvaje camina la construcción de grandes obras de infraestructura de conexión interurbana. En puntos clave de la geografía nacional se construyen febrilmente carreteras, libramientos, aeropuertos y puertos marítimos. La realización de esas construcciones implica la expropiación o el alquiler de terrenos ejidales o comunales y el traslado de su dominio a agentes privados. La tierra se convierte en un bien para especular.

De la noche a la mañana, con pequeñas indemnizaciones o pago de rentas de por medio, amplios núcleos de la población rural son despojados de los medios con que tradicionalmente se han ganado la vida. La oferta de crear empleo rara vez se cumple. Los núcleos campesinos se convierten en proletarios sin empleo, en migrantes obligados. Con sus territorios pierden también identidad y raíces.

Las grandes urbes son animales sedientos de energía. Sedes de la producción industrial, de los grandes

centros educativos y de investigación, capitales del consumo, las ciudades demandan cada vez más energía. El país se ha convertido en una gran planta ensambladora que requiere energía y agua para funcionar. Para abastecer esa demanda se construyen y establecen en enclaves estratégicos plantas de hidrocarburos, presas hidroeléctricas, plantaciones y fábricas para elaborar biocombustibles y parques de generación eólica, etc.

Como cereza en el pastel, los gerentes y administradores de esos grandes negocios, y los políticos que les abren la puerta para que sus intereses caminen sin trabas, comparten espacios de recreación, descanso y esparcimiento privilegiados en clubes de golf exclusivos, nacidos a la vera de tierras de cultivo. El golf —decía un célebre abad aficionado al deporte— es un negocio muy humilde porque para jugarlo hay que mirar al suelo. En esos enormes prados impecablemente regados, los señores del poder y del dinero reafirman sus lazos de sangre, sus alianzas sociales y formalizan sus negocios.

Pero esas grandes obras han provocado grandes descontentos. La resistencia popular a estos megaproyectos ha sido tenaz e intensa. El rechazo al club de golf de Tepoztlán, Atenco y La Parota son tres de los ejemplos más conocidos por la opinión pública. Hay mucho otros más, como la lucha contra los proyectos de puertos intermodales que destruyen los manglares de Manzanillo, el rechazo a la construcción de la presa de El Zapotillo en la zona alteña de Jalisco —que inundará tres comunidades cuando el embalse sea llenado— o la oposición al megaproyecto del Istmo.

El rechazo al megaproyecto de "El Tepozteco" marcó un hito en la forma en la que la inconformidad anidó en el México de abajo. Por principio de cuentas, demostró que el despojo podía frenarse.

## Agua para pastos recreativos, no para cultivos

El 18 de agosto de 1995 fue anunciada la aprobación para construir el Club de Golf El Tepozteco, en el municipio de Tepoztlán, sin consultar a los habitantes del municipio y sobre tierras comunales. Los lugareños se opusieron al proyecto con firmeza y triunfaron. Su protesta inauguró un ciclo de luchas medioambientales de gran calado en Morelos.

La mecánica del pulso tepozteco reprodujo, puntualmente, la lógica de otros conflictos sociales contra el despojo. El grupo industrial Kladt Sobrino (KS), formado por empresarios y políticos decidió, violentando la normatividad ambiental y las tradiciones comunitarias del municipio de Tepoztlán, construir un megaproyecto de club de golf con 800 residencias de lujo y un centro de informática de la trasnacional GTE, en un terreno de 280 hectáreas compradas hace 30 años a la comunidad. El desarrollo inmobiliario requería, sólo para regar pastos, la mitad del agua que el pueblo usa. Para emprender la obra, los empresarios obtuvieron la aprobación del presidente municipal, que había llegado a ese puesto ofreciendo oponerse al proyecto.

La resistencia a la modernización excluyente no era nueva. Los tepoztecos se habían opuesto anteriormente a la construcción de un teleférico y un tren escé-

nico. En 1994 padecieron el despojo de casi 50 hectáreas por parte de Guillermo Occelli, cuñado del ex presidente Salinas de Gortari, que construyó allí una residencia fastuosa con lago artificial y pozo profundo. El despojo pudo frenarse hasta enero de 2004, cuando, después de una batalla legal de ocho años en el Tribunal Federal Agrario, le quitaron a Occelli lo que legalmente nunca fue suyo.

Una semana después del anuncio de la aprobación del Club de Golf, el 25 de agosto, más de mil pobladores tomaron el palacio municipal y destituyeron al alcalde. El 24 de septiembre realizaron elecciones ejemplares y nombraron un nuevo presidente municipal. Como las policías judiciales y de tránsito desaparecieron, los lugareños se hicieron cargo de la seguridad y vigilancia del municipio. La comunidad fue resguardada por 16 retenes y guardias locales. Cada barrio y cada pueblo, nombró en asamblea un delegado para formar un consejo. El 29 de noviembre el Congreso Estatal decretó la desaparición de poderes en el municipio. El 10 de abril de 1996, una movilización pacífica contra la construcción del desarrollo inmobiliario fue reprimida por la fuerza pública, y uno de sus dirigentes asesinado de un balazo.

A partir de ese momento las provocaciones oficiales se intensificaron; cuatro dirigentes fueron detenidos, se levantó la clausura impuesta a la construcción del club; se promovió a grupos disidentes, y se bloqueó a las autoridades reconocidas por los ciudadanos. Para que quedara claro de qué se trataba el asunto, Guillermo Malo, asesor del entonces gobernador Jorge Carrillo Olea, le dijo

a los inconformes durante una negociación: "el gobierno sabe que los presos de Tepoztlán son inocentes, pero los liberará si ustedes permiten la instalación del Club..."

La estrategia gubernamental siguió al "pie de la letra" la receta aplicada durante años a distintos movimientos populares: designación unilateral de interlocutores, campañas de desprestigio público, aislamiento, desgaste, intentos de cooptación y, finalmente, la represión.

Resultó, sin embargo, que en este caso, el guión no dio resultado. Por el contrario, conforme el tiempo transcurrió, animado por la lucha zapatista a nivel nacional, el movimiento en lugar de desgastarse, se fortaleció. El terreno local en que se desarrolló la lucha adquirió una dimensión nacional (y hasta internacional). Y, el costo político de su solución se hizo más caro.

Distintas razones explican el fracaso de la estrategia gubernamental. Unas son de naturaleza interna, ligadas al tejido social tepozteco y sus demandas. Otras son de carácter nacional, y tienen que ver con el síndrome "post-Chiapas".

Entre algunas de las causas internas que explican la consistencia del movimiento se encuentran: una fuerte cohesión comunitaria, que dejó de lado sus conflictos domésticos. La resistencia en contra de megaproyectos que implican la pérdida del control de su territorio. Una larga lucha por la democracia municipal. La no partidización del conflicto, y su capacidad para generar una conducción política efectivamente plural. El apoyo del movimiento magisterial en la entidad. Y, la naturaleza ambiental de sus demandas.

Tepoztlán es un centro turístico, nacional e internacional, visitado y habitado por gente que vive y simpatiza con causas ambientalistas, entre las que las canchas de golf no tienen buena fama. Lo que allí sucede es noticia dentro y fuera del país. Adicionalmente, la lucha, fue parte de una desigual, accidentada y caprichosa indignación ciudadana que brotó con el levantamiento zapatista y que creció a lo largo de todo 1995, marchó en ascenso.

Por lo demás, después del asesinato de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz, y de la crisis económica de diciembre de 1994, los instrumentos estatales para generar consenso en los medios masivos de comunicación se vieron gravemente dislocados. El mensaje gubernamental comenzó a tener un grave problema de credibilidad. Su versión sobre lo sucedido en Tepoztlán no fue creíble.

Finalmente en 2001, después de una larga lucha, una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) cerró el caso con una sentencia: las 280 hectáreas sobre las que se quiso construir el megaproyecto, son de régimen comunal, pues la empresa Kladt Sobrino (KS) no acreditó la propiedad privada.

Movimiento precursor del nuevo tipo de luchas socioambientales, Tepoztlán mostró los nuevos aires que soplan desde abajo en muchas partes del país y el contexto político en el que se desenvuelven. La lucha hizo evidente la existencia de una grave crisis en la relación entre Estado y sociedad. Evidenció que el viejo corporativismo está más muerto que vivo, y que las salidas represivas no siempre funcionan. Indicó, como luego se vería en el caso de Atenco, cómo los viejos esquemas de nego-

ciación "posibilista" entre movimientos sociales y Estado, se han agotado.

## Atenco: los descendientes de Netzahualcóyotl

Cuando los niños de San Salvador Atenco dibujan su pueblo en los periódicos murales de sus escuelas, reproducen escenas en las que policías y helicópteros atacan a los pobladores. En sus viñetas aparecen hombres en prisión y víctimas de la violencia de las fuerzas del orden. Ellos no vivieron directamente la represión gubernamental, pero fueron marcados sicológicamente por los golpes que sus familiares y vecinos recibieron.

Cuando llega la hora del recreo o el momento de esparcimiento en las tardes, esos mismos niños evitan jugar a policías y ladrones. ¿Acaso hay algún pasatiempo infantil en el que los malos persigan a los malos? Prefieren jugar a los zapatistas y a los traidores. Unos se cubren el rostro con un pasamontañas, los otros deben enfrentar la indignidad de no defender su tierra.

La herida está abierta y los pobladores de Atenco se niegan a olvidar. El 3 y 4 de mayo de 2006, más de 3 mil 500 agentes de distintas corporaciones policíacas desbarataron brutalmente una protesta campesina. Más de 200 personas, entre las que se encontraban nueve menores, fueron detenidas sin orden de aprehensión, salvajemente golpeadas y torturadas. La mayoría de las 47 mujeres que fueron presas sufrieron abusos sexuales.

Su delito fue rechazar con éxito la construcción de un aeropuerto en sus tierras. Su triunfo fue una afrenta

que las élites políticas y económicas del país nunca perdonaron. Cuatro años y medio después, se cobraron el desafío.

Se trató de una revancha anunciada. Cuando en marzo de 2003, el relator especial de Naciones Unidas, Miloon Kothari, conoció la situación que se vivía en San Salvador Atenco, recomendó al gobierno mexicano garantizar "que no haya repercusiones ni medidas punitivas contra los activistas y defensores de vivienda. El relator especial sigue preocupado por las acusaciones formuladas contra los activistas principales, que se han convertido en un obstáculo para el mantenimiento del diálogo y la reconciliación". Lamentablemente Kothari acertó en su advertencia.

La historia es conocida. Al llegar a Los Pinos, Vicente Fox promulgó un decreto presidencial que expropiaba más de mil hectáreas de San Salvador Atenco para construir un aeropuerto. La medida no sólo afectaba las viviendas y tierras de labranza de sus pobladores, sino también su iglesia y el panteón donde descansan sus muertos. Se pretendió desaparecer casi todo aquello que para la comunidad es sagrado, es decir, diferente, y más importante que la realidad ordinaria: lo que le da continuidad y raíces.

El gobierno federal quiso comprar en Atenco lo que para los campesinos no está en venta. Quiso adquirir con pesos y centavos lo que escapa a las relaciones mercantiles.

Muchos ejidatarios consideran a la tierra tan sagrada como su cementerio y su santuario. Para ellos no es

una mercancía cuyo valor dependa de la ley de la oferta y la demanda ni un producto que deba entrar al mercado. De ella viven. Con ella han forjado su identidad y razón de ser. Merced a ella han sacado adelante a sus familias. No es un bien intercambiable, ni siquiera por uno similar ni aunque sea de mayor calidad.

No necesitan haber ido a la escuela para saber que la obtuvieron por la lucha de sus antepasados; lo suyo no es enseñanza escolar, sino la vida misma. No están dispuestos a perder su único patrimonio por causa de una dudosa "utilidad pública" que servirá a unos cuantos para hacer negocios.

Los campesinos de Atenco no se oponen al progreso, pero sí a una de sus versiones, que no los incluye. "Queremos el progreso", han dicho de muchas maneras. "Queremos proyectos para el campo", han respondido a quienes los acusan de frenar el desarrollo.

Sus palabras no hacen otra cosa que corroborar sus acciones. Durante décadas se han organizado para introducir agua y luz, por tener servicios, por mejorar sus tierras. Antes que líderes políticos sus dirigentes han sido gestores sociales a favor del bienestar de sus pueblos.

El decreto expropiatorio perjudicaba 15 núcleos ejidales pertenecientes a tres municipios: seis en Atenco, uno en Chimalhuacán y siete en Texcoco. Dos de ellos, ubicados en Texcoco, perdían sólo tierras de uso común. El mayor número de ejidatarios y la mayor cantidad de superficie expropiada se localizaba en Atenco. Tan sólo en San Salvador, centro de la resistencia, 1 482 labriegos perderían más de mil hectáreas.

Los campesinos se la jugaron con todo. Y ganaron. El gobierno echó atrás el decreto. Lejos de abandonar la lucha por otras demandas, los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) mantuvieron viva la movilización, utilizando las mismas tácticas que habían puesto en práctica en su resistencia a la expropiación de las tierras. Además, su apoyo a otros movimientos sociales fue constante y los vínculos con otras organizaciones —los zapatistas incluidos—, profundo.

En mayo de 2006 llegó para los poderosos la hora de la venganza. Montaron una gran provocación. Los dirigentes de Atenco fueron encarcelados. Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron condenados a 67 años y medio de prisión. Se les acusó de secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación. Los dos primeros son campesinos y tenían, al ser detenidos, 52 años de edad. Héctor Galindo es abogado y se encontraba en sus treintas. Sus condiciones carcelarias fueron muy difíciles.

Los responsables gubernamentales de la represión y los abusos están libres. Enrique Peña Nieto, ex gobernador del Estado de México se prepara para ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República y ocupa su tiempo en aparecer en las revistas del corazón. Eduardo Medina Mora fue nombrado procurador general de la República y luego Embajador de México en Gran Bretaña. El vicealmirante Wilfrido Robledo trabaja para uno de los hombres más ricos del país y espera el momento de reinsertarse en la administración pública.

¿Por qué esa saña con Atenco? Por principio de cuentas, porque la lucha exitosa de los pobladores de Atenco organizados en el FPDT se convirtió en un doble símbolo profundamente arraigado en el imaginario político nacional. Hacia abajo, en ejemplo de que es posible enfrentar exitosamente las decisiones arbitrarias del poder, sin tener que echar mano de negociaciones oprobiosas. Hacia arriba, en muestra de lo nefasto que resulta la supuesta renuncia al uso "legítimo" de la violencia del Estado.

La decisión del Ejecutivo Federal de dejar sin efecto el decreto expropiatorio que afectaba las tierras ejidales para construir un gran aeropuerto, provocó que poderosos intereses inmobiliarios y políticos perdieran un gran negocio. Para ellos el gobierno federal sentó un precedente inadmisible al negociar con los inconformes en lugar de ejercer la mano dura. Su venganza consistió en presentar la medida como una muestra inadmisible de debilidad gubernamental.

La animadversión gubernamental y empresarial hacia ellos se hizo cada vez mayor. Su existencia misma se convirtió en un hecho intolerable, en la evidencia misma de un precedente inadmisible: negociar con los inconformes en lugar de ejercer la mano dura.

Se estableció así un clima de crispación sostenido y ascendente. En lugar de que el gobierno estatal buscara canales de diálogo y negociación, los cerró. Lo que siguió fue la represión.

Aunque ya evitaron su construcción una vez, sobre los pobladores de Atenco se mantiene viva la amena-

za de edificar un nuevo aeropuerto, ahora en un terreno federal donde se encuentra el lecho del lago de Texcoco. A pesar de que el decreto que expropiaba sus tierras se abrogó en agosto de 2002, las autoridades siguen abriendo vialidades en el territorio que abarcaba.

En las comunidades aledañas la mancha urbana devora los campos de labranza y el agua. Líderes ejidales hacen negocio cambiando el uso del suelo y vendiendo predios a grandes inmobiliarias, especialistas en levantar viviendas como si fueran gallineros y en construir grandes complejos comerciales.

Pero los habitantes de Atenco resisten. Quieren vivir en paz, ser lo que han sido. Siembran maíz, alfalfa, calabaza, frijol y haba. Cultivan jitomate en invernaderos. Extraen del lago espirulina, alga conocida por sus cualidades alimenticias, y la procesan. Hacen asambleas, impulsan proyectos productivos, se solidarizan con otras luchas y no olvidan los abusos sufridos. No perdonan el agravio que sufrieron. Mantienen viva la memoria y la indignación.

"Somos descendientes de Nezahualcóyotl", dicen los pobladores de Atenco. La sangre del coyote que ayuna, del tlatoani de la ciudad-estado de Tezuco, del hombre sabio que murió en 1472, corre por sus venas. En sus tierras, aseguran, vivieron las esposas, concubinas e hijos del poeta y monarca. El mito sostiene que sus restos están enterrados en la iglesia del poblado.

Nezahualcóyotl, cuenta la historia, supo recuperar el reino que su padre perdió a manos de Tezozómoc, señor de Azcapotzalco. Con astucia e inteligencia evitó

su propia muerte, organizó la resistencia contra la tiranía tepaneca, vengó el asesinato de su padre y recuperó el trono en 1429. Muchos en Atenco han sacado la lección y tienen presente esa experiencia.

Amor por la tierra, vínculo profundo con el terruño, identidad con sus raíces, deseo de justicia, organización, voluntad de seguir siendo quienes son, dan a los habitantes de Atenco fuerza y horizonte. A dos años de la represión, el movimiento de los descendientes de Netzahualcóyotl sigue vivo. Los dibujos y los juegos de sus niños lo recuerdan día a día.

## Ignacio del Valle: el tamaño del miedo

Ignacio del Valle estuvo en la cárcel durante cuatro años, hasta que recobró la libertad en junio de 2010. Habitó una celda de 3 metros por 2, en el Módulo 3 del penal de alta seguridad del Altiplano. Purgó una condena de 112 años y seis meses de prisión.

En su morada no hubo noche ni día. La luz estuvo prendida siempre. A veces disfrutó de 35 minutos de sol diarios. Le revisaron la correspondencia y los mensajes que le llegaban. Lo sometieron a revisiones humillantes. Por su crujía se pasearon 10 o 15 vigilantes encapuchados con perros. Le quitaron sus escritos y los rompieron. No supo lo que sucedía afuera. Pudo hablar por teléfono 10 minutos, a tarifas millonarias. A menudo, los guardias redujeron ese tiempo a sólo 7 u 8 minutos. Cuando sus parientes lo visitaron, los custodios se prodigaron en los

malos tratos. Su padre y su hermano murieron estando él en prisión.

Nunca robó ni mató a nadie. No consumió drogas ni las vendió. No extorsionó a ninguna persona. Es un hombre honesto. Es un luchador social que defiende las tierras de su pueblo. No es delincuente. Sin embargo, estuvo prisión con los más peligrosos criminales asesinos, narcotraficantes y secuestradores del país.

Fue acusado de los delitos de secuestro, ataques generales a las vías de comunicación y secuestro equiparado. Fue detenido sin orden de aprehensión en una casa de la ciudad de Texcoco, Estado de México, a varios kilómetros de distancia de su hogar, en San Salvador Atenco. Su verdadero delito fue protestar para defender a su pueblo, fue no rendirse.

Ignacio del Valle es campesino, serigrafista, carnicero y padre de familia. Durante años fue obrero en la zona industrial de Ecatepec. Laboró en empresas como Guanos y Fertilizantes. El trabajo era rudo y la paga escasa. En 1981 fue promotor de educación física en la zona de Ixtapaluca.

Hasta su detención, sembró una pequeña parcela de una hectárea de riego en su pueblo natal. De ella sacaba maíz, frijol, calabaza y hortalizas. A pedido, cocinaba barbacoa de borrego, res, puerco y pollo. Montó en su pueblo un taller de serigrafía, en el que estampaba bermudas. Le iba bien cuando no había competencia, pero cuando comenzó a entrar el bordado, el trabajo escaseó.

Ignacio nació el 31 de julio de 1953, en el seno de una familia como la que él formó después. Su padre era

campesino y carnicero. Tuvo seis hermanas y un hermano. Con muchos sacrificios, los padres lograron darles educación a todos. Una es normalista, otra doctora, una más modista, otra secretaria. Él estudió sociología en la UNAM, pero no pudo terminar la carrera.

Convencido de la importancia de la educación, de joven, en su pueblo, junto a otros tres o cuatro amigos, se dedicó a alfabetizar a la gente de más edad que no sabía leer ni escribir. Se trataba de que salieran adelante. Abrieron primarias, secundarias y una preparatoria abierta. Querían llevar la cultura al pueblo. Formaron una biblioteca popular promoviendo el kilómetro del libro. Su gran sueño, establecer una universidad en su región, está pendiente.

Él y sus compañeros fundaron un grupo de apoyo comunitario. Ayudaban al pueblo y a su gente. Cuando algún vecino estaba muy grave y no tenía dinero lo metían al hospital. Para pagar la cuenta, juntaban 10 o 15 hombres y mujeres y donaban sangre. Ayudaban a gente que no conocían.

San Salvador Atenco era, a finales de la década de los sesenta, una comunidad rural ubicada a escasos 35 kilómetros de la Ciudad de México, que sufría los embates de la urbanización salvaje. Era un municipio desprovisto de servicios, cercado por la especulación urbana. Pero era, también, una localidad en la que sus habitantes, a decir de María Trinidad Ramírez, la esposa de Ignacio, se sentían seguros. "Uno nació allí. Puede caminar por donde sea sin causar problemas o que nos los causen.

Somos libres. Es nuestro territorio. Sabemos lo que nos corresponde. Lo queremos y lo conocemos."

En Atenco había unidad y respeto. Sobrevivían muchas costumbres de sus antepasados. Estaba vivo el amor a la tierra, la que "les da vida", y a la que se ve como un legado que hay que cuidar y traspasar a hijos y nietos. Aunque formalmente la presidencia municipal estaba en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la comisaría de bienes ejidales y la junta de agua potable eran controladas por los ejidatarios y el pueblo.

Como ha explicado Damián G. Camacho Guzmán, antes de que, en 2001, los pobladores de ese municipio se movilizaran para defender sus tierras del decreto expropiatorio para construir el aeropuerto y formaran el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, habían vivido un largo proceso previo de luchas comunitarias, municipales y regionales. En ellas fundaron organizaciones como la Unión Social Cultural de Atenco, Habitantes Unidos de San Salvador Atenco, Frente Popular Región Texcoco y el Frente Popular del Valle de México.

La movilización social permitió arrancarle a los distintos gobiernos la solución a sus demandas más sentidas: pavimentación, canchas deportivas, hospitales, biblioteca, auditorio, agua potable. Simultáneamente, se convirtió en la vía para enfrentar, con éxito desigual, aumentos en los impuestos prediales, expropiación de terrenos, construcción de carreteras sobre tierras ejidales y el trasvase de sus acuíferos a la Ciudad de México.

Ignacio del Valle estuvo al frente de estas luchas. Ejerció un liderazgo genuino y desinteresado. Lejos de

corromperse, se mantuvo fiel a su comunidad. Defendió las tierras de su municipio cuando unos cuantos poderosos quisieron hacer grandes negocios con ellas.

Ignacio es un artista nato. En el penal dibujó sobre papel con bolígrafo y, cuando pudo, coloreó sus obras. Escribió, también, largas cartas. En una de ellas, enviada a sus compañeros el 22 de octubre del 2008, les dijo: "¡Del tamaño de nuestra sentencia, de éste mismo es el miedo que nos tienen!" No le faltó razón: la monstruosidad de su condena fue del tamaño del miedo de sus enemigos.

Al obtener su libertad le preguntaron a Ignacio qué había aprendido en la cárcel. Respondió: "No debemos tolerar la injusticia cotidiana. Es imposible que al vernos en las condiciones en que estamos no hagamos nada. Tenemos que despertar a ese gran pueblo que de alguna manera ha sido adormecido. Como experiencia, la vida nos puso en esta situación y la tenemos que enfrentar".

¿Cambiaría algo de lo que hizo? —le reviró la periodista. "No nos arrepentimos de nada, estamos conscientes de lo que perseguimos. Lo que hemos hecho fue sólo defendernos. Por la realidad que hemos vivido entendimos que los derechos no sólo se exigen. Ya basta de que sólo exijamos ser escuchados. La libertad la tenemos que tomar en nuestras manos, el pueblo debe tomar lo que le corresponde en forma natural".

Defenderse es lo que hacen por todo el país los pueblos y comunidades que se niegan a que grandes proyectos de infraestructura los despojen de sus tierras y sus recursos. Es lo que hacen, en medio del acoso y la desinformación, los pueblos del Istmo de Tehuantepec

que rechazan la instalación de grandes torres eólicas en sus territorios, sin consulta y pagando rentas miserables. Defenderse es lo que hacen dirigentes como Ignacio del Valle y como Rodrigo Flores Peñaloza.

## Molinos de viento en el Istmo

Al maestro Rodrigo Flores Peñaloza lo quieren acusar de la muerte de Reynaldo Ordaz Velásquez quien falleció el 28 de octubre de 2011 en el tramo La Ventosa-La Venta de la carretera Panamericana, en Oaxaca y era empleado de una empresa eólica.

Pero da la casualidad que ese día Rodrigo Flores, que es dirigente del Frente por la Defensa de la Tierra y los Territorios del Istmo de Tehuantepec, e integrante de la Comisión Política de la sección 22 del magisterio oaxaqueño, se encontraba a muchos kilómetros del lugar de los hechos.

El hostigamiento a Rodrigo no es nuevo. Desde meses atrás, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los empresarios andan tras él. Apenas en junio de 2011 se le acusó de ser probable responsable en la comisión del delito de amenazas, lesiones y demás, contra una empleada de seguridad de la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, filial de la española Renovalia Energy). El Ministerio Público Federal, con sede en Matías Romero, le giró una orden de presentación por su participación en las manifestaciones contra las altas tarifas eléctricas.

A mediados de junio de 2011, indígenas del municipio Unión Hidalgo bloquearon la entrada del parque eólico Piedra Larga, construido en ese municipio por De-

mex. En junio, al grito de ¡Aquí está la ley!, empresarios españoles acompañados de policías estatales intentaron desalojar a los lugareños. Según Flores Peñaloza, los campesinos se dieron cuenta de que los españoles les hicieron firmar un contrato leonino de renta de tierras y ahora están exigiendo que las autoridades judiciales anulen el convenio.

Pero Demex quiere las tierras de Unión Hidalgo. Y ante los intentos de los empleados de la empresa por apoderarse de ellas, diferentes organizaciones sociales de la región, entre ellas el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec y la sección 22 del SNTE iniciaron una jornada de movilización el pasado 24 de octubre, con protestas en Unión Hidalgo, Juchitán y Zanatepec.

Como parte de esta jornada, el 28 de octubre la coalición opositora bloqueó la carretera Panamericana. Un grupo de 50 policías municipales, golpeadores, líderes de la CTM y caciques, pertrechados con armas de fuego y machetes, y dirigidos por Ventura Ordaz Santiago, los atacó con lujo de violencia. Durante 45 minutos los machacaron a golpes y patadas. Faltando 15 minutos para las 5 de la tarde, los agredidos lograron escapar. Poco después se reportó la muerte de Reynaldo Ordaz.

Las protestas en Unión Hidalgo son parte de un amplio movimiento social que rechaza la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. Sin tener la menor idea de lo que sucede en la región, a finales de 2010 la secretaria de Energía de México, Georgina Kessel

Martínez, expresó que la oposición a los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, específicamente en Unión Hidalgo, son cosas del pasado.

El parque eólico, que se construirá sobre una superficie de mil hectáreas de tierras ejidales, comunales y de pequeños propietarios y tendrá capacidad de 90 megavatios, no abastecerá de electricidad a los pobladores del municipio, sino a 65 centros de las empresas Bimbo y Femsa.

Los habitantes de Unión Hidalgo se oponen a que se construya el parque eólico Piedra Larga en sus tierras, por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras. Según ellos, el proyecto no garantiza condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente.

El proyecto eólico del Istmo de Tehuantepec ha convulsionado la región y precipitado un enorme número de conflictos sociales. Desde 1999 grupos de ejidatarios iniciaron un movimiento de protesta motivado por los bajos precios que pagaba la CFE por la ocupación de las tierras y por el incumplimiento de los ofrecimientos de obra pública hechos al ejido. Las comunidades indígenas han sufrido el despojo legal de más de 12 mil hectáreas de su propiedad, en lo que constituye una contrarreforma agraria de largo aliento. El uso del suelo ha cambiado y se ha abandonado la producción de alimentos. A cambio, un grupo de empresas trasnacionales, en su mayoría españolas, se han beneficiado con el respaldo del

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno de Felipe Calderón y de los caciques del Partido Revolucionario Institucional.

El despojo y privatización se opera por conducto de contratos de arrendamiento de tierras amañados y leoninos, que favorecen a las empresas trasnacionales, con duración de 30 años, renovables automáticamente por otros 30, y por los que, con frecuencia, se paga a los dueños de las tierras 150 pesos anuales por hectárea.

Esos contratos se firmaron acompañados de promesas de desarrollo y bienestar para los campesinos y la región. Sin embargo, con el paso de los años los campesinos se han encontrado con la destrucción de sus tierras, engaños, afectaciones, abusos, amenazas, intimidación, enfrentamientos intercomunitarios y problemas entre pueblos.

Para ello, se trata de un proyecto que despoja a los pueblos de su patrimonio biocultural, en beneficio únicamente de las empresas que generan energía eléctrica con su viento y sobre su tierra. De allí su rechazo.

## NEGOCIOS MUY MARRANOS

### Upton Sinclair en México

Aunque fue escrito hace casi cien años, *La Jungla,* el libro del escritor Upton Sinclair, es de gran utilidad para comprender lo que sucede en el México de hoy. Su actualidad es estremecedora.

Upton Sinclair nació en Estados Unidos en 1878 y murió 90 años más tarde. Fue un autor muy prolífico. En 1947 ganó el Premio Pulitzer. Promovió el movimiento en la literatura y el periodismo de Estados Unidos conocido como "muckrakers" ("escarbadores en la basura"), caracterizado por la producción de obras de fuerte crítica social. Se involucró en experimentos sociales, apoyó económicamente —y vivió— en cooperativas y promovió el consumo de comida sana.

*La Jungla* es su novela más conocida. En ella describe las graves condiciones de trabajo y sanidad dominantes en los rastros y empacadoras de carne estadounidenses, en la que la mayoría de los obreros eran inmigrantes provenientes de Europa oriental. Para escribirla, pasó siete semanas viviendo en los mataderos de Chicago y haciendo visitas clandestinas a los frigoríficos. El libro se convirtió en un *bestseller* después de su publicación en 1906.

Las semejanzas entre la narración de Upton Sinclair y lo que acontece con los puercos en Granjas Carroll en Perote, Veracruz, son aterradoramente sorprendentes. La filial mexicana de la trasnacional Smithfield has sido señalada por distintos estudios científicos como el epicentro de la epidemia de gripe AH1N1 que sacude al planeta.

Escribe Sinclair en *La Jungla*: "El cerdo tenía cadenas en las piernas. De repente, se abalanzaba sobre él, agarrándole la pierna. La máquina agarraba el cadáver del cerdo del suelo y después lo ponía en el segundo nivel, pasando por una máquina maravillosa con muchos raspadores que se ajustaban al tamaño y a la forma del

animal y lo echaba por el otro lado con casi todo su pelo afeitado. Luego, pendiendo de otra máquina, daba un paseo sobre un carro, ahora pasando por dos líneas de hombres, quienes estaban sentados en una plataforma elevada, cada uno haciéndole su trabajo específico al animal muerto cuando pasaba. Uno rasgaba el exterior de una pierna, el otro el interior de la misma. Con un golpe rápido y preciso le cortaba el cuello; con dos golpes más lo degollaba, cayendo la cabeza al suelo y desapareciendo en un hueco. Aún otro hacía una larga incisión; el segundo abría el cuerpo más anchamente; un tercero, con una sierra, le cortaba el esternón; el cuarto le aflojaba las entrañas; el quinto se las quitaba. Había hombres para rasgar cada lado y otros para rasgar el lomo; había hombres para limpiar adentro, para revolverlo y limpiar todo el cuerpo".

La descripción del proceso de trabajo en los mataderos de Chicago sigue siendo válida en México 105 años después de publicada en Estados Unidos. Sólo que la situación nacional es aún peor.

## Un negocio muy marrano

Smithfield, el más importante procesador de puerco en el mundo, se puso en 2009 en el centro de la tormenta. Científicos y analistas determinaron la probabilidad de que el brote de influenza porcina que asoló al mundo se relacione con Granjas Carroll, una de sus dos empresas subsidiarias en México. Muy probablemente la enfermedad fue gestada en el modelo de producción industrial de puercos.

La Gloria es una pequeña comunidad del municipio de Perote. Su territorio está rodeado por las instalaciones de la empresa. Allí se detectó el primer caso de gripe AH1N1: un niño de 5 años de nombre Edgar Hernández, que logró sobrevivir a la enfermedad y a quien como homenaje se le construyó una estatua.

La contaminación que ha provocado Granjas Carroll y su impacto en la salud de los pobladores de las comunidades que se encuentran alrededor de los centros de producción, así como las lagunas en que depositan los desechos animales, ha propiciado todo tipo de males. Los habitantes de las localidades respiran día y noche una peste infernal. Las tolvaneras arrastran la fetidez a muchos kilómetros a la redonda. Ellos creen que sus enfermedades respiratorias se deben a la empresa.

El caso de Granjas Carroll y la gripe porcina es paradigmático. Allí se expresan muchas de las características de la actual crisis alimentaria y agrícola. Con claridad aparece el vínculo existente entre agricultura industrial, libre comercio, devastación ambiental y colapso sanitario. Al buscar cerrar lo que Carlos Marx llama los poros del proceso de valorización del capital, la gran industria porcícola y aviaria ha puesto en pie un sistema generador de cepas patógenas de fiebre porcina y avícola. Esto es lo que explica la aparición de una red filogenética de influenzas que afectan al ser humano precisamente cuando se globaliza el modelo industrial de producción avícola y porcina. Esta epidemia es prueba del fracaso de un modelo de producción y consumo que debemos reemplazar antes de que sea tarde.

Aprovechando el Tratado de Libre Comercio, Smithfield se estableció en Veracruz y Puebla, y en Sonora en 1999. La empresa estadounidense es propietaria del 50% de las acciones de Granjas Carroll, en Puebla y Veracruz, y de Agroindustrial del Noroeste (Norson) en Sonora. Durante el año fiscal 2008, Granjas Carroll produjo 950 mil animales, mientras Norson crió 467 mil puercos. El 10 por ciento de la producción porcícola nacional.

Esa empresa destina el grueso de su piara al mercado nacional. Engorda alrededor de un millón de cerdos en pie al año. La mayoría de ellos se mandan al valle de México para su sacrificio en rastros y su consumo en el Distrito Federal y Estado de México. El resto se envía a Veracruz y a la península de Yucatán.

Smithfield, el gigante agroalimentario productor de puercos, es una de las más grandes empresas del mundo. En 2011 ocupó el lugar número 216 entre las 500 firmas más importantes de Estados Unidos, según la revista *Fortune*. Es la tercera compañía más poderosa en la producción de alimentos, después de Archer Daniels Midland y de Tyson Foods. Sus ingresos en 2010 superaron los 11 mil 200 millones de dólares. Durante 2008 sacrificó más de 31 millones de marranos y empacó alrededor de 3 millones de kilos de carne de cochino, con lo que controla casi la tercera parte del mercado de Estados Unidos.

El presidente del consejo de directores de Smithfield Foods se llama Joseph Luter III. Vive en un condominio de lujo en Manhattan y se mueve por el mundo en un *jet* de la empresa y un yate privado. El periodista Jeff Tietz, de

*Rolling Stone,* cuenta en su artículo "Boss Hog" —aparecido en diciembre de 2006— que el empresario se describe a sí mismo como un hombre rudo en un negocio rudo. Según él, la mayoría de los vegetarianos son neuróticos.

La compañía líder en la engorda y procesamiento de puercos es también una formidable maquinaria contaminante. Cada año genera toneladas de basura que destruyen ríos, matan millones de peces y enferman personas.

La reputación de la empresa es terrible. En tres ocasiones (1997, 2000 y 2006) ha aparecido en la lista que la revista *Multinational Monitor* elabora para designar a las peores empresas del año. La primera se dio en 1997, por la contaminación ambiental que provoca. La segunda fue por sus prácticas para monopolizar la cría y engorda de marranos, dejando fuera del mercado a los pequeños productores familiares. La tercera por sus prácticas laborales, antisindicales y violatorias de la legislación estadounidense.

Smithfield creció más de mil por ciento entre 1990 y 2005. Su proceso de concentración fue posible gracias a una estrategia empresarial en la que controla cada eslabón de la cadena de producción, desde el momento en el que el puerco nace hasta que pasa a la carnicería. Ha conquistado y monopolizado los mercados quebrando a todos los pequeños ganaderos alrededor suyo.

Pero su impresionante crecimiento económico se enfrenta a un grave problema: las cada vez más estrictas regulaciones ambientales y laborales, y las multas por violarlas. Smithfield ha sido reiteradamente acusada de

contaminar agua, suelo y aire, y de no respetar los derechos humanos de sus trabajadores. Human Rights Watch documentó ampliamente en su reporte "Sangre, sudor y miedo", publicado en 2005, los abusos que comete esta empresa.

Para evadir las regulaciones, Smithfield ha trasladado parte de sus operaciones a países en los que las leyes que protegen el medio ambiente son más laxas, y los políticos están más dispuestos a ayudar a la empresa. Es así como ha instalado fábricas productoras de cerdo en otros países.

Las granjas de Smithfield son verdaderas ciudades de puercos, rodeadas de mares de mierda y desechos, que crecen a la sombra de regulaciones ambientales débiles y autoridades permisivas. Su proceso de producción ha convertido la cría y engorda de los cerdos en una actividad industrial. Los animales viven en jaulas que impiden su movimiento, en barracas con ventilación deficiente, con iluminación constante para estimular su crecimiento. Mal viven respirando aire saturado en gases, sin ver la luz del sol, expuestos a todo tipo de enfermedades y hongos, con su sistema inmunológico lastimado, los puercos industriales verían en cualquier chiquero de una granja familiar un paraíso. En ocasiones se asfixian al pisotearse unos a otros. Un animal enfermo contagia a los demás fácilmente.

Los cerdos generan, en promedio, tres veces más de materia fecal que los seres humanos. El volumen de excremento que evacuan los animales de Granjas Carroll es superior al producido por los habitantes de las ciuda-

des de Guadalajara y Monterrey en conjunto. La diferencia entre ambos es que mientras esas ciudades poseen sistemas de drenaje y alcantarillado para el manejo de las aguas negras, las compañías porcícolas no cuentan con ellos.

Los desechos fecales provenientes de las granjas-factorías de puerco están llenos de sustancias tóxicas. En ellos viven cerca de 100 microorganismos patógenos que pueden hacer enfermar a los humanos, tales como *salmonella, cryptosporidium* o *giardia*. Cada gramo de excremento de un marrano industrial contiene 100 millones de bacterias coliformes.

En el caso de Granjas Carroll, las heces fecales de los cochinos son depositadas en lagunas de oxidación a cielo abierto distribuidas por el valle de Perote. Todo tipo de gases volátiles son expulsados a la atmósfera, junto con millones de gérmenes patógenos. Muchos científicos señalan que éstas son un foco de contaminación de agua, suelo y aire.

Al igual que en los países de Europa del este, donde opera Smithfield, los problemas ambientales y de salud pública generada por estas ciudades de puercos y la facilidad para asociarse con importantes políticos locales han sido evidentes en el caso de Granjas Carroll.

El gobierno de Fidel Herrera, en Veracruz, y el Partido Revolucionario Institucional utilizaron a la empresa para promocionar proyectos sociales a partir de donaciones hechas por la trasnacional. Simultáneamente, las autoridades federales se han dedicado a cubrir a la compañía.

La contaminación que ha provocado Granjas Carroll y su impacto en la salud de los pobladores de las comunidades que se encuentran alrededor de los centros de producción, así como las lagunas en que depositan los desechos animales propiciaron, desde 2004, el surgimiento de un movimiento ambientalista regional. La empresa respondió reprimiéndolo.

A comienzos de 2005, pobladores de La Gloria y Xaltepec, a los que se sumaron 10 comunidades más, se unieron para protestar, por medio de firmas, en contra de la expansión de Carroll. Hicieron asambleas y marchas. El 26 de abril de 2005 los habitantes de Totalco realizaron la primera marcha en contra de la trasnacional. La maestra de telebachillerato Verónica Hernández Argüello escribió un comunicado que fue leído en la radio local, llamando a defender el medio ambiente. La empresa la demandó legalmente por difamación, igual que hizo con otros vecinos. En total, ocho ambientalistas sufrieron procesos legales en su contra. Tres de ellos —Verónica incluida— fueron detenidos y obligados a pagar una fianza de 8 mil pesos para salir de la cárcel.

Los habitantes de Alchichica, Guadalupe Buenavista, Quechulac, Guadalupe Victoria, San Luis Atexcac, Portes Gil, San Pedro el Águila, Techachalco, Iztoten, La Gloria y Xaltepec, comunidades enclavadas alrededor de las ciudades de puercos de Granjas Carroll, viven desde hace muchos años con miedo a la contaminación.

Como lo recuerda Alejandro Nadal, el capital siempre ha codiciado someter la producción agrícola y pecuaria a su lógica de valorización. En la industria pe-

cuaria, los grandes rastros y mataderos de ganado son un ejemplo de una línea de ensamble, pero al revés. En lugar de ir armando un producto final, a la res sacrificada se le va desensamblando por etapas. Pero la mejor imitación de procesos industriales en la producción pecuaria se da en los lotes de producción de ganado pecuario en establos modernos y en las llamadas granjas porcícolas y avícolas. El hacinamiento y el afán de rentabilidad rápida han conducido a uno de los criaderos de agentes patógenos más peligrosos del mundo. Eso fue lo que sucedió en Perote, Veracruz.

## Los negocios del Rey del Ajo

Los habitantes de las comunidades de la cuenca del río Lajas, al norte de Guanajuato, padecen graves enfermedades. El agua que beben está envenenada. Es la única que tienen.

La quiebra de la salud comunitaria de estos pobladores tiene una explicación. Javier Usabiaga, secretario de Agricultura durante el gobierno de Vicente Fox (entre 2000 y 2005), conocido como *el Rey del Ajo* por sus ventas masivas de esta hortaliza al otro lado de la frontera del río Bravo, renta tierras y aguas en la región. Las trabaja intensivamente, abatiendo los acuíferos y salinizando los campos de cultivo. En ellas siembra brócoli y ajo y los exporta a Estados Unidos, aprovechando el Tratado de Libre Comercio. La explotación intensiva de los mantos acuíferos ha propiciado que el agua que beben los pobladores esté contaminada con arsénico, cianuro y otros

minerales. Ése es el origen de sus males. Por eso padecen necrosis en las extremidades y enferman.

Los campesinos y sus familias de la cuenca del río Lajas se han organizado para denunciar y remontar su infortunio. Son muy pobres. Víctimas de la acción combinada de lo peor de la agricultura industrializada, el libre comercio y la corrupción gubernamental, resumen en su tragedia la forma en que la crisis de la salud nace del acoplamiento de la crisis ambiental con la deuda social.

Empresario y político, Javier Usabiaga es dueño de la hacienda Aguilares, adquirida en 1932 por su papá, Ángel Usabiaga. La propiedad está ubicada entre Salamanca y Juventino Rosas, a unos kilómetros de San José de la Montaña. Desde allí construyó su imperio comercial. Allí se encuentra la empacadora, y una residencia para pasar los fines de semana. Es propietario, además, del rancho La Mina y el Siete Hermanos.

La hacienda Aguilares nunca fue afectada por la reforma agraria. A finales de la década de los cuarenta del siglo pasado, un movimiento intentó crear ejidos en su terreno, pero la lucha no prosperó. Cuando Usabiaga fue nombrado secretario de Agricultura, insistió en desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria.

En el mundo rural de Guanajuato hay dos campos: el de unos pocos productores ricos, con tecnología, acceso al agua, crédito y recursos de primer mundo; y el de los campesinos que aún no han emigrado, con pequeñas extensiones de tierra y recursos escasos. Javier Usabiaga representa uno de esos polos: es un próspero y exitoso empresario. Los campesinos que trabajan para él perte-

necen al otro: convertidos en jornaleros en sus propias tierras, son pobres, y acaban enfermando al beber el agua de los pozos contaminados.

La periodista Daniela Pastrana describe así al *Rey del Ajo*: "Polémico, carismático, déspota, práctico, enemigo de los 'revoltosos', Usabiaga es un hombre de resultados rápidos y eficaces. No planea, actúa. No pierde el tiempo, trabaja. No acepta fallas, ni holgazanerías, aunque es benévolo con los créditos. No cree en la organización social, pero sí en las sociedades comerciales. Desprecia los subsidios, pero es un patrón 'compasivo'."

Su imperio se extiende sobre 10 mil hectáreas, donde laboran 5 mil personas. El *Rey del Ajo* renta ejidos completos hasta por cinco años. Convence a los ejidatarios de malbaratar su tierra con la promesa de construirles pozos de agua.

En los terrenos rentados, Usabiaga practica, a dos manos, el despojo y la agricultura intensiva. Extrae el agua cuantiosamente y recurre a los plaguicidas sin miramiento alguno. Los resultados son desastrosos: junto a las buenas cosechas y las espléndidas ganancias queda un saldo de tierras erosionadas y sulfatadas y mantos freáticos abatidos y contaminados. Al término del contrato los ejidatarios se encuentran con que sus tierras están agotadas, y los pozos de obsequio no tienen agua.

El investigador Jesús Bacca narró al periodista Alberto Najar esta realidad. "Sacan el agua —dijo— y nunca generan las fuentes de reabastecimiento. Cuando era niño se podía encontrar agua a los tres metros de pro-

fundidad, ahora tienen que excavar hasta 360 metros. Los mantos freáticos están agotados."

El *Rey del Ajo* no tiene una buena opinión de los campesinos. Según cuenta Daniela Pastrana, en una reunión del programa de reforestación, a finales de 1996, el alcalde de Huanímaro, Everardo Vargas, confió su preocupación a Usabiaga:

—La gente tiene hambre, don Javier, ¿qué vamos a hacer si aquí se levantan los campesinos?

—¡Qué se van a levantar —respondió el entonces secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural del gobierno de Guanajuato—, si no se levantan ni para trabajar, son unos haraganes!

El caso de Usabiaga no es único de la región. En los setenta se instalaron empresas como Del Monte, Gigante Verde, Bird's Eye o Campbells, que propiciaron la sustitución de los cultivos tradicionales de granos por los de hortalizas. Ellas controlan su producción en el Bajío con prácticas similares a las del hoy ex secretario de Agricultura. La horticultura se convirtió en una maquila de grandes empresas trasnacionales que tienen sus propios canales de comercialización.

El Rey del Ajo sostiene que la propiedad social de la tierra es un obstáculo para el desarrollo y la consolidación de proyectos productivos. Apoya el uso de semillas transgénicas, a las que considera una fuente de riqueza importante, y es un ferviente partidario del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), del que él se ha beneficiado.

Siendo secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, defendió el TLCAN diciendo que a él le gustaba comer un poco de chicharrón todos los días y que, como en Estados Unidos las pieles de puerco no son muy preciadas como snack, nos las mandan a precio de regalo, al igual que hacen con muchas otras partes del animal. Hacen, con el país, negocios muy marranos.

En resumen, en México un funcionario público es alguien que prosigue en lo público los negocios que inició en lo privado.

## Paradojas de la devastación rural

Curiosa ironía. La principal mercancía de exportación rural, la más rentable, la que más divisas trae al país, es la única que no fue negociada en el Tratado de Libre Comercio.

La fuerza de trabajo migrante quedó fuera del acuerdo comercial. Creció enormemente a raíz de su firma. No cuenta con protección alguna. Labora en condiciones terriblemente desventajosas en relación con los trabajadores formales. Sin embargo, envía de Estados Unidos regularmente más de 21 mil millones de dólares al año.

La acción combinada de apertura de fronteras a la importación de alimentos, privatización y desregulación, ha despoblado el agro. Según un informe del Banco Mundial, desde que México forma parte del TLCAN, el campo ha perdido la cuarta parte de su población. Los jóvenes campesinos han tenido que dejar sus pueblos y sus tie-

rras para buscar empleo en los centros urbanos o en el otro lado de la frontera. El país se ha convertido en el principal expulsor de mano de obra del mundo. La patria de los *yanquis* es su principal destino.

Quienes negociaron el tratado por la parte mexicana sabían que esto iba a suceder. Según ellos, era un paso necesario para "la modernización", pues una nación como la nuestra no podía tener 30 por ciento de su población en el medio rural. Había, pues, que drenarla: mandarla a las ciudades.

Los tecnoburócratas aseguraron que el acuerdo comercial estimularía el crecimiento de la economía y crearía empleos suficientes para los desterrados. Afirmaron que era más eficaz asistir a los campesinos como pobres en las grandes ciudades que hacerlo en las comunidades rurales. Dijeron que importar granos básicos y oleaginosas de Estados Unidos era bueno para México y para sus sectores más desfavorecidos, porque era más barato que producirlos aquí. Prometieron que nuestra ventaja comparativa en la agricultura semitropical —la producción en la que somos más rentables— crearía riqueza en el campo y compensaría las compras de alimentos al exterior.

Nada de eso sucedió. La apertura comercial puso a competir a desiguales en condiciones de igualdad y arrasó con los agricultores nacionales. La producción rural se modernizó muy marginalmente. La economía no creció significativamente y no se crearon los empleos suficientes. Los programas de combate a la pobreza en las ciudades y la dotación de servicios en las colonias pobres

de las grandes urbes decayeron. El precio de los granos básicos en el mercado mundial se elevó y se tuvieron que importar caros, pudiendo sembrarlos. La cosecha de productos tropicales como el café o el cacao se estancó. El país se quedó sin autosuficiencia alimentaria y sin ventajas comparativas.

El campo se convirtió en una inmensa fábrica de pobreza que expulsa a la población más joven, escolarizada y emprendedora. Los ejidos y rancherías son estacionamientos de seres humanos en los que viven ancianos, mujeres y niños, en parte gracias a los dólares que sus familiares les mandan del otro lado.

Por supuesto, quienes negociaron o inspiraron tan desastroso acuerdo comercial para el campo mexicano están muy lejos de haber rendido cuentas de su desaguisado. Por el contrario, fueron premiados: Luis Téllez con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes primero, y la Bolsa Mexicana de valores después, durante el sexenio de Felipe Calderón; y Santiago Levy fue nombrado director del Instituto Mexicano del Seguro Social durante la administración de Vicente Fox.

Según información del Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por sus siglas en inglés), la balanza comercial agroalimentaria entre México y Estados Unidos ha sido sistemáticamente deficitaria para nuestro país. Las compras nacionales de productos agroalimentarios a nuestro vecino son cada vez mayores.

Granos, oleaginosas, carnes y productos derivados concentran las tres cuartas partes de las importaciones agroalimentarias mexicanas de Estados Unidos. Aunque

se asegura que muchas de estas compras buscan cubrir un déficit de los agricultores mexicanos, millones de toneladas de maíz, soya, sorgo, arroz y trigo, generosamente subvencionadas por Washington, han llegado a los mercados mexicanos con precios por debajo de sus costos reales de producción, dañando gravemente la planta productiva nacional. El impacto entre campesinos y agricultores ha sido devastador.

El TLCAN ha impulsado la inversión extranjera directa en las cadenas agroalimentarias mexicanas. La mitad de las inversiones en el sector proviene del vecino del norte. Estas inversiones son importantes en las empresas que comercializan granos, elaboran harinas y tortillas, así como en el procesamiento de carne. Por ejemplo, de las tres compañías que controlan casi 50 por ciento del mercado avícola en México, dos son grandes consorcios estadounidenses.

Las compañías multinacionales de base estadounidense establecidas en México tienen aquí ventas de casi el doble del valor de las exportaciones de alimentos procesados provenientes del país de las barras y las estrellas. La mayoría de las marcas más conocidas en el otro lado se comercializan dentro de nuestro territorio.

La dieta de los mexicanos se ha transformado aceleradamente a raíz del TLCAN y de la enorme presencia de gigantes corporativos como Wal-Mart, Cotsco y Sam's Club en las cadenas minoristas. Ningún médico se atrevería a decir que este cambio en el patrón de consumo ha sido para bien de la población.

Paradojas de la nueva colonización: la conquista de los mercados agrícolas mexicanos por las grandes compañías agroalimentarias estadounidenses ha rebotado dentro de su territorio haciendo aún más temible el auge de la inmigración indocumentada. La destrucción de la base productiva rural mexicana ha precipitado un éxodo masivo hacia Estados Unidos. Ni modo, nadie sabe para quién trabaja.

## El clembuterol y los futbolistas

Negocios muy marranos son, también, los que se hacen al engordar ganado. México padece un grave problema de salud pública por culpa del uso masivo de esta actividad.

El 17 de octubre de 2011, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) señaló que durante el Mundial de Fútbol Sub 17, celebrado en México entre junio y julio, 109 de 208 jugadores examinados presentaron concentraciones del anabólico. Según el jefe médico de la FIFA, Jiri Dvorak, sólo cinco equipos participantes no tuvieron integrantes que dieran positivo en las pruebas.

Apenas unos días antes, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había perdonado a cinco futbolistas mexicanos que dieron positivo por clembuterol en exámenes previos al inicio de la Copa Oro 2011 de la Concacaf en Estados Unidos, al entender que fueron víctimas de un problema sanitario que afecta a México.

En lugar de reconocer la realidad, las autoridades mexicanas pusieron el grito en el cielo. Desgarrándose las vestiduras, Rocío Alatorre, comisionada de Evidencia y

Manejo de Riesgos de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios, rechazó los señalamientos de la FIFA y dijo que "no les preocupan los informes de la FIFA", porque no los conocen y no pueden comprobar su veracidad.

Lo mismo hicieron los engordadores de ganado. Álvaro Ley, presidente de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado, garantizó que el 97 por ciento de la carne que se consume en el país proviene del sacrificio en rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y municipales, que cuentan con estrictos controles de seguridad por parte de Senasica y la Cofepris.

Pero el problema existe y es grave. Tan es así que el secretario de Salud (Ssa), Salomón Chertorivski, reconoció que, a raíz de la revisión practicada a 50 rastros después de la denuncia de la FIFA, fueron clausurados nueve por haberse comprobado que operaban de manera irregular, usaban clembuterol y mantenían situaciones insalubres. ¡Casi el 20 por ciento!

A pesar de las declaraciones oficiales, los testimonios sobre el uso del fármaco en el territorio nacional son abrumadores. Apenas en junio pasado, el presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Veracruz (Agave), Octavio Nájera García, afirmó: "Yo calculo que arriba de un 50 por ciento de la carne que se consume en Veracruz tiene clembuterol".

El esteroide está prohibido en la industria cárnica en México por sus efectos negativos en la salud humana. Sin embargo, se utiliza masivamente porque los engordadores de ganado tienen muchos alicientes para usarlo y el costo de hacerlo es muy bajo. No les importa violar

las normas sanitarias porque las ganancias que obtienen son altas y el riesgo limitado.

El clembuterol es un engordador artificial de ganado. Se usa para mejorar la conversión alimenticia de reses, puercos y aves, ya que aumenta la masa muscular y disminuye el tejido graso de los animales que lo consumen, al tiempo que aminora la ingesta oral. Es decir, con menor volumen de alimento los engordadores obtienen más kilos de peso corporal. La mezcla de 4.8 gramos de fármaco en una tonelada de alimento para ganado puede elevar el peso de cada res en 1.7 kilogramos diariamente.

Una res, manejada correctamente y alimentada con piensos de calidad, tarda cinco meses en obtener el rendimiento óptimo. En cambio, si consume el anabolizante alcanza ese nivel en tres meses. Además, cuesta una décima parte de lo que valen otros productos químicos para engordar animales.

Muchos vendedores y distribuidores de productos cárnicos en México piden que la carne provenga de reses alimentadas con el químico o de lo contrario no la compran. Entre los consumidores se ha impuesto la moda de adquirir carne sin grasa, de cortes americanos tipo *Ryb Eye, New York, T Bone.* Para atender la demanda del mercado, los productores recurren, con frecuencia, al uso del esteroide.

En los hechos, la Sagarpa no puede controlar a los engordadores porque no tiene la capacidad institucional para hacerlo, ni el personal suficiente. En los rastros municipales, equipados con una infraestructura muy pobre, priva la ausencia de normas. Cuando de vez en cuando

se apresa a un ganadero que usa clembuterol, se le ponen multas ridículas, mucho menores que sus ganancias, y queda libre con rapidez. Además, el fármaco es vendido en el mercado negro a diestra y siniestra, por kilos o por costales.

Desde hace veinte años, pero aún más a raíz de la entrada en vigor del TLCAN, la cadena de producción de la agricultura industrial en México ha estimulado el uso de clembuterol. A pesar de que nuestro país tiene grandes extensiones de territorio aptas para impulsar el pastoreo extensivo, se ha optado por desarrollar un modelo de ganadería intensiva en establos basada en la engorda con granos, antibióticos y hormonas para estimular el crecimiento.

Según José Manuel González Mota, presidente de la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso de Aguascalientes, los ganaderos que no utilizan el químico para engordar sus reses "simple y sencillamente están fuera del mercado, porque si no lo hacen no logran vender su producto, y la prueba es que esa sustancia tiene unos 20 años de utilizarse en el estado".

En julio de 2011, la justicia china condenó a muerte y a severas penas de cárcel —que van desde la cadena perpetua a nueve años de prisión— a cinco hombres culpables de producir y vender carne de puercos engordados con clembuterol. Fueron acusados de poner en peligro la salud pública. Aunque en México el uso del esteroide está tipificado como delito, quienes se lo dan al ganado gozan de casi absoluta impunidad. Pequeña diferencia.

## El sustento de la vida

El vocablo maíz proviene de la lengua Taina de las Antillas. Significa "lo que sustenta la vida". Alimenta pueblos. En nuestro país se consume 23 veces más que el arroz, nueve más que el frijol y tres veces más que el trigo.

El maíz es diversidad. Hay granos blancos, amarillos, rojos, morados y pintos. La riqueza del lenguaje regional describe la multiplicidad de la cultura local. Un campesino de Tecpan usa siete nombres distintos para identificar las diferentes variedades de maíz criollo que se siembran, y que un poblador urbano difícilmente sabría distinguir.

Cada una de esas semillas se siembra en condiciones específicas, dependiendo de la humedad, el tipo de terreno o el objeto de la siembra. El maíz zapalote se usa cuando se necesita tener mazorcas rápido, al igual que el maíz conejo y el cuarenteño. El olotillo se cosecha para que su delgado olote sirva de tapón a los bules en los que se transporta el agua para beber. El grano del maíz grande es especial para hacer tostadas.

Los campesinos sólo pueden estar seguros de la inseguridad. La lluvia, el mal tiempo, las plagas, los mercados, son todos inciertos. La uniformidad productiva, la desaparición de las semillas criollas, el olvido de lo propio, limitan el abanico de opciones con las que cuentan para hacer frente a la incertidumbre que rodea su producción.

Los rituales para preparar la siembra y la cosecha resumen sabidurías ancestrales. Detrás de la devoción se agrupa la comunidad para enfrentar la inseguridad y la adversidad. Con los ritos se refuerza la identidad colectiva. Esos ceremoniales acompañan actividades básicas como el rastrojeo y el chaponeo. Los labriegos, recuerda Salomón García, rastrojean la tierra cuando amontonan y queman la basura de un predio, que previamente han recogido con unas horquetas de madera. Chaponean, es decir cortan hierbas y matorrales, para preparar la siembra, utilizando un chapón, esto es, un machete suriano de doble filo.

La resistencia rural existe y persiste. Y si el maíz es la columna vertebral de la producción campesina, la pervivencia de su siembra y de sus usos culinarios, dan cuenta de que la defensa de la identidad campesina es también el resguardo del sustento de la vida.

Para los pueblos nahuas, el origen del maíz está en el cuerpo de un dios: Cintéotl (el dios de la mazorca), hijo de Piltzintecuhtli y de Xochipilli. El grano, su más importante creación, nació de sus uñas. La cosmovisión indígena sostiene que somos hombres de maíz, pueblos nacidos de la mazorca. En el germinar del grano, en el brote de la nueva milpa, en la aventura del sacrificio y la resurrección de Cintéotl, que moría para convertirse en alimento, que se sacrificaba para sostener a la humanidad, está una de las claves más valiosas de nuestra identidad.

Otros pueblos tienen otros mitos. En todos, sin embargo, es común encontrar que el maíz no es sólo sus-

tento de las personas, sino que fue quien creó a los seres humanos. En él está la clave de nuestra paternidad. Es nuestra sangre y nuestra carne. De muchas maneras estas creencias han sobrevivido al paso del tiempo o se han reinventado.

Ignazio Bautira, poeta siciliano, decía que "un pueblo es empobrecido y esclavizado cuando le han robado la lengua que sus ancestros le dejaron, entonces, está perdido para siempre". Lo mismo puede decirse de su comida, sus semillas, sus raíces rurales. Para evitarlo se libra en nuestro país una intensa lucha.

## Maíz Frankenstein

En 1998 Sanidad Vegetal acordó suspender la experimentación con cultivos de maíz transgénico en el campo mexicano. La medida no fue del agrado de las grandes empresas productoras de semillas. Desde entonces han querido echarla para atrás, y rápido.

En el marco del primer Foro Trinacional sobre Biotecnología en la Agricultura, realizado en Guadalajara en 2001, José Luis Solleiro, director de AgroBio México, señaló que abriga "la esperanza de que en un par de años estemos en condiciones de hacer por lo menos siembras experimentales de maíz modificado genéticamente", y en tres más, tener extensiones comerciales en el país.

Su opinión distaba de ser desinteresada. No buscaba preparar la agricultura de nuestro país para enfrentar retos como la desertificación, sino abrir un mercado,

hasta ahora cerrado, sin importar costos ambientales y sanitarios que se deba pagar por ello.

AgroBio México es una asociación civil de las grandes empresas que controlan la producción mundial de semillas transgénicas: Monsanto, Dupont, Bayer, Syngenta y Dow Agroscience. Funciona como un grupo de cabildeo a favor de la agricultura genéticamente modificada. Estas compañías controlan 75 por ciento de las patentes del sector.

De paso, se trataba de resolverle un grave problema a Estados Unidos, donde los cultivos genéticamente modificados se han desarrollado aceleradamente y sin las regulaciones adecuadas. Pero se ha topado con un obstáculo: no puede colocar su producción excedente. Sus principales socios comerciales, Europa y Japón, cerraron sus mercados o han puesto condiciones muy difíciles de cumplir.

La Unión Europea prohibió las importaciones de transgénicos hasta que se legisle sobre el tema. Se trataba de una moratoria *de facto.* Japón exige que se etiquete y especifique la naturaleza del producto. En las condiciones actuales de la producción estadounidense esto implica comenzar de nuevo. Hacerlo es complicado y costoso.

En ambas partes del mundo existen fuertes movimientos rurales y de consumidores en contra del uso y consumo de semillas genéticamente modificadas. En Europa, la crisis de las *vacas locas* ha sensibilizado a la población sobre los riesgos para la salud humana de transgredir las reglas de la naturaleza sin más fin que obtener ganancias privadas.

México y América Latina son los nuevos mercados donde Estados Unidos puede colocar su producción excedente. En las más de 7 millones de toneladas de maíz que nuestro país importa cada año de su vecino entra regularmente grano genéticamente modificado para consumo, aunque no para utilizarse como semillas. El Imperio no quiere toparse con sorpresas desagradables.

Entre 1995 y 1998 se permitieron cultivos experimentales con maíz transgénico en el campo mexicano. Se trataba de ensayos cautelosos en la medida en que se realizaban en superficies de 50 metros cuadrados y sólo se permitía crecer a las plantas hasta las seis hojas, es decir, se impedía su maduración. Su objetivo era evaluar la resistencia de la gramínea a los insectos, y realizar polinizaciones experimentales entre maíz transgénico y convencional.

A fines de 1998 y 1999 Sanidad Vegetal decidió, en parte por las opiniones de expertos de centros de investigación pública, participando en el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, que las siembras de maíz transgénico tenían riesgos y que era necesario esperar para decidir sobre su futuro. Durante 1999 no aceptó solicitudes de experimentación en campo. Se estableció así una moratoria *de facto*. Desde entonces, el único cultivo de maíz genéticamente modificado que se permitía era el destinado a la investigación en ciencia básica realizado en laboratorio y en invernadero biocontenido (con grandes medidas de seguridad).

Casi diez años después, el 9 de marzo del 2009, Felipe Calderón, después de una reunión con el presi-

dente de Monsanto, en Davos, Suiza, decretó el fin de la moratoria *de facto* y dio luz verde a las empresas para solicitar permisos de siembra de maíz transgénico. Poco antes, en 2007, el gobierno de México reformó la Ley de Semillas, que fomenta el uso de semillas híbridas comerciales, controladas por muy pocas empresas trasnacionales y busca convertir en ilegales las semillas campesinas.

Las grandes empresas agroalimentarias justifican el uso de transgénicos bajo la bandera de la lucha contra el hambre y la producción de alimentos. En los hechos, lo que quieren es legitimar el avance de los intereses privados sobre los públicos. Las bondades que pregonan son inexistentes. Su verdadera intención es producir variedades comerciales más resistentes a herbicidas, insectos y virus, no producir más o mejores alimentos o hacerlo con menos dependencia.

México es cuna del maíz. Existen aquí 59 razas y cientos de variedades. Autorizar la producción de maíz transgénico, como quieren los grandes monopolios, sería muy grave. Su cultivo a cielo abierto (así sea experimentalmente) contaminaría sin remedio —por vía de la polinización— esa riqueza, generando efectos imprevistos y no controlados, y un irremediable daño ecológico. Además, la toxina Bt de algunas de estas plantas permanece en ciertos suelos periodos prolongados, manteniendo su toxicidad. El uso de herbicidas como el glifosato, ha demostrado provocar malformaciones en embriones y daño en órganos como hígado y páncreas, en experimentos con ratas y anfibios.

Aunque aún se requiere de mucha investigación científica, hay evidencias serias de que el consumo de la "comida Frankenstein" puede provocar alergias. Quienes objetan su utilización argumentan sensatamente que la manipulación genética puede alterar de forma imprevisible los procesos metabólicos de la planta y de la composición de los alimentos, provocando trastornos en el ser humano.

Desde ese entonces se ha desarrollado una intensa lucha por definir el futuro de los transgénicos en México. De un lado se encuentra la salud, la defensa del medio ambiente y la no dependencia alimentaria del país; del otro, los negocios de cinco compañías disfrazados de modernidad y "ciencia". Como acostumbran decir los tzeltales: "es en la semilla donde todo comienza y termina; es el principio y el fin". En la disputa por las semillas hay mucho dinero en juego. Así se ha hecho sonar.

## En defensa del maíz

Aunque existen grandes diferencias entre los tipos de productores que se dedican a su siembra, de los más de 4 millones de productores agrícolas que existen en el país, alrededor de 2.8 millones de agricultores —en su mayoría ejidales— lo cultivan. 22 % de la producción se destina al autoconsumo.

A pesar de que en México no está permitida la siembra comercial de maíz transgénico, y que a partir de 2009 se reiniciaron los permisos para experimentación en campo, la importación de Estados Unidos, que con-

tiene mezclado el transgénico, ha alcanzado volúmenes récord desde la puesta en marcha del TLCAN.

En noviembre de 2001 se comprobó la contaminación de maíz tradicional con transgénico en comunidades de Oaxaca y Puebla. Los científicos de la Universidad de Berkeley Ignacio Chapela y David Quist encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca. A pesar de la campaña de descrédito montada por las empresas que fabrican semillas, que logró que la revista *Nature* se retractara de la publicación del artículo de Chapela y Quist, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio) confirmaron la contaminación. El informe documentó que en el almacén Diconsa, de Ixtlán, Oaxaca, se había encontrado contaminación transgénica del maíz destinado a la venta para consumo humano.

Las empresas y algunas autoridades mexicanas pretendieron ignorar el hecho, y aseguraron que no hay suficientes pruebas de la contaminación, pasando por alto los trabajos científicos. Con el mayor cinismo afirman que el maíz transgénico "sería benéfico" para el campo mexicano y que representa ventajas que deberían llegar a millones de campesinos, porque "reduce costos de producción y puede ser incorporado fácilmente en maíces criollos".

Este hecho provocó airadas reacciones de varias organizaciones indígenas, campesinas, ambientales y civiles, así como de los funcionarios responsables de las políticas agrícolas, ambientales y comerciales, legisladores, científicos vinculados a los cultivos biotecnológicos y

las empresas productoras de semillas y comercializadoras de productos transgénicos.

En contra de la opinión de las organizaciones de productores, el maíz fue incluido en las negociaciones del TLCAN, bajo el supuesto de que la apertura comercial forzaría la reconversión de cultivos hacia productos con mayor competitividad en el mercado internacional. Esta decisión implicaba que la actividad de alrededor de 2.3 millones de productores con predios de menos de cinco hectáreas no sería competitiva; 4.7 millones de hectáreas deberían ser reconvertidas a otro cultivo y se dejarían de producir 7.1 millones de toneladas de maíz en esa superficie. Sin embargo, lo que sucedió fue distinto.

Desplazados de otros cultivos por la inclemente competencia económica, los productores se refugiaron en el maíz. Durante la etapa de tránsito hasta la apertura total del TLCAN-1994-2008- la producción del cereal se ha mantenido en ascenso. Los primeros años, en alrededor de 18 millones de toneladas y, a partir de 2000, unas 20 millones de toneladas en promedio, alcanzando cifras récord en 2008, con 24.4 millones de toneladas. Entre 1994 y 2008 la superficie sembrada se mantuvo por arriba de los 8 millones de hectáreas, superior a los 7.6 millones de hectáreas sembradas de 1989.

Ello, a pesar de que durante el periodo de tránsito del TLCAN, el precio a los productores se redujo en 53 por ciento, entre 1993 y 2005, y únicamente mostró una ligera recuperación a partir de la crisis internacional de los precios y de la crisis de la tortilla en México, para situarse en 2008, 26 por ciento por abajo del precio de

1993. Por si fuera poco, a pesar del compromiso gubernamental de mantenerlos constantes durante 15 años, los subsidios de Procampo se han reducido en el periodo de tránsito del TLCAN (1994-2008) en 34 por ciento. En 2010 la producción llegó a 23.3 millones de toneladas, y las importaciones a 7.8 millones de toneladas.

Para enfrentar los retos de la ofensiva contra el maíz y los pequeños productores que lo cultivan, diversas organizaciones realizaron en enero de 2002 el seminario *En defensa del maíz,* del que surgió la red bautizada con el mismo nombre del evento. Sus integrantes declararon que "el maíz es patrimonio de la humanidad, resultado del trabajo de domesticación de los pueblos indios mesoamericanos por más de 10 mil años, y no de las corporaciones trasnacionales; la contaminación transgénica de las variedades nativas de maíz representa un daño a la memoria genética de la agricultura tradicional mexicana, que puede ser irreparable, las políticas agrícolas y comerciales en curso atentan contra la producción nacional de maíz, núcleo de la economía y organización campesina, y contra la soberanía alimentaria. Concluyeron señalando que el maíz es la herencia de los pueblos indios de México. El cultivo de maíz es el corazón de la resistencia comunitaria".

Las 350 organizaciones y comunidades que integran la Red en Defensa del Maíz decidieron desde hace muchos años defender sus territorios de la entrada de los transgénicos. A partir de un trabajo de información y educación comunitaria, y aprovechando la ventaja que les da el ejido y la comunidad agraria, han decidido declarar-

se, por acuerdo de asamblea, como ejidos y comunidades sin transgénicos —en algunos casos incluyendo esta decisión en sus estatutos. Además —como señala Ana de Ita— han perfeccionado la observación de sus cultivos, promueven la revaloración de las variedades nativas, las siembran, las comen, las festejan y así las protegen y se protegen como pueblos del maíz.

Con el tiempo, la lucha en defensa del maíz se ha extendido por todo el país. Importantes colectivos como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Campaña "Sin maíz no hay país", se han movilizado en contra de las siembras transgénicas del grano.

## Transgénicos e ignorancia

Ignorantes, llamó el empresario agrícola y secretario de Agricultura, de 2000 a 2005, Javier Usabiaga, a quienes se oponen al cultivo y la comercialización de los alimentos transgénicos. De acuerdo con el agricultor y funcionario, el rechazo es provocado por el "desconcierto" ante los nuevos conocimientos de la biotecnología.

Los hechos son, sin embargo, diferentes a como el antiguo encargado del despacho presidencial los quiere ver. Los cultivos transgénicos no han producido los beneficios prometidos y existen serias evidencias de que no son seguros más allá de toda duda razonable. Por el contrario, hay certeza de que su uso favorece solamente a unas cuantas compañías como Monsanto.

Se dice, incorrectamente, que los alimentos transgénicos se cosechan sin el uso de herbicidas y plaguici-

das. No es así. Es común que los cultivos transgénicos usen herbicidas de amplio espectro, muy tóxico, para seres humanos y otras especies. De hecho, las semillas son fabricadas específicamente para que usen glufosinato de amonio y glifosato.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la producción promedio de maíz Round Ready requirió un 30 por ciento más de herbicida que el maíz no transgénico. A su vez, la siembra del maíz Bt necesita de la misma cantidad de plaguicidas que otras variedades. Por su parte, la soya RR necesitó de dos a cinco veces más herbicidas que otros sistemas de manejo de malezas.

Se afirma que las siembras genéticamente modificadas permitirán disminuir el hambre en el mundo. Eso es falso. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo hay una producción de comida suficiente para alimentar a la población del planeta usando semillas convencionales. Esta situación no se modificará durante los próximos 25 años.

El problema del hambre en el mundo tiene que ver con la desigualdad, la pobreza y la marginación, no con la ausencia de productividad. En India 200 millones de personas sufren hambre crónica mientras las bodegas almacenan 60 millones de toneladas de trigo y arroz sobrantes. “Nuestros graneros están rebosantes porque la gente no tiene con qué comprarlos”, afirmó el ministro de Agricultura de ese país, Ajit Singh.

En contra de lo que sus defensores aseguran, los alimentos genéticamente modificados no son seguros. Su

marco legal se basó en criterios no precautorios que buscaban su aprobación rápida. Son muchos los científicos que afirman que la evaluación de su riesgo fue establecida sobre la base del principio de "equivalencia sustancial", intencionalmente vago y mal definido.

Asociar transgénicos con desarrollo, modernidad y bienestar, es una grave equivocación. No es la primera vez que sucede algo así. Lo nuevo no es necesariamente bueno. Con frecuencia lo que las grandes empresas agroalimentarias lanzan al mercado como grandes descubrimientos para hacer avanzar la humanidad no son tales, sino negocios que las favorecen.

La promoción del uso de la leche en polvo que hizo Nestlé y la disminución de la lactancia materna se presentaron originalmente como un gran avance de la ciencia y la tecnología. La consecuencia inmediata fue un incremento acelerado de la mortalidad infantil en los países pobres, tanto porque los bebés que dejan de consumir leche materna no adquieren la gran cantidad de anticuerpos que se transmiten a través de ella, como por el uso inadecuado del biberón. En este caso, el aparente "avance tecnológico" tuvo resultados desastrosos para la salud.

Lo mismo sucedió con el uso del DDT. Durante tres décadas el químico fue extensamente utilizado para combatir insectos en casas y cultivos. En 1972 fue prohibido su uso doméstico en Estados Unidos, cuando, después de una investigación de tres años, se encontró que provocaba graves daños a la salud humana y al medio ambiente. Hoy sabemos que lo que se conocía como el

"plaguicida milagroso", el gran instrumento de desarrollo, es en realidad un peligroso veneno.

Durante años el modelo de comida rápida consumida en Estados Unidos y "exportada" por conducto de sus franquicias fue un ejemplo de modernidad. Hamburguesas, pollo frito, malteadas, queso industrial y gaseosas, fueron sinónimos de primer mundo y "juventud". Hoy está claro que esa alimentación provoca padecimientos —entre otros obesidad— y altos índices de colesterol.

La oposición a los alimentos transgénicos no proviene de la ignorancia, sino de la opinión informada, el análisis científico y el sentido común. Quien gana con su cultivo no es la humanidad, sino unas cuantas empresas que producen sus semillas. Quien progresa con su siembra no son las naciones, sino los funcionarios que ponen el gobierno al servicio de las grandes firmas, dueñas de sus patentes.

Por ello, a pesar de estar amenazada por una hambruna en 2002, Zambia rechazó un cargamento de maíz transgénico enviado como ayuda alimenticia. Por ello, más y más agricultores en el mundo rechazan su uso y más y más consumidores objetan su comercialización. Por ello, los campesinos mexicanos se oponen a ella. Simple y sencillamente, la comida genéticamente modificada no es segura.

## La ley Monsanto

El 14 de diciembre de 2004 la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genética-

mente Modificados (LBOGM), mejor conocida como ley Monsanto. Dos meses después, el 15 de febrero de este año, la Cámara de Senadores ratificó el proyecto. Priístas, panistas y muchos legisladores del PRD votaron a favor de la nueva legislación.

La ley expresa, prácticamente sin mediaciones, los intereses de los monopolios de la industria biotecnológica de la que Monsanto es líder. En lugar de cuidar los intereses de los campesinos, de proteger el medio ambiente y de ver por la salud de los mexicanos, la nueva norma permite la distribución y liberación al ambiente de organismos transgénicos, con probables y severos riesgos para la soberanía alimentaria, la salud humana y la biodiversidad.

Como señaló Silvia Ribeiro, "entre muchas otras barbaridades, el dictamen de ley aprobado niega el principio de precaución, no prevé consultas públicas pero sí da espacio a que las trasnacionales apelen si no les aprueban una solicitud, afirma los derechos monopólicos de las trasnacionales por medio de sus patentes, las exime de la responsabilidad por contaminación, no considera ni siquiera avisar a quienes podrían ser contaminados y, de hecho, responsabiliza a las víctimas al dejarlas sin resguardo frente a los juicios que las empresas les puedan hacer por "uso indebido de patente".

Muchas y muy autorizadas voces se levantaron contra la nueva legislación. Investigadores, académicos, campesinos, ecologistas alertaron sobre las negativas consecuencias de la reforma. Pero a los legisladores no pareció importarles mucho las advertencias. En vez de

escuchar a la sociedad, se plegaron a los intereses de las grandes compañías. A favor de esa ley votaron 319 diputados, 105 lo hicieron en contra y 17 se abstuvieron. En el Senado 87 sufragaron a favor de la iniciativa, 16 la rechazaron y seis se abstuvieron.

En contra de lo que pudiera suponerse y de los intereses que dicen defender, 31 diputados del PRD se sumaron a la reforma legal y cuatro más se abstuvieron. Meses después, cuando el debate había subido de tono y el repudio de una parte importante de la comunidad académica a la nueva legislación era evidente, un senador del sol azteca votó a favor de la ley Monsanto, otro más se abstuvo y 12 se manifestaron en contra.

Entre los diputados perredistas que apoyaron la legislación se encuentran personalidades como Pablo Gómez y Emilio Zebadúa, así como Pascual Sigala, dirigente de la Red Mocaf (una coordinadora de productores forestales), y el líder de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Agustín Rodríguez. Dentro de esta lista están también los entonces coordinadores de las redes ciudadanas: José Agustín Ortiz Pinchetti y Socorro Díaz, así como el candidato a secretario general del partido en el Distrito Federal, Gilberto Ensástiga, y Alonso Raya, dirigente del magisterio, aliado de Elba Esther Gordillo.

En el Senado votó a favor de la iniciativa el perredista Antonio Santiesteban, y se abstuvo Demetrio Sodi, el mismo que se sumó a la reforma indígena repudiada por los indios y el Seguro Popular.

Entre los cuatro diputados del PRD que se abstuvieron estuvo Víctor Suárez, quien habló contra la ley en

diversos foros, pero que no votó contra ella. Promovió, sí, una moción suspensiva el día del debate en la Cámara, que no prosperó.

El PRI sintió que la propuesta de moción suspensiva violaba los acuerdos que había hecho en los "oscurito" con diputados perredistas, y mandó a tribuna a Julián Nazar, un personaje de la bancada lumpen del tricolor a la que se ha bautizado como el Bronx, para exigirle a Suárez que se sostuviera en los compromisos y votara a favor de la iniciativa. Fiel a su estilo golpeador, comenzó su intervención diciendo que "es lamentable ver cómo algunos se revuelcan como marranos para poder cobrar como príncipes", para luego exigir el cumplimiento de lo pactado. "Me preocupa la actitud de aquellos —afirmó— que la semana pasada me dijeron que modificáramos el 101 porque ya el 88 —que era el centro de origen de nuestras semillas—, se había corregido. Y me dijeron que yo me acordara del 10 de Mayo de sus jefecitas si no cumplían el día martes. Me reservo lo que ellos me pidieron, por respeto a sus jefecitas."

Víctor Suárez respondió preguntando por la relación entre Nazar y el grupo paramilitar de los chinchulines en Chiapas, pero no aclaró nada sobre los compromisos adquiridos con el PRI. A la hora de votar, en lugar de oponerse a la ley Monsanto, se abstuvo y, más adelante, promovió algunos cambios en lo particular, insignificantes ante la gravedad de lo aprobado.

Originalmente, la iniciativa de LBOGM fue presentada en el Senado dos años antes, por el legislador del PRD, Rodimiro Anaya, presidente en aquel entonces, de

la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado. Aunque meses después varios diputados de ese partido objetaron la propuesta, sus compañeros de Legislatura de Acción Nacional y del PRI siguieron adelante con ella.

De acuerdo con los más sensatos investigadores sobre los transgénicos, no hay en esa ley prácticamente nada recuperable. Para tratar de "mejorarla", los legisladores perredistas se enfrascaron en una negociación cupular que dio la espalda a la sociedad. El resultado fue fatal.

El Consejo Nacional del PRD había acordado oponerse a la ley Monsanto. La orientación, por lo visto, tuvo sin cuidado a una parte muy importante de los legisladores del instituto político. Curiosamente, 34 diputados del PRI —algunos de ellos líderes de centrales campesinas tradicionales— votaron en contra de la ley, a pesar de las presiones de sus dirigentes partidarios. No sucedió lo mismo en el Senado, donde unánimemente el tricolor aprobó el proyecto de ley.

## La cabeza de playa tamaulipeca

Durante los últimos años, el campo tamaulipeco ha estado asolado por la plaga del narcotráfico. Los agricultores deben pagar a los cárteles, derecho de piso para poder trabajar o tener protección. Si no lo hacen, sus ranchos son ocupados por sicarios y sus cosechas y ganado robados. Ahora, además, sufrirán la plaga del maíz transgénico.

El pasado 8 de marzo de 2011, la Sagarpa otorgó a la trasnacional Monsanto, el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo transgénico, MON 603, resistente a herbicidas, en una superficie menor a una hectárea. Se cultivará en predios de agricultores cooperantes, en los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa, en Tamaulipas, y en el predio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el municipio de Marín. La autorización es un paso previo para permitir el cultivo comercial del grano.

La autorización se dio en contra de la recomendación de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Esta institución, derivada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sugirió en 2004 que, antes de aprobar la siembra de maíz transgénico, era necesario realizar estudios sobre sus efectos en el consumo humano. México es uno de los países con más altos niveles de consumo humano de maíz. A pesar de que este estudio no ha sido hecho, la Secretaría de Salud dio su aprobación al MON 603.

Sagarpa dijo que otorgó esta solicitud para siembra piloto porque es necesario usar esta tecnología para aumentar la producción y disminuir las importaciones, en un momento de crisis de alimentos.

El aval del gobierno mexicano a los cultivos es parte de un ambicioso plan de las compañías productoras de semillas genéticamente modificadas para ocupar el territorio y el mercado mexicanos. En 2010 Monsanto y Pioneer-Dupont solicitaron 11 permisos para la siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa, Coahuila y

Durango (La Laguna), Tamaulipas y Chihuahua. La siembra piloto es el segundo paso para llegar finalmente a la siembra comercial. La siembra piloto considera mayores extensiones y relaja las medidas de seguridad.

A principios de 2011 Sagarpa rechazó tres permisos para siembras piloto de maíces transgénicos de Monsanto en Sinaloa. Argumentó que era necesario tener más información y que, según un nuevo estudio de Conabio, existían más variedades nativas en el norte del país que las reconocidas con anterioridad.

También fueron rechazadas otras solicitudes para la siembra piloto en Coahuila, Chihuahua, Durango y Sonora, además de las presentadas para los mismos municipios en Tamaulipas, para otro maíz transgénico de Monsanto, que combina el MON 89034 y el MON 88017.

El maíz MON 603 de Monsanto es un maíz resistente al herbicida glifosato, producido por la misma trasnacional. Es famoso entre quienes se oponen a los transgénicos, pues su evaluación, junto a la efectuada a los maíces MON 863 y el MON 810, sirvió de base para lograr la moratoria de siembra en Francia y Alemania en 2009.

El profesor de biología molecular Gilles Eric Seralini, experto del gobierno francés en organismos modificados genéticamente y asesor de la Unión Europea en materia de biotecnología, analizó los resultados de un estudio en ratas alimentadas con tres variedades de maíz transgénico, el MON 863, el MON 810 y el NK 603, fabricados por Monsanto. Seralini encontró que las ratas alimentadas con maíz transgénico registraron toxicidad

hepatorrenal, diferencias en el crecimiento, aumento de triglicéridos, problemas de fertilidad y tamaño de los fetos. Concluyó que el maíz transgénico no es un producto seguro para la salud.

El estudio de Seralini contradijo los resultados de una investigación previa financiada por la trasnacional, la cual afirmó que no había diferencias entre las ratas alimentadas con maíz transgénico y las alimentadas con dietas convencionales. Monsanto, a través de otros científicos, organizó una campaña en su contra. Seralini los demandó legalmente por difamación y ganó el juicio.

Entre 2009 y 2011, Monsanto, Dow AgroScience, Pioneer Hi Breed y Syngenta, solicitaron 110 permisos para la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León e incluso Jalisco. De éstas ya fueron aprobadas 67 solicitudes en casi 70 hectáreas. Las restantes están en proceso de estudio.

La plaga del maíz transgénico llegó al campo tamaulipeco. Con ello se estableció una cabeza de playa para su expansión por todo el país.

## Leyes de Troya

A comienzos de 2011 se anunció, con bombo y platillo, la aprobación de una norma en el estado de Tlaxcala, que prohíbe el cultivo del maíz transgénico en el estado y lo declara libre de transgénicos. Fue bautizada como Ley de protección al maíz de Tlaxcala.

En un primer momento, la noticia generó grandes expectativas entre las organizaciones y los ciudadanos que se oponen a los organismos genéticamente modificados. Sin embargo, muy pronto las esperanzas se convirtieron en desilusión. Organizaciones campesinas como Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC), con una larga tradición de lucha independiente, se han movilizado para abrogarla. La Ley no sólo no sirve para lo que sus promotores dicen que sirve, sino que, además, es un claro retroceso en la lucha contra los transgénicos.

La Ley de maíz de Tlaxcala nunca habla de impedir el sembrar, plantar o cultivar maíz transgénico, sino únicamente de autorizar su almacenamiento, comercialización y distribución. No podría hacerlo ya que la decisión sobre dónde se siembran es una atribución federal, regulada por la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados.

La inmensa mayoría de los artículos de la Ley declaran proteger el maíz, pero no lo hacen realmente. Dice que busca que Tlaxcala sea declarado zona libre de OGM de maíz (artículo 22). Si embargo, tal y como lo señala Ana de Ita, lo único que puede hacer es integrar los expedientes y conseguir la opinión favorable de los gobiernos municipales y estatales.

Lamentablemente, además de no evitar la siembra de transgénicos, limita el margen de acción de comunidades y campesinos para hacerlo, favorece los intereses de corporaciones semilleras y da mayores atribuciones a la Secretaría de Agricultura estatal sobre el manejo de las semillas. Así las cosas, los fondos de semillas de maíz

criollo, ejidales o municipales, ahora deben ser autorizados por la Sefoa (especie de secretaría de agricultura estatal) y supervisados por el Consejo Estatal de Maíz, que podrá intervenirlos en caso de contradicción con esta Ley.

La Ley incluye denominaciones de origen, patentes y derechos de protección de variedades vegetales, instrumentos que sirven para favorecer los intereses de las corporaciones y son contrarios a los derechos colectivos y bienes comunes.

Como explica Ana de Ita, en Europa, las leyes de semillas han convertido en ilegales las semillas campesinas. Está prohibido comercializar, intercambiar o distribuir semillas que no estén en un catálogo de variedades registradas. Las semillas campesinas no cumplen estos requisitos y, por tanto, ahora son ilegales. La lucha de los europeos ha sido rechazar el catálogo. La ley de semillas mexicana (2007) sigue esta misma tendencia, al convertir en ilegal la distribución y comercialización de semillas no registradas, es decir, semillas campesinas.

Aún más, en Europa las empresas pretenden que los agricultores les paguen regalías por sembrar semillas de su propia cosecha, argumentando que en el pasado pudieron haber utilizado semillas patentadas cuyos caracteres y mejoras aún persisten en las cosechas actuales. El directorio de productores —similar al que la Ley de Tlaxcala quiere implementar— permitió a las compañías fiscalizar a los productores e intimidarlos para que paguen las compensaciones.

Uno de los estados en donde la resistencia a estas legislaciones de Troya es mayor, es Oaxaca. Desde hace

diez años, las comunidades indígenas del estado han luchado contra los cultivos transgénicos. Ahora, 35 organizaciones de la entidad se han pronunciado contra dos propuestas de ley que supuestamente pretenden proteger el maíz nativo, pero no prohíben la siembra o el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas y, en cambio, instrumentan y legalizan su entrada al campo oaxaqueño.

Aunque produce sólo poco menos de 4 % del maíz que se cosecha en el país, Oaxaca es uno de los siete estados con el mayor número de parcelas cultivadas con el cereal. Se siembra en 567 de los 570 municipios de la entidad. La mayor parte de quienes lo cultivan pertenece a alguno de los 15 pueblos indígenas que viven en la entidad. El grano es el centro de su alimentación y está estrechamente ligado a su cultura. Sus productores pertenecen a los estratos más pobres de la población y lo siembran, generalmente, en superficies menores a cinco hectáreas, en tierras de mala calidad y condiciones fisiográficas desfavorables.

Las propuestas de ley fueron presentadas al Congreso del estado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). La priísta fue elaborada por la diputada Carolina Aparicio Sánchez y fue bautizada como Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca. La panista, llamada Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca, fue presentada por la legisladora Marlene Aldeco Reyes Retana (PAN), a pro-

puesta de Maricela Silva, de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue.

Las comunidades indígenas consideran que las dos iniciativas de ley agreden la inteligencia de la población oaxaqueña. Sostienen que vulneran de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria.

La iniciativa del PAN es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán, muy criticadas a escala nacional e internacional. La propuesta del PRI desconoce la realidad en el campo. Ambas otorgan certeza jurídica sólo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo. Están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas al uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento.

Según las organizaciones, las propuestas prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tienen relación con el maíz y establecen que será el enlace único entre el estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas. Fomentan también la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos.

Asimismo, obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a empresas e instituciones.

Así, advierten las comunidades, se permitirá el acceso de sus semillas a empresas trasnacionales.

De acuerdo con los oaxaqueños en resistencia a los transgénicos, las iniciativas de ley fomentan el conflicto entre las cabeceras municipales y sus agencias, al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones. Se ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales.

Como acontece con otras legislaciones que dicen defender los maíces autóctonos, las propuestas de ley oaxaqueñas simulan ayudar a la conservación del cereal, pero en los hechos abren la puerta a que los pequeños productores pierdan el control sobre sus semillas, dan a los gobiernos licencia para expropiar los saberes tradicionales campesinos y crean las condiciones para que las empresas privadas se apropien y patenten esa simiente. No puede extrañar, entonces, que quienes por 10 años han luchado contra el maíz transgénico en el agro oaxaqueño se opongan a esas iniciativas.

Como señala Silvia Ribeiro, proteger el maíz nativo implica necesariamente reconocer y respetar, en sus propios términos, los derechos integrales de los pueblos indígenas y campesinos, que tienen 10 mil años de experiencia en el tema. Para evitar la contaminación transgénica, un buen comienzo sería un simple decreto que prohíba la siembra de semillas genéticamente modificadas en todo el país.

## Los Malvados Verdes

Richard John Kenner es un profesor que dirige el Centro para el Análisis de Riesgos del prestigiado Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). No sólo duda que el cambio climático exista; está convencido de que se trata de una coartada ambientalista que oculta aviesos intereses.

Además de su vocación científica, Kenner es también un agente secreto que busca hacer abortar un *complot* organizado por una organización ecoterrorista, coincidente con un congreso sobre cambio climático.

Richard John Kenner no existe en la realidad. No hay en MIT ningún Centro para el Análisis de Riesgos. La organización ecoterrorista es una quimera. El científico, su centro de investigación y el *complot* son parte de La novela t*ecnothriller* titulada *Estado de miedo*. Fue escrita en 2004 por Michael Crichton, un médico y guionista nacido en Chicago, Estados Unidos, autor de novelas como *Parque Jurásico,* y de series de televisión como *ER*.

Crichton era un combatiente en la cruzada contra la teoría del calentamiento global y el ecologismo político. Consideraba que "la gran paradoja de la era de la información es que ha concedido nueva respetabilidad a la opinión desinformada", y piensa que tanto el ambientalismo realmente existente como el efecto invernadero expresan problemas que no son reales.

Según el escritor, "la evidencia sobre el calentamiento global por el supuesto 'efecto invernadero' es, si la hay, muchísimo más débil de lo que sus proponentes están dispuestos a admitir". Para él, el Protocolo de Kyoto se basa en modelos de simulación matemáticos que elaboran predicciones incumplidas.

Crichton (muerto en 2004) sostenía que el ecologismo es una de las religiones más poderosas del mundo occidental, una creencia para ateos urbanos. Su fe es una reedición de las tradicionales convicciones judeocristianas profundamente conservadoras; un asunto de dogma. Aunque no se toma la molestia de sustentarlo, afirma que el ecologismo ha matado entre 10 y 30 millones de personas desde los años setenta.

En *Estado de miedo,* el cambio climático no es un desafío para la humanidad. El verdadero peligro, según la trama de la novela, son los científicos que lo estudian y los activistas que se movilizan para tratar de frenarlo.

*Estado de miedo* forma parte de la ofensiva que los *neoconservadores* estadounidenses, las grandes trasnacionales petroleras y de la industria del automóvil, las empresas de carbón y Australia —que es la principal exportadora de carbón— han emprendido para criminalizar el ecologismo y cuestionar el cambio climático.

Tan evidente resulta esta situación que, de acuerdo con el diario londinense *The Times:* "A George Bush le gustaría este libro". Por supuesto, el periódico tendría que haber agregado que eso sucedería en caso de que el ex mandatario estadunidense leyera. *The New York Times* afirma que la novela se lee como una respuesta "chillona"

y "absurda" de la derecha al filme *El día después de mañana*, que trata del calentamiento global. James Inhofe, senador republicano por Oklahoma, integrante del comité de Asuntos Medioambientales del Congreso, considera la novela de Crichton "materia de lectura imprescindible para este comité". El senador asegura que la tesis de que las emisiones de carbono son responsables del calentamiento terrestre es "el *bluff* más grande perpetrado nunca contra del pueblo estadounidense".

El novelista fue frecuentemente invitado a charlar sobre el calentamiento global en institutos conservadores de gran influencia, como el American Enterprise Institute, y ha participado en diversos debates sobre este asunto en canales de televisión identificados con la derecha.

La propaganda soterrada de las grandes empresas del carbón y el petróleo presenta a los científicos que alertan sobre los peligros de esta amenaza como personajes ambiciosos, deshonestos e indignos de confianza. La leyenda negra construida a su alrededor señala que distorsionan los hechos científicos para engrosar los subsidios a la investigación que realizan.

En un primer momento, los escépticos del calentamiento global aseguraban que se trataba de un mito. En la lucha de las ideas acostumbraban decir que "por ahora no existen muchas evidencias referentes al cambio climático", o que "todavía existe mucha incertidumbre sobre la teoría del cambio climático". Sin embargo, ante el alud de hechos en contra, ahora sostienen que el planeta se está calentando, pero que se debe a "causas naturales" y no a la acción humana.

Se trata de presentar un cuadro en el que los científicos no están de acuerdo con los diagnósticos de lo que sucede; que la comunidad se encuentra dividida; que existen dudas razonables.

Pero lo cierto es que los grandes consorcios a los que las regulaciones ambientales afectan, han repartido mucho dinero y construido una gran coalición de fuerzas contrarias a la teoría del cambio climático.

Esta disputa semántica tiene una larga historia tras de sí. En 1995 los servicios públicos de Minnesota descubrieron que la industria del carbón había pagado muchos millones de dólares a cuatro científicos que mostraban públicamente su disconformidad con el calentamiento global. Y Exxon Mobil ha gastado más de 10 millones de euros desde 1998 en una campaña de relaciones públicas contra la teoría del calentamiento global.

Para amplios sectores de la nueva derecha, el fantasma del ecologismo es una especie de bestia negra. El nuevo imperativo categórico formulado por Hans Jonas de "actuar de forma que los efectos de la acción sean compatibles con la pervivencia de una vida auténticamente humana en la tierra", es inadmisible para el capital, que sólo piensa en vivir al día, sea cual sea el eventual costo para la naturaleza y la humanidad.

Esta animadversión contra el lenguaje de la biosfera y a favor del lenguaje monetario del mercado, fue recientemente recordada por Vaclav Klaus. El presidente de la República Checa escribió en el *Financial Times* un artículo titulado "La libertad, y no el clima, es lo que está bajo amenaza". Allí dice: "Como alguien que ha vi-

vido bajo el comunismo la mayor parte de su vida, me siento obligado a decir que actualmente veo una mayor amenaza a la libertad, a la democracia, a la economía de mercado y a la prosperidad, procedente del ecologismo, no del comunismo. Esta ideología pretende reemplazar la libertad y la evolución natural de la humanidad por una especie de planificación global centralizada."

Los prejuicios contra la teoría del cambio climático han vuelto a resurgir con renovada fuerza a raíz del ascenso del ultraderechista Tea Party. Muchos de sus principales dirigentes niegan la existencia del fenómeno.

Sin embargo, a pesar de la cruzada antiecológica, de obras como *Estado de miedo,* de la censura de la administración Bush o del Tea Party en Estados Unidos, el cambio climático ya no es una mera hipótesis o una opinión, sino un hecho científicamente comprobado. Las evidencias son sólidas: sólo durante los últimos treinta años la temperatura promedio de la superficie terrestre aumentó 0.6 grados centígrados; se modificaron el inicio, la duración y el final de las estaciones; aumentó en diez centímetros el nivel del mar debido al aumento de la temperatura de los océanos y al derretimiento y retracción de los glaciares.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial, ha proyectado escenarios futuros bajo distintas variables. A pesar de que los modelos elaborados tienen un alto grado de incertidumbre en el detalle, no hay duda de que en un futuro

cercano la temperatura se elevará. De no tomarse medidas correctivas, la temperatura podría incrementarse entre dos y tres grados centígrados hacia el año 2050, y el nivel del mar aumentar a más de un metro, cifras aparentemente pequeñas pero de efectos devastadoras para el frágil equilibrio de nuestro ecosistema.

La preocupación por este asunto no proviene del convencimiento de que la humanidad no tiene derecho a intervenir sobre los fenómenos naturales de la forma como lo está haciendo en la actualidad. Proviene, más bien, de la conveniencia de asumir los costos económicos que implica la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, ya que, de no hacerlo, el precio a pagar va a ser mucho mayor.

## Cancún, el nido de serpientes

La lógica del antiecologismo como negocio, el "negocio verde" fue la dominante en la 16 Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CCNUCC), realizada en Cancún entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2010. Lo señaló, con claridad, Octavio Rosas Landa, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales: "lo único que quieren es hacer un gran negocio de esta crisis climática, mientras tanto el pueblo se sigue enfermando, se sigue muriendo por estas políticas perversas y por la operación y actuación de todas estas empresas trasnacionales que se están apropiando de aire, suelo, agua,

bosques, semillas y de todos los bienes comunes que son parte del patrimonio de la humanidad".

Curiosa ironía: la más importante reunión internacional sobre medio ambiente se efectuó en un país ambientalmente devastado, y en una ciudad que ejemplifica todo lo que no hay que hacer para cuidar la ecología.

En el mapa de los modernos enclaves urbanísticos de la globalización Cancún ocupa un lugar privilegiado. Sol y sombra del desarrollo desbocado, la ciudad es, simultáneamente un emblema de la modernidad y del atraso. Cancún, nido de serpientes en lengua prehispánica, nació por decisión gubernamental hace casi cuatro décadas. Una isla desierta, separada de tierra firme por estrechos canales que unían la mar con varias lagunas, y una ribera rodeada de selva virgen y playas poco exploradas —todas de enorme belleza natural— fueron convertidas en el centro de atracción turística más importante del país.

Toneladas de concreto, varillas y vidrio hicieron nacer el sueño de los banqueros. Un impresionante negocio de constructores, políticos y cadenas hoteleras trasnacionales que han financiado la construcción de más de 27 mil cuartos de hotel y precipitado la formación de un núcleo urbano de más de 700 mil habitantes. Un proyecto que ha provocado un ecocidio monumental y en el que miles de personas viven sin drenaje, y con pocos servicios de agua y electricidad.

Cancún es fuente captadora de divisas e imán que atrae a casi la mitad del turismo que llega a México, pero es, también, un ejemplo de pobreza. Población en creci-

miento en una nación sin empleos, es punto de llegada de todo tipo de buscadores de oportunidades. Territorio para lavar dinero, para la trata de blancas y el narcotráfico, florecen allí fortunas e inseguridad.

Se trata en realidad de dos ciudades distintas, unidas por una ancha avenida, que comparten un mismo nombre. En un lado se encuentra la *polis* del esparcimiento y los paisajes privilegiados, en el otro la de la escasez. Pocos lugares más inadecuados para realizar una gran cumbre mundial sobre cambio climático.

## Desfondar el Protocolo de Kyoto

En la Conferencia de Cancún se discutió el futuro del Protocolo de Kyoto, que se firmó en 1997 en Japón y entró en vigor en febrero de 2005. En él, 37 países industrializados se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para 2012, en 5.2 por ciento con respecto a los niveles de 1990. En lo esencial, no lo han hecho. Por el contrario, algunos las han incrementado. Estados Unidos firmó el acuerdo, pero no lo ratificó. Los 183 países que lo ratificaron fueron responsables de menos de 55 por ciento de las emisiones de CO2 de 1990.

Reducir las emisiones significa modificar las maneras del consumo de energía. Grandes empresas extractoras de carbón y petróleo, y generadoras de electricidad a partir de combustibles fósiles, resultarían afectadas. El modelo de vida de la población de los países desarrollados tendría que cambiar drásticamente. Y por supuesto, la resistencia a hacerlo es enorme. Un informe de Global

Carbon Project da cuenta de cómo las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo en el mundo: tras la disminución de las emisiones de CO2, de 1.3 por ciento entre 2008 y 2009 (debido a la crisis y al freno de la actividad), en 2010 se incrementaron en 3 por ciento.

Para los países menos desarrollados los efectos del cambio climático son dramáticos. Bruno Sekoli, presidente del Grupo de Países Menos Desarrollados, dijo en la COP 16: "La situación para nosotros es extremadamente desesperada. Nuestros países aún luchan para sobrevivir. Tuvalu podría desaparecer bajo el agua en cualquier momento. Es muy preocupante imaginar qué pasará dentro de 10 años con la actual tasa de emisiones". Según Tosi Mpanu, presidente del Grupo de África, por culpa del cambio climático entre 75 y 100 millones de personas en su continente padecerán escasez de agua, y la producción agrícola caerá en 2025 en 30 por ciento.

Dos lógicas sobre el cambio climático se enfrentaron en la COP 16. La primera considera los problemas ambientales como una cuestión de mercado, partiendo de la capacidad para regular el clima como una mercancía mensurable y asignando un precio al mercado de emisiones de CO2.

La segunda sostiene que no hay más camino para combatir las consecuencias del deterioro ambiental que el compromiso de los países desarrollados de reducir entre 40 y 50 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero. Rechaza que los mecanismos de mercado sean eficaces para afrontar los efectos de la devastación ambiental, y ve en ellos la vía para despojar a la humani-

dad en lo general y a los pueblos indígenas en particular, de sus recursos naturales.

La primera posición fue sostenida por una poderosa alianza de gobiernos de las naciones desarrolladas, grandes empresarios y organismos financieros multilaterales. La segunda, por una variopinta coalición de movimientos sociales, ONG, gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y varios países africanos y asiáticos. No todos sostuvieron hasta el final esta posición. Bolivia fue la voz cantante en la defensa de este punto de vista, pero, como precisó el canciller cubano Bruno Rodríguez "no todos pueden hablar de la misma manera aunque quisieran hacerlo".

El futuro del Protocolo no debería estar a discusión. "Fue firmado y ratificado —expresó Pablo Solón, el embajador de La Paz en la ONU—, no debería (disentirse), pero lo está".

En la COP 16, la apuesta de los países desarrollados fue a desfondar el acuerdo, buscar que se establecieran compromisos no vinculatorios (no obligatorios), y avanzar en acuerdos parciales como REDD, en los que se establecen mecanismos de mercado. Esto pudo verse más o menos con claridad, a partir de la posición de Estados Unidos, que jugó durante toda la negociación, con cartas marcadas.

## El maquillaje verde

Todo en Cancún fue maquillado para que la ciudad, México y sus gobernantes parecieran verdes. La mayoría de

los delegados no se transportaron en automóviles, sino en vehículos con letreros que anunciaban: "por un aire limpio, este autobús consume biocombustible", cuando no hay ninguna relación entre los combustibles "limpios" y la limpieza del aire y, por el contrario, diversos estudios muestran que en su elaboración se invierte más energía de la que proporciona.

Como si fuera un Monumento a la Energía Desconocida, el 24 de noviembre empezó a funcionar en la ciudad una planta eólica que produce, según el superintendente de la zona Cancún de la Comisión Federal de Electricidad, Gerardo Castañeda Adame, 800 kilovatios por hora. Tuvo un costo de 3 millones de dólares. Solitaria, es la única que se levantó.

La Villa del Cambio Climático, sede del encuentro y con frecuencia vacía, alojó pabellones del gobierno y de empresas como Banamex, Honda, Mitsubishi y CNN en español, todas muy ecologistas.

Aunque el lugar estuvo usualmente vacío, se construyó un enorme escenario para shows. Y, ¡guau!, allí, la cantante Filippa Giordano interpretó "música para abrir el corazón", y el rockero Alex Lora, quien acostumbra tocar sus rolas en los mítines panistas, se disfrazó de Bono e invitó a "cuidar el planeta". Bueno, hasta los espectaculares se convirtieron a la ecología. La Nissan anunció en ellos su nuevo modelo Leaf, ciento por ciento sin emisiones.

Poco de eso quedó en Cancún una vez que la Conferencia concluyó. México, se sabe, es la nación del maquillaje modernizador. Sus políticos son expertos en inaugurar obras que no se han concluido.

## La protesta

Al filo de la medianoche del 3 de diciembre de 2010, arribaron a Cancún 650 integrantes de las Caravanas Internacionales de Resistencia y Denuncia. Su meta era mostrar el desastre ambiental que existe en México y emitir un claro mensaje en contra de los mercados de carbón y de programas como RED+, que buscan privatizar los bosques y el aire.

Sin recursos y en plena crisis económica se movilizaron desde apartadas comunidades, así como desde diferentes lugares del mundo, para expresar su certeza de que la vida de todos no sólo se enfrenta al problema climático del calentamiento global. Según los participantes, en México y en el mundo se está frente a peligrosos procesos de devastación ambiental generalizada y de destrucción social y comunitaria que requieren soluciones verdaderas, urgentes, profundas y complejas. La destrucción de las condiciones ambientales y sociales ya ha comenzado a producir anualmente decenas de miles de muertos, pero como van las cosas, no tardarán mucho en agravarse aún más.

Las caravanas estuvieron integradas por trabajadores electricistas y de la educación, campesinos, indígenas, afectados ambientales, estudiantes y ciudadanos de los estados de México, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Distrito Federal. Participaron también 62 personas provenientes de Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Brasil, Argentina,

Guatemala, Francia, Italia, Alemania, España y Bélgica. Se trasladaron en 16 camiones y decenas de automóviles y camionetas.

Los caravaneros salieron de Jalisco, San Luis Potosí y Guerrero rumbo a la Ciudad de México. De allí siguieron su marcha hacia Cancún, y en el trayecto se les unieron contingentes provenientes de Oaxaca y Chiapas. Hicieron escala en puntos claves de la devastación ambiental. Recorrieron distintos lugares donde hay afectación ecológica e injusticia social, recopilando testimonios de organizaciones sociales que han sido golpeadas o agraviadas por las políticas del gobierno mexicano y por empresas trasnacionales, admitidas después del TLCAN. Su recorrido dibujó un mapa de la profunda degradación del medio ambiente existente en el centro y sur del país.

En Puebla los recibió un variopinto conglomerado de organizaciones sociales que luchan básicamente en contra de la urbanización salvaje (libramientos, despojo de tierras y de aguas subterráneas), de las maquiladoras de Kamel Nacif y de la industria de agroquímicos de Izúcar de Matamoros. Fue significativa la participación de los grupos ciudadanos que buscan regenerar la cuenca del río Atoyac en Puebla y Tlaxcala.

En Veracruz fueron cobijados por la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, que agrupa a más de 20 luchas ambientales, entre las que se encuentran quienes se enfrentan con Granjas Carroll, los colectivos que ven por la defensa de los ríos Sedeño, Nautla, Bobos, Papaloapan, y quienes protestan contra el establecimiento de un proyecto minero en Actopan, al lado de la

nucleoeléctrica de Laguna Verde. Participaron también en el encuentro los promotores de la movilización contra la construcción de 13 microhidroeléctricas que quieren instalar en todo el estado, así como los afectados en su salud por la contaminación del río Blanco, en Tierra Blanca.

En Ixhuatlán del Sureste, municipio vecino con Coatzacoalcos, las caravanas recibieron la hospitalidad de 12 comunidades que luchan contra la destrucción y contaminación de sus aguas y territorios por parte de la industria petrolera. Allí, los afectados por el vertido de desechos de Pemex en el río Coatzacoalcos, y por la acción contaminante de los complejos petroquímicos de Pajaritos, La Cangrejera y Madero, y de la refinería de Minatitlán, ofrecieron un testimonio sobrecogedor. Los niveles de cáncer entre toda la población rural y urbana de la región están entre los peores de todo el país.

Las caravanas enviaron al mundo un mensaje: el gobierno de México no está haciendo nada para atacar las causas reales de la devastación ni para detener la ambición de las empresas trasnacionales.

## El mandatario ecologista

Decidido a montarse en la lógica del "ecologismo de los negocios" de José María Aznar, Felipe Calderón utilizó la Cumbre de Cancún para construirse una reputación de mandatario preocupado por el medio ambiente, y labrarse un porvenir. Se comportó como si estuviera en una campaña electoral por el voto popular, En una de las actividades de la jornada, vestido para la ocasión, se trepó

a un automóvil eléctrico. Incansable, anunció el programa Luz Sustentable, mediante el cual se propone cambiar 47 millones de focos incandescentes por lámparas ahorradoras. Además, advirtió que todas las hipotecas que otorga el Infonavit a partir de 2011 deberán ser "verdes", esto es, orientadas al uso de tecnologías ahorradoras de energía y agua.

Como parte del maratón político que corrió, el mandatario expuso los supuestos beneficios que han permitido a México avanzar hacia la disminución de emisiones contaminantes por medio del Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD).

Encarrerado, presumió ProÁrbol, informando que se han plantado 650 millones en el país. Nada dijo de ese programa, que ha sido fuertemente criticado por los expertos forestales. La Auditoría Superior de la Federación confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en su aplicación en 2007. Los técnicos han documentado malas prácticas en el manejo, cuidado y mantenimiento de ProÁrbol, y siembra de especies exóticas. Las organizaciones campesinas han denunciado cómo se destinan cuantiosos subsidios a plantaciones forestales comerciales, en manos de grandes empresarios.

REDD parte del supuesto de que, como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo hagan. Lo llaman deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario ganar-ganar, como dicen los empresarios.

Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva han destruido. Lo podrán seguir haciendo, ya que REDD acepta que dejar apenas 10 por ciento del área original se cuente como deforestación evitada.

La eficacia del programa es cuestionada por especialistas. De acuerdo con la red Carbon Trade Watch, socava severamente las políticas de mitigación climática y exacerba los problemas ambientales y sociales. REDD está financiado por los grandes contaminadores, intrínsecamente vinculados al mercado de carbono.

Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental, denunció en la Cumbre cómo en el contexto de este programa, Shell cometió genocidio contra el pueblo Ogoni, en Nigeria, y ecocidio de la cuenca del Níger. Según él, el programa facilita y avala que ésta y otras compañías continúen extrayendo combustibles fósiles, al tiempo que destruyen el clima y a los pueblos indígenas. La mayoría de los bosques del mundo están en territorios nativos. Los proyectos tipo REDD han propiciado despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de las culturas indígenas, militarización, engaños y servidumbre, señaló.

Para las organizaciones campesinas e indígenas, REDD es un mecanismo que beneficia a los que más contaminan y amenaza con extender a todo el planeta los desiertos verdes de las plantaciones forestales.

## El cheeseburger

Un alto funcionario de la administración de George W. Bush declaró al New York Times el 21 de abril de 2001: "No se puede tener una cumbre comercial en estos días sin gases lacrimógenos, sería como una cheeseburger sin queso".

La conferencia de Cancún no fue la excepción. Durante más de una semana, diversas organizaciones ambientalistas efectuaron reuniones alternativas a la oficial, marchas de protesta, mítines dentro de los recintos oficiales y hasta una gran concentración con el presidente de Bolivia, Evo Morales.

El encuentro oficial dificultó enormemente la participación de la sociedad civil en la discusión y análisis de la problemática, tanto así que se denunció cómo, bajo la presidencia mexicana, se fortaleció la tendencia a operar bajo el esquema del cuarto verde, nombre que se le da a la forma centralizada en la que se toman las decisiones en la Organización Mundial del Comercio, acuñada porque las oficinas del director de esa institución están pintadas de color verde.

Como parte de esta jornada de lucha, el 5 de diciembre se inauguró el Foro Global "Por la Vida y la Justicia Ambiental y Social". Durante la apertura y el desarrollo de los trabajos campeó una idea central: es necesario descarrilar los mercados de carbono y el programa REDD que los gobiernos pretenden legitimar en la COP 16.

La conclusión es que el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación no reduce

significativamente la emisión de gases invernadero, pero sí abre la puerta a la privatización de territorios, premia a quienes contaminan y atenta contra la soberanía nacional y la sobrevivencia de las comunidades indígenas.

El origen de los mercados de carbono está ligado a la firma misma del Protocolo de Kyoto. En aquel entonces, la delegación de Estados Unidos introdujo una serie de propuestas para el comercio de emisiones que socavaron los objetivos del acuerdo. Su idea era permitir que los países industrializados que firmaban el tratado, en caso de no querer reducir las emisiones en su propio territorio, pudieran intercambiar esos compromisos por la promesa de reducir las emisiones en otros países.

Como explica Larry Lohmann, el comercio de emisiones es un sistema complejo con un objetivo sencillo: abaratar los costos que las empresas y los gobiernos deben destinar a cumplir con los objetivos de reducción de las emisiones.

Los mercados de carbón no permiten resolver el reto principal para enfrentar el calentamiento global: iniciar una nueva etapa en la que se deje de lado el uso de los combustibles fósiles, que son los principales responsables del cambio climático de origen humano. Por el contrario, el comercio de emisiones ha mostrado su absoluta inutilidad para cambiar este patrón energético. Es ineficaz e injusto.

Sin embargo, los países industrializados necesitan apuntalar el comercio de emisiones, que está en clara crisis. Según el Informe Stern sobre cambio climático, redactado por encargo del gobierno inglés, el cambio climático

constituye el mayor fracaso del mercado visto hasta ahora. Para hacerlo, se requiere, desde su lógica, abrir nuevos mercados (como el de los bosques) que pueden resolver lo que los anteriores no pudieron hacer.

En el Foro, Alberto Gómez Flores, representante de La Vía Campesina Región Norteamérica, denunció cómo el espacio de Naciones Unidas para el cambio climático se convirtió en plataforma para legitimar las estrategias de negocios de las trasnacionales. "Las multinacionales —dijo— se benefician de un número cada vez mayor de mecanismos de compensación para captura de carbono, que son nuevas formas para que las empresas trasnacionales se expandan y consoliden su control sobre aguas, territorios y semillas".

En el mensaje de bienvenida, el dirigente de UNORCA, Olegario Carrillo, aseguró que "no se puede calificar menos que irresponsable, aunque no pocos la llaman criminal, la actitud de quienes promueven estos esquemas de privatización-mercantilización del mundo, de los bosques y la atmósfera que sólo nos acercan cada vez más al abismo".

## La voz de la calle

El martes 7 de diciembre se escuchó la voz de la calle en Cancún. Mientras en el complejo hotelero de lujo Moon Palace comenzaba el segmento de alto nivel de la cumbre, en las avenidas del destino turístico, miles de campesinos, indígenas, afectados ambientales y jóvenes rea-

lizaron una doble marcha de más de 10 kilómetros para hacer oír su palabra.

Las posiciones de los de adentro y los de afuera no podían ser más contrapuestas. En la reunión oficial Felipe Calderón lanzó un exhorto para concretar un paquete equilibrado de acuerdos relacionados con adaptación, mitigación y protección de los bosques. Fuera del recinto oficial, el agricultor vasco —de origen escocés— y dirigente de Vía Campesina, Paul Nicholson, aseguró que era mejor no alcanzar acuerdos, que llegar a unos malos.

Resumiendo el sentir de los manifestantes, Nicholson dijo que era necesario volver a bautizar el Moon Palace con el nombre de palacio de los lunáticos. "Es que lo que están discutiendo allí los ministros nada tiene que ver con la realidad, con lo que realmente está pasando. Verdaderamente están en la Luna."

La marcha partió del gimnasio Jacinto Canek, a unos kilómetros del centro de la ciudad, para dirigirse a Moon Palace. Fue detenida por la Policía Federal en el kilómetro 15, antes de llegar al recinto oficial de la Conferencia, después de recorrer un trayecto en autobuses y 8 kilómetros más a pie.

La integraron cuatro contingentes. El mayoritario, formado por labriegos y agricultores de Vía Campesina, Unorca y Cnpa; una pequeña delegación indígena; afectados ambientales de todo el país, y jóvenes que hicieron de la protesta un gran reventón, con música de reggae incluida.

Señal de los tiempos, indicador de cómo la resistencia al neoliberalismo se ha trasladado del norte al sur,

se oyó la música de tambores, platillo y zampoñas (flautas andinas fabricadas con caña de carrizo y cuyas notas se distribuyen en dos hileras de tubos) de Fuerza Joven, grupo de música andina de aires marciales.

Y es que, la estrella en el firmamento de la movilización, fue la delegación boliviana. En lugar de estar en el Moon Palace, Nemesia Achacollo, ministra de Desarrollo Rural y Tierras, quien creció entre cultivos de arroz, maíz, yuca y cebolla, y dirige la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, estuvo en las calles con 90 integrantes.

Allí llegó también el embajador Pablo Solón. Fue recibido con una de las consignas más coreadas a lo largo de la protesta: Copenhague no, Cochabamba sí. El eslogan hace referencia a lo sucedido en 2009 en la capital danesa, cuando, en la COP 15, se intentó aprobar en el último minuto un documento que significaba un grave retroceso a los compromisos pactados por los países desarrollados para reducir las emisiones de CO2. También al encuentro sobre cambio climático efectuado meses después en Cochabamba, Bolivia, del que emergió una propuesta alternativa impulsada por los movimientos sociales.

Al ser detenida la manifestación por un camión del ayuntamiento, activistas —algunos ligados al Bloque Negro— se desligaron del contingente principal para encarar a la policía federal, que impedía el paso. Y a pesar de que la desproporción de fuerzas era avasalladora, con sarcasmo, los muchachos gritaron a los uniformados: ¡Ríndanse! ¡Los tenemos rodeados! Ni se rindieron, ni se rieron.

El buen humor se mantuvo por buen rato. La policía se convirtió en parte de la escenografía para atraer la atención de la prensa. Una pareja bailó tango, un grupo de italianos protestó contra las bases militares, un Jesucristo prestado de alguna representación de Viernes Santo en Iztapalapa les dijo a los robocops: "¡Perdónalos, Señor! ¡No saben lo que hacen!", y un indígena arengó contra REDD.

Mientras la marcha transcurría, en la sede oficial del acto, Global Justice Ecology Project convocó a una conferencia de prensa con la participación de Vía Campesina, Asia Pacific Environmental Network, Indigenous Environmental y jóvenes.

Los voceros de los movimientos sociales criticaron las soluciones falsas para el cambio climático promovidas en la conferencia por los países industrializados. Expresaron desacuerdo con que se quiera debilitar el Protocolo de Kyoto, y los convenios que se negocian estén más cerca de los intereses del mercado y la lógica de la privatización de lo común, que de la magnitud de la problemática del calentamiento global. Rechazaron el mecanismo REDD, que sólo pone énfasis en fortalecer los mercados de carbono y no en la reducción de emisiones. El problema es que el gobierno de México quiere sacar un acuerdo, pero no quiere disputar el poderío de Estados Unidos, dijo el delegado de Amigos de la Tierra.

La conferencia de prensa devino mitin dentro del acto oficial, y cerca de 40 asistentes fueron desalojados y trasladados en autobús fuera del Moon Palace. La pretensión oficial de evitar las protestas a kilómetros de dis-

tancia de donde se encontraban los delegados, fracasó. Hasta dentro del palacio de los lunáticos se coló el clamor de la calle.

## La estrella solitaria de la Conferencia

Dos días más tarde, en el auditorio en el que se celebró el Foro alternativo al oficial, el mariachi se encarreró y, a pesar de que le habían solicitado tocar sólo una diana, se hizo eco del ánimo del público en el auditorio y se siguió con El Rey. Y el presidente Evo Morales, festejado por la multitud, sonrió y cantó alegre y "llorar y llorar", mientras le decía al oído al canciller cubano, Bruno Rodríguez, que en esta cumbre no fue el pueblo quien lloró sino los poderosos.

Los músicos no podían haber escogido mejor canción para resumir lo sucedido el 9 de diciembre en la cumbre. El presidente de Bolivia fue el rey durante toda la jornada. Tanto así que Trino Alcides Díaz, embajador de Venezuela en México, exclamó, sin exagerar: "Evo es la estrella solitaria de la conferencia. Se robó el show". Un papel acorde con el desempeñado por Bolivia durante todo el encuentro.

Así fue. No hubo en toda la jornada del 9 de diciembre un personaje más buscado y fotografiado por la prensa. Orador inicial en la sesión de alto nivel de la COP 16, el mandatario boliviano se despachó con la cuchara grande, y habló cuatro veces más tiempo que lo usual. Para su conferencia de prensa se quedó un buen número de personas sin poder entrar, porque el auditorio estaba

repleto. En el encuentro con organizaciones sociales organizado por Vía Campesina, que sostuvo en la tarde en el auditorio Jacinto Canek, fue ovacionado y tratado con afecto y reconocimiento.

En esas tres presentaciones públicas el mandatario desempeñó papeles distintos. En la sesión de alto nivel se comportó como un estadista, poniendo por delante la preocupación de salvar a la humanidad y al planeta del calentamiento global. En la conferencia de prensa funcionó como un experimentado pedagogo, desmontando con elegancia y solidez la pretensión de responsabilizarlo del estancamiento de la cumbre. En el mitin con los movimientos populares habló como sindicalista y líder social, explicando los retos de la actual encrucijada ambiental y llamando a la movilización y organización de los de abajo.

Como los mejores pugilistas, mostró buenos reflejos en el cuadrilátero, gran movilidad, capacidad para conectar golpes y habilidad para evitar la confrontación sobre sus puntos flacos. Estilista, el presidente Morales evitó las provocaciones con finura. Cuando un reportero le preguntó sobre las declaraciones de Mario Vargas Llosa tildando a Bolivia y Nicaragua como seudodemocracias populistas y payasas, el mandatario reviró diciendo: "Los pueblos indígenas siempre hemos sido víctimas de algunos letrados, de algunos escritores, de algunos novelistas. Si a un presidente lo trata de payaso, ¿a un hermano de base cómo lo verá ese literato?"

Eso no le evitó lanzar algunos golpes certeros con sarcasmo e ironía. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han demostrado ser muy poco inteligentes,

dijo a propósito de Wikileaks, entre carcajadas y aplausos del público. El capitalismo ya no se salva ni a sí mismo. No resuelve nada. Sólo crea problemas y más problemas, aseguró en dos momentos diferentes.

Contraponiendo el socialismo verde al capitalismo verde, con un discurso claramente anticapitalista, propuso cambiar la vieja consigna de la izquierda de patria o muerte por la de "o muere el capitalismo o muere el planeta". El capitalismo, afirmó tajante, es la muerte y nosotros luchamos por la vida.

De la misma manera en la que lo hizo Hugo Chávez durante el Foro Social Mundial celebrado en Caracas, en el que convocó a pasar a la ofensiva en pos del socialismo del siglo XXI, el presidente Morales, propuso frente a los movimientos populares, una nueva doctrina de vida, un neosocialismo del siglo XXI basado en cuatro principios básicos: vivir bien, no vivir mejor; compartir no competir; impulsar no sólo la lucha de clases sino la lucha por la defensa del planeta, para vivir en armonía con la madre tierra; y vivir con dignidad, pero sobre todo con igualdad.

Una y otra vez apeló a la movilización popular y a la necesidad de pactar una alianza con los de abajo para enfrentar el cambio climático. "Algo sé de la relación con movimientos sociales", dijo Evo Morales, juguetón, antes de reunirse con Vía Campesina. El trato entre el hoy presidente y la organización es antiguo, estrecho, horizontal y vivo. Paul Nicholson, explicó: "Aún nos acordamos de cuando en 1994 y 1996 Evo venía a Europa a las reuniones que se hacían en defensa de los cocaleros. En

aquel entonces era totalmente desconocido". Y el dirigente campesino hondureño, Rafael Alegría, precisó: "Evo es nuestro hermano, nuestro compañero. Es fundador de nuestra organización, un luchador histórico. Es un digno representante de los pueblos oprimidos del mundo. Nos enorgullecemos de él". En la Bolivia de Evo vemos reflejadas muchas de las cosas por las que luchamos, terció Alberto Gómez, líder rural mexicano.

Uno de los puntos centrales de unidad entre esos movimientos sociales y el presidente Morales es la defensa del Acuerdo de los Pueblos, firmado el pasado 22 de abril en Cochabamba, Bolivia. El acuerdo alerta que la humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. Establece 15 puntos de acción, entre los que se cuentan: limitar el incremento de la temperatura; reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero; exigir a los países desarrollados el pago de su deuda climática; rechazar los mercados de carbón y destinar para el cambio climático un financiamiento superior al que actualmente se consigna en los presupuestos de defensa, guerra y seguridad de los países desarrollados.

Ese 9 de diciembre, Evo Morales fue el personaje de la conferencia. Sus palabras resonaron fuerte en el movimiento por la justicia ambiental de México. En sus intervenciones y en sus propuestas se resumieron, en mucho, los dilemas de la cumbre: avanzar en que los países desarrollados reduzcan sus emisiones de CO2 o dar luz verde al crecimiento del calentamiento global.

El presidente boliviano lo expresó con su lenguaje: "Hay que convertir esto en un Cancunazo por la vida, no en un Cancunhague".

## Licencia para matar

Finalmente, en el último momento, con la oposición única de Bolivia, la COP 16 firmó un acuerdo que fue presentado ante la opinión pública como un avance en la lucha por enfriar el planeta. La realidad, sin embargo, es distinta. El acuerdo fue un gran fracaso. Para combatir el cambio climático no hay más que una medida eficaz: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El pacto aprobado no avanzó un solo milímetro en esta dirección.

El acuerdo de Cancún es bueno para Estados Unidos y los países desarrollados, pero es muy malo para el clima. No impide que la temperatura global aumente en más de cuatro grados centígrados. Y, como señaló con toda claridad la delegación de Bolivia, recientes reportes científicos muestran que 300 mil personas ya están muriendo cada año por los desastres relacionados con el cambio climático. Este texto amenaza con el aumento de muertes anuales a un millón.

Los compromisos de reducción de emisiones contemplados en el documento apenas alcanzan 60% de lo que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) indica como requerimiento para que la temperatura se eleve.

El acuerdo da permiso para matar. Más que avance es un retroceso. Las naciones desarrolladas no ofrecie-

ron nada nuevo en reducción de emisiones ni en financiación. Por el contrario, lograron abrir los candados para dar marcha atrás a los compromisos existentes, y avalar todas las rutas de escape posibles para evadir sus responsabilidades. El texto comunica textualmente que los países acuerdan que las emisiones nacionales deben tocar techo lo antes posible, pero no especifica cuál es ese techo, cuándo es lo antes posible ni qué sucede a los que no lo cumplan.

El documento aprobado está lleno de lagunas, confusiones deliberadas e imprecisiones. Asienta, por ejemplo, que se deben completar los trabajos para prorrogar Kyoto lo antes posible para que no haya brecha entre el primero y segundo periodo de cumplimiento, pero no dice cómo, cuándo, dónde y en qué términos. Se trata de una formulación de buena voluntad. Por ejemplo, Japón, que se había negado a seguir adelante con el segundo periodo de cumplimiento, puede alegar que salió triunfante.

El texto de Cancún abre la posibilidad de que los objetivos de disminución de gases de efecto invernadero no sean vinculantes (como lo son ahora) y su cumplimiento sea solamente voluntario, es decir, como una llamada a misa a la que asiste quien quiere. Los países -dice el texto-, se comprometen a discutir las opciones legales para alcanzar un resultado acordado en 2011 en la Cumbre de Durban.

El acuerdo de Cancún fue aprobado sin consenso y con una maniobra diplomática de graves consecuencias hacia el futuro. A lo largo del plenario, Bolivia expresó

su desacuerdo de manera razonada. La canciller Patricia Espinosa violentó el sistema de toma de decisiones de Naciones Unidas. Este tipo de resolutivos deben ser avalados por consenso, es decir, sin votos en contra. Así ha sido siempre. Y esa norma no fue respetada. La funcionaria mexicana rompió la regla del consenso. La violación sienta un grave precedente.

Penosamente, Bolivia no fue apoyada por los países de la Alba. La dejaron morir sola, permitieron que el gobierno mexicano la aislara. Claudia Salerno, la representante de Venezuela, apostó a convertirse en la negociadora responsable. Al final declaró: Yo puedo regresar a mi casa diciendo: tengo algo. Por supuesto no aclaró qué. Algunos representantes diplomáticos de estas naciones dijeron, extraoficialmente, que las posiciones de Evo Morales eran muy radicales y no llevaban a ningún lado, y que era necesario sacar una declaración final de compromisos.

La posición de Bolivia en favor de la justicia climática en la cumbre fue absolutamente congruente con las propuestas acordadas por 35 mil personas que asistieron a la Conferencia Mundial de los Pueblos de Cochabamba. En el año transcurrido desde Copenhague, esas propuestas se integraron en el texto de negociación de las partes. Sin embargo, el texto de Cancún excluyó sistemáticamente esas voces. El resto de las naciones que integran la Alba no honraron esos compromisos, a pesar de la participación de varios mandatarios de países latinoamericanos en Cochabamba.

Una pista de los intereses presentes en el acuerdo de Cancún la brindan las declaraciones de Todd Stern, el representante de Estados Unidos. Se logró un paquete equilibrado de decisiones, dijo. Añadió: Lo que tenemos ahora es un texto que, aunque no es perfecto, es una buena base para seguir adelante.

¿Qué significa seguir adelante? Básicamente la extinción del Protocolo de Kyoto sin un sucesor. Japón y Rusia quieren posponer la discusión. Los resultados están a la vista. Según la Agencia Internacional de Energía, durante el año 2010, a pesar de la recesión económica, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron a niveles récord, mientras que los subsidios globales que estimulan el uso no responsable de energéticos aumentaron en más de mil 400 millones de dólares.

En Cancún no hubo un pequeño paso hacia delante, como claman varias ONG. Por el contrario, se abrió la puerta a una mayor privatización y mercantilización del clima. Tal como dijo Vía Campesina: El balance es negativo para la humanidad, pues se abrieron las puertas al gran capital y a las trasnacionales para que continúen con sus negocios y sigan apostando con la vida.

Cuando George W. Bush se convirtió en un cristiano renacido, le tomó un enorme cariño a una pintura de W. H. Koerner llamada Un deber que cumplir. Tanto así que su autobiografía lleva el mismo nombre. El cuadro adorna su oficina. La obra de arte representa un vaquero de nombre Charles Wesley montando a caballo, decidido a cruzar una empinada y escabrosa vereda. Según el presidente, el mensaje del jinete es que “servimos a Alguien

más grande que nosotros mismos". Es decir, para el ex mandatario, la misión de Wesley en el mundo fue difundir la palabra del cristianismo metodista en el oeste de Estados Unidos a finales del siglo XIX.

La vida de Charles Wesley fue, sin embargo, bastante diferente a como la ve el ex presidente de Estados Unidos. Según el investigador Jacob Weisberg, el vaquero del cuadro no es más que un ladrón de caballos que, después de haber sido hecho prisionero, logra escapar en Nebraska. El cuadro representa su huida.

El acuerdo alcanzado en la COP 16 guarda una enorme similitud con la visión que sobre el cuadro de W. H. Koerner tiene el mandatario estadounidense. Donde ellos quieren ver una labor misionera realmente se esconden los intereses de forajidos. Ese es el deber por cumplir que tienen por delante.

## LOS CAMINOS DE LA RESISTENCIA

### El blues de "El puente de Juanacatlán"

El niño Miguel Ángel López Rocha tenía ocho años de edad cuando cayó al río Santiago, en el fraccionamiento La Azucena, de El Salto, en Jalisco, en enero de 2008. Cuando lo trasladaron al Hospital General de Occidente, deliraba. Durante 19 días agonizó en estado de coma. El miércoles 13 de febrero falleció. Los médicos concluyeron que su muerte fue provocada por problemas cardio-

rrespiratorios, falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por arsénico.

Las autoridades sanitarias estatales quisieron tapar el asunto y declararon que su fallecimiento se debió a un golpe en la cabeza o a que consumió un derivado del opio. La verdad es que su cuerpo no toleró los 51 microgramos del arsénico que lo invadieron al caer a las aguas contaminadas del río, una cantidad entre 4 y 10 veces superior a la que una persona regularmente tiene en la sangre. El arsénico, se sabe, se usa para curtir pieles, templar vidrio, y como reactor químico en varias industrias.

La contaminación del río Santiago, que nace en el lago de Chapala y desemboca en las costas de Nayarit, es escandalosa. Un estudio efectuado en 2004 por la Comisión Estatal del Agua, documentó la existencia en sus aguas de un letal cóctel de metales pesados compuesto de plomo, cromo, cobalto, mercurio y arsénico. Hay evidencia de que en el hálito de la cascada El Salto de Juanacatlán, flota benceno, uno de los gases cancerígenos más venenosos.

En su cauce se descarga buena parte del drenaje sin tratar de la zona metropolitana de Guadalajara y los desechos líquidos de las fábricas del corredor industrial de El Salto, donde operan 260 empresas como Celanese Mexicana, Ciba Especialidades Químicas, IBM de México, Nestlé, y un elevado número de empresas maquiladoras extranjeras. Las autoridades, además, han dado licencias para construir viviendas en zonas de alto riesgo.

Durante años, los activistas ambientales han denunciado la contaminación del río y las promesas incum-

plidas de las autoridades para sanearlo. Han presentado análisis, fotografías y videos. La tragedia de Miguel Ángel documentó fehacientemente que sus demandas tienen sustento.

A raíz de la muerte del pequeño, cientos de automovilistas de los municipios de El Salto y Juanacatlán pegaron calcomanías rectangulares color verde y negro en sus automóviles, con leyendas impresas como "Me caga tu caca", "Industria+gobierno=muerte", "Al que ensucie llámalo PUERCO" y "No matarás".

Para denunciar la polución del río Santiago, rendir un homenaje a la memoria del niño Miguel Ángel, recordar a quienes actualmente padecen enfermedades por la polución que existe en la zona, no olvidar a todos los mártires y con la esperanza de ver un río libre de cánceres, la banda de rock Tragicomi-K, con el apoyo de Greenpeace e Imdec, compuso el blues "El puente de Juanacatlán". El cineasta Jorge Riggen filmó el video clip.

En la elaboración del video clip participó la población del municipio. En él, se evidencia la experiencia cotidiana de la población y el deterioro en su salud y calidad de vida. "El hombre mira al puente, el puente mira al río. Y el río está tan sucio que el hombre tiene frío, él llora como tú", dice el coro, mientras aparecen en escena los lugareños con tapabocas.

El puente de Juanacatlán es una pequeña cuenta de un enorme collar de video clips, documentales, video entrevistas, programas de radio y canciones que los movimientos socioambientales han producido para divulgar sus luchas y su historia. La mayoría son materiales ca-

seros elaborados por activistas, algunos de gran calidad técnica. Muchos han sido subidos a Youtube. No son pocos los que documentan casos de represión, como la sufrida por la comunidad de Xoxocotla en 2008.

Elena Khan y su organización Guerreros Verdes, han realizado excelentes materiales sobre La Parota y los transgénicos. La película 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra de Francesco Taboada, en la que se documenta la resistencia de las comunidades del oriente de Morelos, es un trabajo excepcional. Jorge Riggen, el director de El puente de Juanacatlán, explicó que su principal motivo para involucrarse "en la defensa del río Santiago fue la indignación personal con el gobierno actual que da dinero a televisoras, incluso televisoras internacionales, cuando hay casos tan graves en el estado por atender".

Muchas de esas producciones han sido realizadas por militares ambientales involucrados en diversas luchas, que consideran necesario involucrarse directamente en la elaboración contenidos informativos o artísticos. Activistas como Alberta Cariño, que impulsó una radio independiente y fue asesinada el 27 de abril de 2010 por paramilitares, es un buen ejemplo de ello.

## La siembra de Alberta Bety Cariño

Diminutas, consternadas, fuertes, ataviadas con sus huipiles rojinegros, las mujeres triquis que cargaron por tramos el ataúd café de Alberta Cariño Trujillo hasta su última morada en el camposanto de su natal Chila de las Flores, Puebla, escucharon las palabras que a los dolien-

tes les dedicó su hermana Carmen, entre consignas, rezos y llantos.

"Mi hermana —dijo Carmen el 30 de abril de 2010— luchó por ustedes y por los derechos de los pueblos mixtecos, por lo que nos sentimos orgullosos de tener una mujer como ella, de haber compartido cada momento. Despidámosla con todo el amor, cariño, coraje y terquedad que la caracterizaba, ya que mi hermana siempre fue una mujer fuerte, por eso nosotros hay que luchar también."

Al entierro de Alberta, a quien sus compañeros llamaban también Bety, asistió una multitud similar a la que participa en las fiestas patronales del pueblo. Camaradas y amigos suyos de varios estados de la República se trasladaron cientos y hasta miles de kilómetros para asistir a las exequias. Más de 100 triquis de San Juan Copala viajaron durante horas para acompañar los restos de su compañera. En su casa fue colocada una ofrenda floral que decía: Recuerdo Sitio Nu Savi, junto a una corona de flores con la frase: San Juan Diquiyu está contigo, Bety.

En el panteón, uno de los dolientes le gritó a Omar Esparza, su viudo y padre de su hijo de ocho años y su hija de cinco: Que te quede claro, a Alberta no la vas a enterrar. La vamos a sembrar, porque es de las flores más bellas, y su ejemplo dará fruto.

Beatriz Cariño Trujillo perdió la vida el martes 27 de abril de 2010, cuando integrantes de la organización paramilitar priísta la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada en el paraje Los Pinos, de La Sabana Copala, a la Caravana de

observación por la paz, que llevaba ayuda humanitaria a San Juan Copala. Allí falleció también el internacionalista finlandés Jyri Antero Jaakkola, integrante de la Unión Uusi Tunli ry (Nuevo viento).

Al ser asesinada, Beatriz tenía 37 años y una larga trayectoria de lucha por la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y en favor de la libre determinación de los pueblos indios. Nació en el seno de una familia de campesinos, indígenas, mixtecos. Estudió primaria y secundaria en Chila de las Flores, bachillerato en la Preparatoria 3 de la UABJO, en Huajuapan de León, y la carrera de educación primaria en la Normal del Divino Pastor, en Tehuacán, Puebla.

Dotada de gran inteligencia, enorme sensibilidad y capacidad de comunicación, Alberta comenzó su trabajo de promoción social desde muy joven, de la mano del sacerdote Gerardo Mora Paz, vinculado a la Teología de la Liberación. Se formó en la idea de que la pobreza y la injusticia existen no porque Dios así lo quiera. Con el paso de los años, sin romper con esta corriente de pensamiento, se comprometió con expresiones de lucha político-social laicas, apoyó el levantamiento del EZLN, y participó en la otra campaña, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos.

Este origen religioso quedó de manifiesto en la misa de cuerpo presente que el coordinador de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Oaxaca, Wilfrido Mayrén Peláez, ofició a la difunta, en la iglesia de Santa María de la Asunción. “Ahora contamos —dijo— con una interven-

tora delante de Dios, alguien que conoce de la pobreza y tristeza de los pueblos (...) la lucha sigue, porque la vida no se detiene, ni el sepulcro la detiene. La muerte de Bety es el inicio de un camino, sólo pasa a otra vida, desde donde seguramente estará interviniendo por todos nosotros como lo hizo en la tierra."

Alberta trabajó activamente en las comunidades del valle de Tehuacán, afectadas por la contaminación de sus aguas por parte de las granjas industriales avícolas y las fábricas de mezclilla, y en los pueblos pobres de la Sierra Negra. Organizó a mujeres vendedoras de tortillas, promovió la formación de cajas de ahorro, desarrolló proyectos de economía solidaria, fundó centros de apoyo a migrantes e impartió programas de salud reproductiva.

En 2000 se trasladó a su región de origen. Tiempo después se vinculó a la lucha contra las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad; la destitución del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz; la resistencia a la construcción de grandes presas; la autodeterminación de los pueblos; la promoción de radios comunitarias indígenas, y el apoyo al municipio autónomo de San Juan Copala.

Alberta fundó, junto a su esposo Omar Esparza, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), asociación civil que trabaja en proyectos de educación popular alternativos, derechos indígenas y derechos de la mujer. En 2008 comenzó a operar la radiodifusora independiente La Rabiosa, con el objetivo de difundir los derechos humanos entre los habitantes de la mixteca. Sin embargo, el 29 de agosto de ese año policías federales les decomisaron su equipo de transmisión, porque no con-

taban con el permiso correspondiente. Colaboró activamente con la radio triqui La voz que rompe el silencio, y promovió la formación de la Red de Radios Indígenas Comunitarias del Sureste Mexicano.

Defensora de la cultura del maíz, organizó en tres ocasiones, en el pueblo de Huajuapan de León, Oaxaca, la Feria del maíz. El evento, en el que había exposiciones, conferencias y comida, se inauguraba con la realización de un ritual indígena en un cerro cercano.

Activista incansable, solidaria con las luchas contra la devastación ambiental, días antes de su muerte acababa de regresar de un encuentro en apoyo a la lucha contra la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. El 3 de diciembre de 2009, participó en las protestas frente a la embajada de Canadá en la Ciudad de México, contra el asesinato de Mariano Abarca, luchador social opuesto a la acción depredadora de las mineras a cielo abierto en Chicomuselo, Chiapas.

Dijo allí Bety: "estamos aquí para decirles a estas grandes empresas trasnacionales, para decirles a estos malos gobiernos que están mal representando a sus pueblos, que no vamos a permitir que esto siga pasando. Que no vamos a permitir que la vida de nuestras hermanas y nuestros hermanos siga en juego. Es necesario (…) que vayamos trabajando juntos desde diferentes grupos, desde diferentes frentes, desde diferentes organizaciones, desde diferentes ideas para poder construir esta gran articulación que detenga a este gran monstruo trasnacional que viene avanzando sobre nuestros pueblos indígenas, que viene avanzando sobre nuestra cultura,

que viene avanzando sobre nuestra identidad. Es necesario hermanos y hermanas, que demos fin a toda esta situación. Que levantemos la voz y que sepan estos malos gobiernos que nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, que siempre hemos estado parados frente a ellos, con la cara en alto, porque somos gente que trabaja, gente que lucha todos los días para llevar el pan a la boca. Somos gente sencilla, somos gente pobre y somos gente campesina".

Carlos Beas, dirigente de organizaciones indígenas del istmo oaxaqueño, escribió en un emotivo recuento sobre la trayectoria de la activista asesinada: "Tengo una imagen fuertemente grabada de ella, jugando con su hija, en un encuentro realizado en La Parota, Guerrero. Parecían dos niñas divertidas y traviesas. La recordamos también junto a Omar, su compañero de toda la vida, en innumerables reuniones, manifestaciones, actos de protesta y también, ¿por qué no?, en convivios y festividades, con su palabra franca y directa y su risa y mirada penetrantes".

Alberta Cariño formó parte de una generación de activistas sociales que promueven, desde abajo, el ecologismo de los pobres y que practican otra política; una camada de militantes que ha logrado sobrevivir a la descomposición ética que atraviesa amplias franjas de los afiliados a la izquierda partidaria; un grupo de luchadores sociales amenazado por gobernadores como Ulises Ruiz. Sus compañeros la sembraron el 30 de abril de 2010.

## La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Alberta Cariño fue una figura excepcional pero no única. En el movimiento por la justicia global de todo el país pueden encontrase militantes con algunas de las características y cualidades de Bety. Personas comprometidas firmemente con sus comunidades y con la transformación del país.

Con activistas así se formó la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), el 31 de agosto de 2008, en las instalaciones de la UNAM. Se encontraron en aquel entonces representantes de 35 comunidades que, al día siguiente, marcharon a la Comisión Nacional del Agua (CNA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para manifestar su descontento con la política hídrica y ambiental.

Los asistentes a la primera asamblea compartían la intuición de que la suma de los conflictos podía ayudarles a transformar la sensibilidad pública y la actitud de los medios de comunicación hacia ellos, alertando sobre la gravedad de los problemas ambientales y dándole visibilidad a los grupos en lucha.

Dos semanas y media más tarde, se volvieron a reunir en la segunda asamblea en la Ciudad de México, para acordar una forma de organización que permitiera sumar sus luchas, experiencias y demandas. Acordaron encontrarse dos veces al año para intercambiar información y avanzar en una plataforma unitaria. Su idea fue realizar las asambleas en distintos lugares del país en los que la lucha fuera más álgida.

Según Andrés Barreda, la asamblea no es una organización social, todavía no es un movimiento, y no es una red. Por lo pronto, es un espacio de encuentro y convergencia periódica de diversos tipos de luchas ambientales que existen en regiones de todo el país. Un espacio de discusión y reflexión sobre el nivel de la devastación en el país. Un encuentro de luchas distantes y temáticamente diferentes entre sí, y que, al estar tan separadas, carecen de los recursos para visitarse y comprenderse unas a otras. Esas luchas, al haberse comenzado a organizar desde plataformas sociales diferentes, se topan con diferencias políticas doctrinarias que les hacen difícil converger.

La Asamblea ha establecido una estrecha alianza con el mundo académico, trabajando junto a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), una red de investigadores activos en áreas como biología, física, matemáticas, economía, sociología, antropología, ciencia política y derecho. Con el objetivo de documentar los casos de deterioro ambiental más graves en México, la Unión creó el Observatorio Socio-ambiental. Su principal fuente de información para trazar ese mapa de problemas socio-ambientales es la ANAA. Ha registrado ya más de 150 casos, relacionados, en su mayoría, con actividades mineras y petroleras, proyectos hidroeléctricos, desarrollo de infraestructura carretera, instalación de rellenos sanitarios y disposición de residuos.

Aunque la Asamblea aún se encuentra en formación, es una de las expresiones más acabadas de la resistencia en contra de la devastación ambiental. Por lo pron-

to ha logrado que esta destrucción, que hasta ahora ha sido invisible, comience a ser vista. Se trata de un espacio plural y abierto, por el que transitan numerosas luchas y activistas, coordinaciones de luchas ecológicas regionales nuevas, e incluso organizaciones sociales viejas y bien asentadas.

La ANAA lucha contra la destrucción y contaminación ocasionada por la minería metálica y no metálica; contra las represas hidroeléctricas; contra la urbanización salvaje; contra la contaminación de las megagranjas industriales (cerdos, pollos, camarones); contra la contaminación petrolera; contra los basureros municipales, hospitalarios, industriales y nucleares. Por la defensa del maíz. Por la defensa de los bosques. Contra el despojo de los ríos, manantiales y acuíferos; contra la sobreexplotación de los acuíferos, y contra la contaminación letal de nuestros ríos. Contra los desplazamientos debidos a proyectos de ecoturismo y conservacionismo que limitan o destruyen formas de vida campesina.

La Asamblea ha organizado siete reuniones nacionales. La tercera asamblea se efectuó en Tláhuac durante marzo de 2009. Se manifestó contra los megaproyectos de la Ciudad de México: basureros, parques industriales y la construcción de la línea 12 del Metro. La cuarta reunión se realizó en El Salto y Juanacatlán, Jalisco, en mayo de ese año. Se solidarizó con la lucha de esas comunidades en contra de la polución del Río Santiago por parte de las industrias y los basureros de Guadalajara. Asistieron 120 comunidades procedentes de diez estados. El quinto encuentro tuvo lugar en el Valle de Perote, donde se asien-

tan las Granjas Carroll. La sexta asamblea se celebró el 11 y 12 de septiembre de 2010 en Magdalena, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, donde diversas comunidades han resistido los embates de la minera canadiense Fortuna Silver. La última reunión tuvo lugar el 31 de julio de 2011, en Salsipuedes, Guerrero. Participaron 422 compañeros de 101 delegaciones de 16 estados del país.

Ante la cerrazón de los canales legales para resolver cuestiones medioambientales dentro del país, la Asamblea, junto a otras organizaciones ambientales y de derechos humanos, ha comenzado a preparar casos colectivos para presentarlos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Tribunal Latinoamericano del Agua y el Tribunal Permanente de los Pueblos.

En la CIDH se pretende demandar a las empresas mineras canadienses, en conjunción con decenas de otras organizaciones agraviadas de toda América Latina. El caso está siendo coordinado por el Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (CCAJAR) de Colombia.

## El Tribunal Latinoamericano del Agua

El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se define a sí mismo como una instancia internacional, autónoma e independiente, de justicia ambiental, creada con el fin de contribuir a la solución de controversias relacionadas con los sistemas hídricos en América Latina. Fundamenta su actuación en principios de convivencia con la naturaleza, respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre personas y organizaciones para la protección del agua. Es

una plataforma de justicia alternativa, para contribuir a la búsqueda de soluciones a las problemáticas hídricas que afectan a los habitantes del subcontinente.

Es un tribunal de conciencia comprometido con la preservación del agua. Se propone garantizar el aprovechamiento del líquido vital como derecho humano para el disfrute de las generaciones actuales y futuras. Su legitimidad proviene tanto del carácter moral de sus resoluciones, como del fundamento jurídico en que se basan. Rige su acción en los convenios, declaraciones y tratados internacionales sobre protección del ambiente. Centra sus actividades en cuatro líneas de trabajo:

- Justicia alternativa ante la crisis de legalidad imperante.
- Seguridad ecológica.
- Educación y sensibilización para la protección de los sistemas hídricos.
- Seguridad hídrica y justo gobierno por el agua.

Desde su fundación en 1998, el TLA ha celebrado cinco audiencias regionales: dos de ellas en San José de Costa Rica (agosto-2000 y marzo-2004), otra en México Distrito Federal (marzo-2006), una en Guadalajara (octubre-2007) y la última en Guatemala (septiembre-2008). Además, ha celebrado 2 audiencias locales: una en San Carlos, en la zona norte de Costa Rica (febrero-2004) y la otra en Managua, Nicaragua (junio-2004).

Durante la audiencia pública del Tribunal, celebrada en la Ciudad de México, se presentaron catorce casos, siete de ellos correspondientes a México. Los casos mexicanos fueron: el derrame petrolero en río y playa

Coatzacoalcos, Veracruz; la contaminación y vulneración costera en la Bahía de Zihuatanejo, en Guerrero; el proyecto hidroeléctrico de La Parota, en Guerrero; la afectación de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico; la contaminación industrial en el río Atoyac, en Tlaxcala, y dos demandas distintas relacionadas con el trasvase de cuenca del sistema hidráulico Cutzamala.

En 2011, la ANAA presentó una demanda contra el gobierno mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional, que agrupa las quejas de más de 40 comunidades agraviadas de diferentes regiones de México.

La demanda sostiene que "el examen de la realidad de la aplicación de la normatividad medioambiental del país revela que el gobierno mexicano ejerce las leyes mexicanas de maneras que no son adecuadas —y ni siquiera suficientes— para la protección ambiental, la conservación de los recursos hídricos ni la salvaguarda de los derechos individuales o colectivos de los ciudadanos mexicanos".

Su petitoria responsabiliza al gobierno mexicano de "la construcción de una crisis hídrica nacional cercana al colapso o a la catástrofe ambiental", al tiempo que señala cómo carece de políticas públicas eficaces "para proteger, conservar y mejorar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para hacer efectivo el derecho a la salud, la alimentación, el agua y un medio ambiente sano para los mexicanos. El gobierno federal mexicano —sostienen los quejosos— es también responsable y cómplice de intereses privados (nacionales y trasnacionales) que han desviado la función y el propósito básicos

del derecho en México, que no es otro que el logro de la justicia social y la elevación de la calidad de la vida de los habitantes del país. Pero también es responsable de la comisión directa de innumerables violaciones a las leyes, normas, reglamentos y procedimientos que deben normar su actuación como garante del Estado de derecho y el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial para las comunidades afectadas".

## El Tribunal Permanente de los Pueblos

El 21 de octubre de 2011 arrancó la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México. En él se juzgará la violación a los derechos humanos en México. Culminará a finales de 2013 o principios de 2014.

El TPP se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia, Italia. Su función es hacer visibles y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncian crímenes contra la humanidad. Tiene el objetivo explícito de convertir en permanente la función desempeñada por los Tribunales Russell sobre Vietnam (1966-1967) y sobre las dictaduras en América Latina (1974-1976).

El proceso en México comenzó hace dos años, cuando organizaciones sociales, civiles, defensoras de derechos humanos e individuos —entre ellos la ANAA—, entablaron contacto con la Fundación Lelio Basso, de Italia, que tiene a su cargo la continuidad del TPP, para solicitar que se llevara a cabo en México una sesión del TPP, y que para ello se conformara la sección mexicana del tribunal.

Con este fin elaboraron distintos documentos y una petitoria formal en la que se muestran las violaciones a los derechos humanos en México. El TPP aceptó abrir un expediente relativo a la situación mexicana a partir de audiencias especializadas sobre distintos temas, donde se podrán presentar casos concretos que fundamentarán y profundizarán lo planteado por la petitoria aprobada, hasta llegar a la elaboración de una denuncia formal que pueda ser juzgada por este tribunal de conciencia en su audiencia final, la cual se celebrará en nuestro país hacia finales de 2013 o inicios de 2014.

A lo largo de su historia el TPP e ha reunido en más de 40 ocasiones, juzgando hechos acaecidos en muchos países, que implican desde situaciones de genocidio hasta crímenes ecológicos.

El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. La carta fundacional que legitima su misión es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. En ella se reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre determinación.

El TPP es, simultáneamente, un instrumento, una tribuna, un espacio para la memoria, un mecanismo para dar visibilidad a los agravios y a los agraviados, un terreno para que la palabra fluya.

El título del expediente México del TPP es "Tratados de libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos". Se ha propuesto la realización de siete audiencias temáticas: violencia, guerra sucia, impu-

nidad y acceso a la justicia; feminicidios y violencia contra las mujeres; violencia contra los migrantes e inmigración como algo forzado; trabajo, precarización y desregulación laboral, y violación a derechos laborales colectivos; violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía: los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios; devastación ambiental: los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios y población en general, y medios de comunicación, su pertinencia y su urgente independencia.

El tribunal echa mano de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder. Utiliza las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos. Parte de una idea de fondo: la lucha y la promoción de los derechos humanos se da por la vía jurídica. La base de los juicios del TPP son las convenciones sobre derechos humanos de carácter internacional.

El TPP es una conciencia ética de los pueblos, no un proceso jurídicamente vinculante. Parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria.

La mesa medioambiental del TPP en México buscará que se juzgue al gobierno por la destrucción integral y sistemática de todo el medio ambiente (agua, minerales, energía, megaproyectos, urbanización salvaje, etc.) provocada por las dinámicas de desregulación ambiental generada por las políticas de libre comercio.

La impunidad no es un asunto meramente judicial. La lucha contra ella —considera el tribunal— se realiza, también, desde los preceptos de verdad, justicia y reparación de daños para todos los pueblos que son víctimas de sus derechos fundamentales. Eso es justamente lo que se quiere hacer en México.

Tanto el TPP como el TLA muestran cómo la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, tienen una dimensión internacional. Eso lo supo muy bien el ecologista social finlandés Jyri Jaakkola, quién perdió la vida en nuestro país a manos de paramilitares.

## Jyri Jaakkola: el ecologista solidario

Fue un hecho inusual. El 5 de mayo de 2010, durante la apertura de la sesión de la Eurocámara dedicada al debate sobre la eurozona, Jerzy Buzek, su presidente, lamentó el asesinato en México de dos activistas de derechos humanos: Alberta Cariño y Jyri Antero Jaakkola. "Queremos transmitir nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos, es triste que siga habiendo estos ataques".

Jyri Jaakkola fue asesinado junto a Alberta Cariño el 27 de abril de 2010. Mónica Santiago, quien viajaba con ellos, fue testigo del momento en que una bala se impactó en la cabeza de Bety Cariño; después caería el internacionalista finlandés: "Vi cuando Jyri, en un acto desesperado, tomó la cabeza de Bety y casi inmediatamente una bala le atravesó la cabeza a él. Jyri le gritó a sus compañeros que se salvaran. Fue encontrado protegiendo el cuerpo de Bety".

Jyri nació el 11 de febrero de 1977 en el este de Finlandia. Venía de una familia de izquierdas. Desde joven se ubicó en la tradición libertaria. Comenzó a estudiar filosofía y ciencias políticas en la universidad de la ciudad de Turku, en la costa. A pesar de ser un alumno brillante, descubrió que esa forma de educación no era para él. Renunció a la universidad como un acto solidario con los que no tenían la misma oportunidad de acceder a ella.

Se involucró en colectivos anarquistas y colaboró activamente en el apoyo al pueblo angoleño, golpeado severamente por la guerra civil. Empezó trabajar en la organización sin fines de lucro Estelle Uusi Tuuli (Nuevo Viento), dedicada a promover la solidaridad internacional, el comercio justo, la paz y la comprensión entre los pueblos. Era una persona tímida, sencilla y humilde, que sabía hacerse querer y respetar. La injusticia no le daba paz.

Identificado con el magonismo y la lucha zapatista, enfocó su actividad, junto con otros compañeros, alrededor de México. Coordinó la visita a Finlandia que un integrante del colectivo VOCAL hizo para denunciar la criminalización de la protesta social en México. Coincidió con este grupo en la visión sobre la comunalidad y la autodeterminación de los pueblos. En 2009 obtuvo una beca para ir a Oaxaca. En dos meses aprendió a hablar español y estableció relaciones entrañables con sus compañeros. Fue invitado por VOCAL para colaborar en la observación de derechos humanos (comunitarios) y trabajar alrededor del cambio climático, la soberanía alimentaria y la economía de la reciprocidad. Tenía un blog donde escribía

sobre Oaxaca, y sus impresiones sobre la construcción de la ecología, la autonomía y las resistencias.

Jyri era un ecologista social. Su pensamiento y su acción estaban influidos por la obra de Murray Bookchin, uno de los más influyentes pensadores anarquistas modernos y pionero en la lucha ecologista. Según Bookchin, casi todos los problemas ambientales son problemas sociales. La crisis ambiental está provocada por la sociedad capitalista, pero tiene sus raíces más profundas en las jerarquías sociales. La ecología social propone remplazar al Estado y al capitalismo con la sociedad ecológica, basada en relaciones no jerárquicas, comunidades geográficamente descentralizadas, ecoteconología, agricultura orgánica y producción de bienes en escala humana.

Jyri escribió sobre temas filosóficos, ecología y anarquismo. Se expresaba con elocuencia y exactitud. Para él no existían fronteras entre elaboración teórica y transformación práctica. Amaba la teoría y le encantaba desarrollar ideas y convencer a la gente de las bondades de la lucha libertaria.

Jaakkola consideraba que su misión estaba, sobre todo, en Finlandia, en su propia cultura. Pero reconocía que en México y América Latina podía encontrar inspiración y esperanza para construir un mundo distinto. Según él, en el continente americano existían movimientos sociales de los que se puede aprender, para trasladar sus enseñanzas a su país. Aquí hay otras maneras de vivir diferente, hay esperanza en otros caminos, y en vivir bien aparte del sistema capitalista. Por ello decía, sin ninguna duda: yo quiero estar aquí, quiero aprender de esto.

Jyri estaba al tanto de lo que sucede en México. Tenía una lectura sofisticada de la coyuntura del país. Afirmaba que hay esperanza en el cambio y experiencia de los pasados movimientos, como el levantamiento de Oaxaca de 2006, y muchas diferentes alternativas anticapitalistas comunitarias, y formas de autonomía desarrolladas por los zapatistas, además de un montón más de todo tipo de experiencias para construir un mundo diferente.

Apoyándose en Paulo Freire, Jaakkola sostenía que la solidaridad real exige que uno se coloque en la misma posición en la que se encuentra aquél con quien se solidariza. Así pues, no dudaba en estar allí donde su presencia podía ayudar a prevenir el uso de la violencia contra los movimientos sociales. Era consciente de que su condición de europeo le daba ventaja sobre los mexicanos. "Yo siempre tendré el boleto de avión de regreso a Finlandia —decía—; y está mi piel de color blanco, que funciona como una especie de protección."

El ejemplo de Jyri Antero Jaakkola muestra cómo, más allá de sus raíces locales y nacionales, el ecologismo popular no tiene fronteras. Los caminos de la resistencia ambiental son múltiples pero desembocan, con mucha frecuencia, en la necesidad de transformar radicalmente el país. Lenta pero sostenidamente, eso es lo que hace el movimiento por la justicia social.

Al analizar las luchas de los inmigrantes, la socióloga holandesa Saskia Sassen asegura que la gran mayoría de los que participaron en ellas no ganaron el poder, pero hicieron historia. "Me parece fundamental —dice—

recuperar que esta gente es la que hizo la historia sin que necesariamente se explique por un aumento de su poder." Exactamente lo mismo puede decirse hoy de los miles de luchadores ecológicos anónimos que han tomado en sus manos la tarea de frenar y revertir la devastación ambiental en México.

## FUERA DE TEXTO

Este libro nació de la invitación de Paco Ignacio Taibo II, Paloma Saiz, sus compañeros de aventuras editoriales y la Fundación Rosa Luxemburgo para publicarlo en Para Leer en Libertad. A lo largo de los últimos 15 años me he reunido regular pero informalmente con Andrés Barreda, Ana de Ita, Silvia Ribeiro y Ramón Vera, para analizar, discernir y comentar muchos de los asuntos sobre los que la obra trata. Muchas de sus previsiones originales, que yo consideraba alarmistas y desproporcionadas, se han convertido en realidad con el paso del tiempo. Sus ideas y puntos de vista atraviesan el conjunto de los capítulos. Todos ellos, junto con Gustavo Leal, Alice Brooke Wilson y otras amistades, leyeron varios capítulos e hicieron importantes sugerencias y correcciones.

Los comentarios y reflexiones del finado Ricardo Robles, de Magdalena Gómez, de Adelfo Regino, de Alberto Gómez, de Octavio Rosas, de Aldo González, de Víctor Saavedra, de Raúl García-Barrios, de Magdiel Sánchez, de Álvaro Salgado, de Annette Desmarais, de Francisco González, de Martha Singer, de Luis Meneses, de Laura Carlsen, de Adriana López, de Francisco López Bárcenas, de Francisco López Bárcenas, de Adelfo Regino y de otras personas más a las que, injustamente, no nombro, me ayudaron a normar un criterio.

En parte, este libro recupera y reelabora algunos escritos míos publicados en *La Jornada* y en la revista *El Cotidiano.* Mis compañeros del periódico, la directo-

ra Carmen Lira, Josexto Zaldúa, Elena Gallegos, Fabrizio León, Miguel Ángel Velázquez, David Brooks, Luis Gutiérrez y Guadalupe Sánchez me apoyaron, de distintas formas, en la redacción del libro. Las magníficas coberturas de mis colegas Angélica Enciso, Matilde Pérez, Rosa Rojas fueron una fuente imprescindible. Aissa García, de Telesur, siempre estuvo dispuesta a echarme una mano. Mis amigos de *El Cotidiano*, Luis Méndez (un especialista en cuestiones ambientales de la frontera norte) y Miguel Ángel Romero, me han brindado, a lo largo de muchos años, un gran estímulo y apoyo para escribir sobre este tema. A todos ellos les estoy muy agradecido pero, como se dice en estos casos, la responsabilidad final de lo que aquí se dice es mía.

## LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

Pertenece a una generación que tras el 68 mexicano se vinculó a movimientos populares alternativos. Actualmente es coordinador de *Opinión* y articulista de *La Jornada.*

A mediados de los setenta fue organizador de sindicatos independientes. Fue fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y asesor de organizaciones campesinas y cafetaleras. Participó en los Diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación para los Acuerdos de Paz en Chiapas.

Ha formado parte de proyectos de prensa crítica como *Información Obrera*, de asociaciones de promoción al desarrollo de base, y de centros de investigación como el Ceccam.

Entre sus libros se encuentran: *Chiapas: la guerra y la paz y la paz y Chiapas: la nueva lucha india*, *Sentido Contrario*. Compiló con Carlota Botey y Julio Moguel *Autonomía y nuevos sujetos sociales de desarrollo rural*, con Ramón Vera Herrera *Acuerdos de San Andrés*, y con Francisco Pérez Arce *Las luchas magisteriales 1979-1981.*

Este libro se imprimió en la ciudad de México en el mes noviembre del año 2011.

El tiraje fue de 1, 000 ejemplares para su distribución gratuita, y es cortesía de la Fundación Rosa Luxemburgo y Para Leer en Libertad A.C.

Queda prohibida su venta.
Todos los derechos reservados